

*René Herrera Zúniga*

---

# NICARAGUA

---

EL DERRUMBE NEGOCIADO

---

Los avatares de un cambio de régimen

---



320.97285

H5659n

ej.2

EL COLEGIO DE MÉXICO

**NICARAGUA, EL DERRUMBE NEGOCIADO**  
**Los avatares de un cambio de régimen**

f

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

NICARAGUA, EL  
DERRUMBE NEGOCIADO  
Los avatares de un cambio  
de régimen

*René Herrera Zúniga*



EL COLEGIO DE MÉXICO

320.97285

H5659n

Herrera Zúniga, René.

Nicaragua, el derrumbe negociado: los avatares de un cambio de régimen / René Herrera Zúniga. — México : El Colegio de México, 1994.

199 p. ; 21 cm.

ISBN 968-12-0602-9

1. Nicaragua- Política y gobierno.

Portada de Mónica Diez-Martínez

Ilustración: Eduardo Cárdenas, *Construcción*,  
acrílico sobre tela, 70 x 60 cm, 1986

Primera edición, 1994

D.R. © El Colegio de México  
Camino al Ajusco 20  
Pedregal de Santa Teresa  
10740 México, D.F.

ISBN 968-12-0602-9

Impreso en México/*Printed in Mexico*

## ÍNDICE

Presentación	11
Introducción	13
Los cambios de régimen político: el derrumbe de los regímenes socialistas y las nuevas prioridades de investigación	13
Los efectos del derrumbe socialista en los países del enfrentamiento periférico con Estados Unidos. El caso de Nicaragua	15
Las definiciones conceptuales aplicables al caso nicaragüense	17
El planteamiento general del problema nicaragüense	19
1. Los dilemas teóricos que explican los cambios en Nicaragua	29
El concepto de transición en Centroamérica	33
Las experiencias de transición en América Latina y los aportes metodológicos para la investigación sobre el caso de Nicaragua	38
La transición nicaragüense: un caso especial de cambio negociado en América Latina	46
2. La etapa de apertura del régimen sandinista: las influencias externas	49
Los escenarios internacionales de la apertura en Nicaragua: las transiciones negociadas bajo influencia internacional	49
Políticas exteriores coordinadas	52
3. La etapa de apertura negociada: de Contadora a Esquipulas, Sapoá y Managua. La ruta de un derrumbe negociado	67

Los efectos de las negociaciones directas entre el sandinismo y sus opositores	67
Efecto igualador de los contrincantes	68
Efecto sobre las legitimidades políticas	68
Efecto sobre las lealtades de los seguidores políticos de ambos bandos	69
Efecto sobre la imagen del movimiento y sus líderes	69
Efecto que produce la negociación en la población no militante	70
Efecto de la negociación sobre el discurso político	71
<b>4. La etapa de negociación: los actores internos</b>	<b>95</b>
Ascenso y caída del sandinismo: los mismos escenarios, los mismos actores	95
El sandinismo: un socialismo africano en América	98
<b>5. La resurrección de la sociedad civil: el día del castigo electoral</b>	<b>113</b>
¿Elecciones para qué?	113
Los contendientes	118
El fin de la contra a cambio de elecciones libres	122
La geografía de la guerra y la geografía electoral	127
La instalación del nuevo gobierno	128
<b>6. La etapa de emergencia en una transición negociada: el gobierno de reconciliación nacional y el proceso de pacificación</b>	<b>131</b>
La definición del concepto de pacificación en el caso nicaragüense	131
La pacificación: una interpretación en tres versiones	134
Los incentivos internacionales de la pacificación en Nicaragua	143
La pacificación limitada: las tareas gubernamentales desde 1990 hasta 1993	147
La desmovilización y el desarme de la resistencia nicaragüense	149
Reducción del Ejército Popular Sandinista (EPS)	162

7. Nicaragua: ¿el fracaso de una transición negociada?	173
¿Qué pasa realmente en Nicaragua?	176
Conciliación o confrontación. ¿Cuál estrategia seguir?	178
Éxitos y fracasos de la estrategia de conciliación	181
La defensa de la fuerza y la pérdida de la influencia política	184
Del palacio a la calle: un gobierno sin seguidores	185
El fin de una mística	186
Los asuntos económicos en una etapa de emergencia política	188
Conclusiones. Las perspectivas del cambio en Nicaragua	192
¿Hacia adónde va entonces Nicaragua?	199

## PRESENTACIÓN

Este libro es el resultado de una investigación realizada a lo largo de 1992 y 1993, misma que fue posible gracias al apoyo académico y financiero del North South Center, de la Universidad de Miami, en donde pasé mi año sabático en 1992 y gracias al respaldo constante del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de El Colegio de México, que me permitió continuar la investigación durante los primeros seis meses de 1993 en Nicaragua.

Estoy particularmente agradecido a los miembros del North South Center, Ambler Moss, Jaime Suchlicki, Robin Rosenberg, Marie Ubersax, Jeffrey Stark y Maggie Ortiz del INFO-SOUTH (Latin American Information System) por su valiosa y paciente labor de apoyo documental para mi trabajo de investigación.

Me siento muy agradecido por el respaldo institucional de El Colegio de México, especialmente de su presidente, el profesor Mario Ojeda, de la profesora Soledad Loeza, directora del CEI al inicio de mi investigación y el profesor Ilán Bizberg, actual director del CEI, así como al profesor Rafael Segovia.

Finalmente, estoy profundamente agradecido a la profesora Xóchitl Lara del Departamento de América Latina del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), por su colaboración en el proceso de investigación y redacción final del libro. Y guardo especial agradecimiento a Leonardo Somarriba quien me hizo valiosas sugerencias para la redacción final del capítulo 7 del libro, así como al Dr. Dudley Ankerson por sus comentarios a los primeros seis capítulos.

## INTRODUCCIÓN

Las transformaciones de los sistemas políticos siempre resultan una desilusión, acaso porque alimentan expectativas escatológicas que jamás se cumplen cabalmente. Las grandes expectativas traen consigo ilusiones perdidas. No obstante, la gran expectativa también nos ofreció la esperanza. El país ha sido hasta ahora como somos nosotros. Es probable que no cambie mucho en el futuro.<sup>1</sup>

### LOS CAMBIOS DE RÉGIMEN POLÍTICO: EL DERRUMBE DE LOS RÉGIMENES SOCIALISTAS Y LAS NUEVAS PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

El desmoronamiento del sistema socialista ha producido confusión y caos, propiciando el surgimiento de la violencia y la guerra civil en algunos países que formaron parte del mismo.

Semejante acontecimiento ha modificado, de manera intempestiva, las prioridades de investigación académica sobre los cambios de régimen político.

Ese viraje en las prioridades de investigación ocurre cuando estaba en su apogeo el interés intelectual, político y académico por la democracia en los países en desarrollo. Especialmente en América Latina, se habían concentrado las preocupaciones intelectuales por el establecimiento de un orden democrático. Los trabajos de Linz y Stepan: *The Breakdown of Democratic Regimes*;<sup>2</sup> los de O'Donnell, Schmitter y Whitehead: *Transitions from Authoritarian Rule*;<sup>3</sup> los de Diamond, Linz y Lipset: *Democracy in Developing*

<sup>1</sup> Gyorgy Konrád, "Melancolía de la resurrección", en *Nexos* núm. 162, México, junio de 1991, p. 45.

<sup>2</sup> Juan J. Linz y Alfred Stepan (eds.), *The Breakdown of Democratic Regimes*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978.

<sup>3</sup> Guillermo O'Donnell, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), *Transitions from Authoritarian Rule*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986.

*Countries*;<sup>4</sup> impactaron de manera profunda el análisis político de la región, impulsando la realización de numerosos y valiosos estudios nacionales, sobre el cambio de régimen.

Este esfuerzo de comprensión de los procesos latinoamericanos se fortaleció por la revisión teórica de la definición de democracia elaborada por autores que anteriormente habían contribuido a la formación de los politólogos latinoamericanos. La obra de Sartori: *The Theory of Democracy Revised*;<sup>5</sup> y la de Weiner y Huntington: *Understanding Political Development*;<sup>6</sup> han contribuido al florecimiento del interés intelectual y académico sobre las condiciones del desarrollo político en la región.

Con el derrumbe del bloque socialista en el mundo actual, la democracia se ha consolidado como el único modelo de gobierno con una amplia legitimidad ideológica. Ello impactará positivamente los estudios sobre la democracia, pero de acuerdo con la importancia política de lo que puede ocurrir en la Europa exsocialista, muchos esfuerzos, antes orientados a los estudios políticos en el mundo en desarrollo, se desplazarán hacia esa región. La consecuencia de ese giro puede ser una disminución del interés en el seguimiento de los procesos de democratización emprendidos en América Latina, alentados precisamente por toda una literatura que cumplía la función moderadora en la política cotidiana de los regímenes políticos latinoamericanos. Aun cuando esto sea válido para los países grandes de la región, en donde se están desarrollando transiciones importantes desde el autoritarismo militar, también lo es para los países pequeños que ya comenzaban a ser del interés en los estudios sobre el cambio de régimen político. Los trabajos de Laurence Whitehead y Giuseppe Di Palma: *The Central American Impasse*;<sup>7</sup> de John Booth: *Elections and Democracy in Cen-*

<sup>4</sup> Larry Diamond, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset (eds.), *Democracy in Developing Countries*, Colorado, Rienner Publishers, 1989.

<sup>5</sup> Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revised*, Chatham N.J., Chatham House Publishers, 1987.

<sup>6</sup> Myron Weiner y Samuel P. Huntington (eds.), *Understanding Political Development*, Boston, Little Brown, 1987.

<sup>7</sup> Giuseppe Di Palma y Laurence Whitehead (eds.), *The Central American Impasse*, Londres, Crom Helm, 1986.

*tral America*;<sup>8</sup> de Howard Wiarda: *Rift and Revolution: The Central America Imbroglia*;<sup>9</sup> de Mario Ojeda y René Herrera: *La política de México hacia Centroamérica*;<sup>10</sup> introdujeron el tema centroamericano en los debates sobre la democratización en América Latina, generando una importante bibliografía sobre estudios centroamericanos.

La cuestión de Centroamérica ha perdido, sin embargo, el lugar visible que venía ocupando, entre los temas latinoamericanos, durante los años ochenta. En consecuencia ha pasado a ocupar un sitio en el rincón oscuro de los países victimados por el enfrentamiento ideológico internacional.

La guerra en Centroamérica ha finalizado en su dimensión externa, pero continúa en distintas dimensiones locales. El cambio político planteado como uno de los objetivos de la guerra no parece producirse. El proyecto revolucionario respaldado por la Unión Soviética y Cuba en Centroamérica fue vencido, sin que se produzca aún el asentamiento del proyecto democrático ofrecido como alternativa. Lejos de ir en dirección a una transición hacia la democracia, como en algún momento se pensó, esos países viven apenas el drama de la pacificación; lo están haciendo en el momento justo en que el interés internacional vuelve sus preocupaciones prioritarias hacia otras zonas del mundo.

#### LOS EFECTOS DEL DERRUMBE SOCIALISTA EN LOS PAÍSES DEL ENFRENTAMIENTO PERIFÉRICO CON ESTADOS UNIDOS. EL CASO DE NICARAGUA

Nicaragua vive el drama de los países periféricos que formaron parte de la estrategia del bloque socialista en las regiones del Tercer Mundo y que fueron utilizados en su confrontación con Estados Unidos. Diversos países como Angola, Somalia, Kampuchea, Afganistán, Nicaragua y El Salvador, muestran hoy las consecuencias de haber sido parte de una estrategia de confrontación

<sup>8</sup> John A. Booth, *Elections and Democracy in Central America*, The university of North Carolina Press, Chapel Hill, 1989.

<sup>9</sup> Howard J. Wiarda, *Rift and Revolution: The Central America Imbroglia*, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, 1984.

<sup>10</sup> René Herrera Zúniga y Mario Ojeda, *La política de México hacia Centroamérica*, México, El Colegio de México, 1983.

política, ideológica y militar, entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

En la mayoría de aquellos países persisten los rasgos de violencia armada, el estancamiento económico, la pobreza extrema y una constante calificación como países problema en la comunidad regional en la que están insertos.

Identificados como “conflictos regionales”, tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, esos casos fueron consistentemente sometidos a una fórmula de acuerdo mutuo entre las dos grandes potencias. La solución negociada de los conflictos se impuso en todos los casos, primero entre las potencias mismas y luego, en un proceso de negociaciones, entre los actores armados en el nivel local. En varios casos esas negociaciones provocaron la apertura de los regímenes revolucionarios y el compromiso de someter frente a la población, en elecciones libres y vigiladas, una fórmula de pacificación nacional. Angola en África y Nicaragua en Centroamérica, fueron los dos casos más notables de esa estrategia de pacificación negociada y que fue sometida a la prueba electoral.

En Angola las elecciones fueron ganadas por el gobierno revolucionario; sin embargo, fueron desconocidas como legítimas por sus opositores y ocasionaron el resurgimiento de la guerra civil. En Nicaragua el proceso electoral lo ganaron los opositores al sandinismo, pero éstos si bien no desconocieron los resultados bloquearon al nuevo gobierno impidiéndole, incluso mediante disposiciones constitucionales, medidas que conducirían al cambio de régimen político.

Al final de cuentas el resultado ha sido similar en todos los casos: persiste la violencia en formas diversas, se agrava el estancamiento económico, abunda la pobreza extrema y renace la sensación de que constituyen un problema para la estabilidad de la región en la que están ubicados. Todo ello en un ambiente de abandono y desinterés internacional.

La situación política de Nicaragua, a finales de 1993, se presta a la discusión de las dificultades que enfrentan los cambios de régimen en el mundo de las transiciones políticas de los últimos años. A casi cuatro años de haberse establecido un gobierno electo bajo supervisión internacional, Nicaragua sigue enfrentando serios obstáculos para su estabilización política. Es un caso de guerra

civil inconclusa. Esta distinción es importante porque nos ayuda a explicar la dramática inconsistencia que revela el actual gobierno en sus tareas de estabilización política. Además, auxilia en el entendimiento de la naturaleza del conflicto político nicaragüense y sus perspectivas en el futuro inmediato, tanto en su carácter nacional como en el carácter especial que tiene en los contextos centroamericano e internacional.

Es preciso ubicar el caso nicaragüense entre los distintos procesos de cambio de régimen político que se suceden en el Tercer Mundo, por su persistente importancia para la seguridad, estabilidad y crecimiento económico integrado que vive ahora la región norte de América Latina. Aun abandonada en el interés intelectual y académico, Centroamérica sigue importando, como ayer, a los intereses nacionales de los países del área que están comprometidos con un proyecto de modernización política y económica regional. Para esas naciones, incluyendo a las centroamericanas y a México, Nicaragua requiere de algo más que la paz de las armas; necesita estabilidad política para convertirse en un país funcional a los intereses generales de América Latina.

¿Puede existir una estabilidad centroamericana, con rasgos democráticos, sin que ocurran cambios de régimen político en Nicaragua? ¿Qué se entiende por cambio de régimen?

#### LAS DEFINICIONES CONCEPTUALES APLICABLES AL CASO NICARAGÜENSE

Definimos el cambio de régimen como un proceso en el cual ocurre, por un lado, el desmantelamiento de las instituciones heredadas del pasado sandinista que impiden u obstaculizan la construcción de una política democrática y, por el otro, el establecimiento de instituciones y prácticas políticas competitivas que conducen a una democracia.

Seguimos a O'Donnell<sup>11</sup> en la delimitación que hace para definir el cambio de régimen: por una parte, el inicio del proceso de

<sup>11</sup> Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter, *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 19.

disolución del régimen anterior y, por la otra, el establecimiento de alguna forma de democracia.

En este nivel de definiciones conceptuales y periodización de etapas de cambio de régimen, los cuestionamientos pertinentes para la investigación son los siguientes: ¿en qué momento se inicia la disolución del régimen sandinista? ¿Qué elementos decisivos contiene el proceso de disolución? ¿Qué importancia tienen las negociaciones directas entre el sandinismo y la oposición armada para poner fin a la guerra civil? ¿Qué papel desempeñan, en ese contexto de negociación, las elecciones generales de 1990? ¿Qué estrategias están disponibles al gobierno electo en 1990 para llevar adelante la tarea de disolución del régimen anterior? ¿Son alternativas las estrategias de conciliación y confrontación, para operar el cambio de régimen?

Identificadas las circunstancias que rodean el análisis del gobierno electo en 1990, como gobierno de transición, dentro de un proceso de cambio de régimen, es conveniente definir y discutir el tema de las estrategias disponibles, una vez que en la práctica el gobierno electo en 1990, encabezado por Violeta Chamorro, dispuso optar por la estrategia de conciliación para avanzar en el cambio de régimen.

Definimos la conciliación como una estrategia en la cual las instituciones y los personeros del régimen anterior son incorporados en el nuevo gobierno como enlace para la democratización del país. Ello implica una cierta continuidad del régimen anterior pero, al mismo tiempo, una fórmula que permite a todos los actores que están dentro y fuera del gobierno, hacer uso de sus influencias para establecer un proceso político plural y competitivo en lo futuro.

El gobierno nuevo es el espacio en donde ocurre, por la vía de la conciliación, el replanteamiento de las fuerzas influyentes en la construcción de una política democrática.

La conciliación, como estrategia de cambio de régimen, implica ubicar y decidir sobre las instituciones que deben ser desmanteladas, considerando los intereses del gobierno anterior y los de sus opositores. Aún más, implica que la fijación de los términos de dicho desmantelamiento sea negociado de manera directa con quienes las instalaron y con aquellos que demandan su desaparición, con el fin de que ello no produzca resistencias violentas.

La definición de las instituciones que deben ser desmanteladas, la forma de hacerlo y el proceso legal para que ello ocurra dentro de las reformas constitucionales promovidas por el gobierno, ocupan el espacio y tiempo de lo que hemos denominado periodo de deflación del poder anterior.

Teóricamente, ese lapso debería ocupar una porción del tiempo constitucional del gobierno de transición, quedando destinada la otra porción al establecimiento de las instituciones democráticas. Pero debemos reconocer que no hay secuencias ni tiempos fijos en tal proceso. Y más aún, no es un proceso unilineal e irreversible en todos sus componentes.

#### EL PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA NICARAGÜENSE

Nicaragua es el único país de Centroamérica en el que se ha registrado una victoria revolucionaria con amplio y abierto respaldo soviético. El régimen sandinista, sin embargo, no logró su consolidación.

Entendemos, para fines de la investigación, que el cambio de régimen se inicia precisamente en el momento en que el sandinismo reconoce que no puede afirmarse y manifiesta su disposición para negociar con sus contrarios una fórmula política para poner fin a la guerra civil e iniciar una liberalización que modifique la naturaleza de su proyecto de régimen político revolucionario pro-socialista.

Hay diferencias sustanciales entre un régimen comunista consolidado y un régimen de izquierda revolucionaria de filiación procomunista que no logró consolidarse pero que alcanzó a desarrollar algunas instituciones totalitarias. Y al mismo tiempo, es un régimen que acompaña su imposibilidad de consolidación con la realización de elecciones abiertas y supervigiladas para definir su destino. Y pierde las elecciones.

El nuevo gobierno nace en una situación difícil para definir sus tareas. Por un lado, hereda las instituciones del régimen anterior y, por otro, es electo precisamente en un estreno de instituciones democráticas. ¿Qué hacer con aquellas instituciones y con las personas que las forjaron? ¿Utilizarlas como vínculo hacia la demo-

cracia con una estrategia de conciliación? ¿Deshacerse de ellas, confrontándolas abiertamente, como ocurrió históricamente con otros regímenes vencidos?

Estas preguntas encierran una discusión sobre las estrategias alternativas que tiene un gobierno electo en esas condiciones (conciliación o confrontación) para avanzar hacia el cambio de régimen político.

La particularidad de Nicaragua, a la luz de esa discusión, es la de un país que sufre una guerra civil, pero en la cual los actores de esta última, luego de negociar el cese al fuego, sobreviven al conflicto sin renunciar, de manera total, a su condición original de fuerzas políticas armadas. Respaldan, de manera negociada, la celebración de elecciones para la instalación de un nuevo gobierno, destinado a pacificar al país, pero no conceden a ese gobierno, una vez electo, la autonomía suficiente para gobernar. Es decir, anulan por anticipado el carácter fundacional de las elecciones, al quitarle a éstas lo que pretendían aportar como muestra del consenso entre las élites confrontadas: dar capacidad de pronóstico a la sociedad nicaragüense.

Esta explicación deja, por sí misma, aclarado el contexto en que ocurre el proceso electoral de 1990. Las elecciones nicaragüenses recogen algunas de las características de las elecciones fundacionales a las que se refieren algunos teóricos de la transición,<sup>12</sup> constituyendo, así, un refrendo de la negociación celebrada entre las élites sandinista y antisandinista enfrentadas militarmente. Pero, al mismo tiempo, se alejan del tipo de elecciones fundacionales porque una vez realizadas, los resultados muestran una derrota significativa de una de las partes, obligándola a asumir posiciones de confrontación que anulan los propósitos de la elección.

Una vez realizadas, las elecciones pierden ese sentido de consenso previo entre las élites confrontadas militarmente. La idea de que las elecciones mostrarían la orientación de los procesos posteriores, fue confundida por la oposición vencedora como un mandato para poner fin al régimen anterior; asimismo, el gobierno perdedor lo interpretó como un mandato que no implicaba la

<sup>12</sup> Véase Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter, *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, *op. cit.*, pp. 96-103.

desaparición del régimen anterior. En esa doble confusión el gobierno surge sin el anclaje que los votos parecían ofrecerle: está vacío de poder.

La primera parte de esa discusión es en torno a si es válido plantear como acción gubernamental, una estrategia de conciliación en el mismo nivel de viabilidad de una estrategia de confrontación.

La primera respuesta a esa discusión es que en el caso nicaragüense el régimen perdedor en el nivel electoral, no es un régimen vencido en el plano militar, como históricamente ocurrió con otros regímenes vencidos y dominados bajo una ocupación de fuerzas externas. Pero además, es vencido en el plano electoral por una fuerza política que, al menos en el aspecto formal, no representa a sus opositores armados. En consecuencia, en caso de ser aplicada la estrategia de confrontación significaría el reinicio de la guerra civil.

La segunda respuesta es que el gobierno electo ni se presenta ni se propone como gestor de una estrategia de confrontación. Por lo tanto, para fines de nuestro trabajo, debemos tomar la condición que él mismo asume: la condición de gobierno de conciliación nacional.

La segunda parte de la discusión es cómo deslindar, en la naturaleza de un gobierno de conciliación nacional, lo que corresponde a la definición de gobierno de continuidad y de oposición. Esto es importante porque los opositores al sandinismo tenían, antes de la elección, la convicción de que elegir un nuevo gobierno equivaldría al establecimiento de un nuevo régimen político. Las diferentes concepciones respecto al significado de las elecciones, en tanto fuente legítima para la instalación de un nuevo gobierno, conducen a los primeros problemas enfrentados por el gobierno de Violeta Chamorro con sus propios aliados electorales. Estas dificultades se agudizarían hasta llegar a la ruptura de la coalición gubernamental y poner en entredicho la legitimidad del gobierno. Los opositores al sandinismo, miembros de la coalición que ganó las elecciones de 1990, han acusado al gobierno de sostener un "maridaje inmoral" con el sandinismo.

A pesar de los problemas, cada vez más graves, el gobierno ha reiterado su voluntad conciliatoria con el sandinismo y ha impulsado, conservando la estrategia de conciliación, un diálogo con todas las fuerzas del país para definir la política futura.

Nuestro propósito es evaluar la aplicación de dicha estrategia durante los tres primeros años del gobierno de reconciliación nacional encabezado por Violeta Chamorro.

Esta evaluación nos llevó a la realización del presente trabajo, que fue desarrollado durante los años 1992 y 1993, aprovechando una estancia, durante un año, en el North South Center de la Universidad de Miami, Florida, y de una estancia en Managua, Nicaragua, en los meses de febrero a agosto de 1993.

En nuestro trabajo partimos del hecho de que la estrategia adoptada por el gobierno de Chamorro es la de la conciliación. Esta posición se debe más al carácter negociado de la transición nicaragüense, que a la simple voluntad gubernamental de no confrontar al sandinismo. Además, porque la estrategia de deshacerse rápidamente de las instituciones sandinistas tendría sentido si hubiese existido una derrota militar que lo permitiera. No es el caso nicaragüense, en el cual, más bien, se trata de una transición negociada en varios niveles, incluido el de la negociación entre las fuerzas militarmente opuestas, con amplio patrocinio internacional.

Estas últimas pusieron fin a la guerra mediante una negociación directa en Sapoá y Managua, bajo supervisión internacional, en 1988. Esa concertación hizo posible la apertura del régimen sandinista, concretada en la decisión de celebrar elecciones libres y supervisadas. En ese proceso comicial el electorado decidió rechazar la opción del sandinismo. Puesto que a la intensa polarización que vivía el país desde 1979 y, en particular, desde 1986, cuando la guerra civil llegó a su máximo nivel, las elecciones de 1990 tenían un objetivo claro: decidir el destino político del sandinismo. Debido a lo incierto de los resultados electorales, cada competidor declaró que respetaría el mandato electoral. Una victoria de la oposición significaba, en principio, que el país dejaría el modelo sandinista. Sin embargo, al conocerse los resultados desfavorables a su causa, el gobierno perdedor, desató, antes de entregar el poder, una campaña legislativa destinada a colocar "candados", incluso constitucionales, a las posibilidades de un cambio de las instituciones que consideraban irreversibles.

La colocación de tales "amarres" fue realizada sin un proceso pertinente de negociación que incluyera a quienes antes habían concertado con ellos el fin de la guerra, sino más bien el sandinis-

mo convino en secreto la transmisión del mando con el gobierno electo de Violeta Chamorro. Con ello fragmentó a las élites opositoras decisivas y dejó a un lado la posibilidad de un consentimiento entre todas ellas, para delimitar los ritmos y contenidos de la actuación gubernamental. El resultado inmediato fue el rechazo de quienes habían conformado el espíritu fundacional de las elecciones. La coalición opositora que obtuvo la victoria electoral se rompió, la resistencia nicaragüense dispuso medidas para obstaculizar su desarme y el gobierno quedó aislado de sus propias organizaciones y bases electorales.

Con el argumento de la necesidad de la conciliación, el gobierno quedó, prácticamente, en manos del sandinismo dentro de una fórmula de cogobierno.

En ese contexto, la estrategia de confrontación fue desechada por el gobierno y, de hecho, la adoptaron sus antiguos aliados convertidos junto a la resistencia nicaragüense, en oposición decisivamente antisandinista. La estrategia de conciliación gubernamental polarizó, aún más, a la sociedad nicaragüense, llevando a un temprano desencanto a la población.

El gobierno electo en 1990 optó, oficialmente desde su instalación, por la estrategia de conciliación, según lo anunció con frecuencia la presidenta Violeta Chamorro. Los personeros de administración llegaron incluso a afirmar que su gobierno era una continuación del anterior. Sin embargo, es frecuente en los círculos íntimos del gobierno de Chamorro, la versión de que el objetivo final de la estrategia de conciliación es la desandinización del país, pero que ello debe lograrse mediante políticas de reacomodos y acuerdos sucesivos con el sandinismo, que eliminen en forma paulatina, las estructuras del régimen anterior. Es una estrategia que compromete al sandinismo en su propia supresión. Al llevar al sandinismo a una posición de cogobierno, la reconciliación constituye una vía más larga, pero más eficaz que la estrategia de la confrontación, según lo argumentan sus gestores en el gobierno de Chamorro.

¿Hasta dónde era posible jugar esa estrategia cuando era evidente que el sandinismo resistiría los cambios orientados a su desaparición? ¿Y que era también evidente que al quedar fuera del gobierno, la oposición obstaculizaría los esfuerzos gubernamentales de pacificación?

Nuestro proyecto evalúa la eficacia de esa estrategia, a la luz de los acontecimientos ocurridos desde 1990 hasta agosto de 1993, cuando todos los sucesos de violencia y confrontación parecen indicar que dicha estrategia ha hecho crisis.

No es posible adelantar los resultados finales de la crisis actual, ni pretendemos llegar a conclusiones sobre las ventajas que habría tenido una estrategia diferente. Sólo podemos evaluar lo que ha sucedido y dejar anotados, siguiendo la evaluación, los rasgos que podrían ser dominantes en la evolución futura de la situación nicaragüense.

El gobierno de Violeta Chamorro, establecido en 1990, lleva recorrido un poco más de la mitad de su periodo constitucional, que finaliza en 1996. Su futuro es incierto y el desenlace de la crisis es imprevisible. Nicaragua luce hoy envuelta en un manto de confusión, caos y violencia, sin dar ninguna muestra de recuperación económica y sin posibilidades de una estabilidad política.

¿Qué es lo que ha fracasado en Nicaragua? ¿Por qué las negociaciones entre las potencias, primero, y las negociaciones entre los actores locales enfrentados militarmente, después, no han producido, con la instalación de un gobierno popularmente electo como antisandinista, la pacificación y la estabilidad política y económica del país?

Un primer acercamiento destinado a entender y explicar la situación nicaragüense, indica que la crisis actual revela las contradicciones encerradas en las negociaciones que llevaron a poner fin a la guerra civil y realizar las elecciones de 1990.

En la perspectiva del sandinismo que negoció en 1988, la paz y la democracia no formaron parte de un mismo diseño de estabilización política; la primera fue considerada por los sandinistas como instrumento de consolidación del régimen, en el corto plazo. Por otra parte, en la perspectiva de la parte opositora que negoció con el régimen, la liberalización implicada en la decisión sandinista de negociar, fue suficiente como asidero para un juego político que debería incrementarse conforme al cual el primer desgaste del régimen (negociar) conduciría al siguiente (liberalizarse) y luego al tercero (competencia electoral desfavorable) y así sucesivamente, hasta su desgaste final y el cambio de régimen. En la perspectiva del sandinismo era fundamental controlar al nuevo gobierno, en

caso de que aquél perdiera las elecciones; en la perspectiva opositora la definición del nuevo gobierno era importante, pero no decisiva para el futuro, al menos para su futuro como fuerza política armada antisandinista.

Ambas estrategias de negociación sufrieron modificaciones en la realidad; éstas no han sido suficientemente clarificadas en el análisis de lo que ocurre en el país centroamericano. Creemos que una buena parte de la confusión y caos que vive el país está creando también una confusión en los análisis de lo que sucede actualmente en Nicaragua.

Algunos aspectos de esta confusión se relacionan con una apreciación sobre el significado de las elecciones de 1990.

Los sandinistas perdieron estas últimas, ofreciendo una confirmación favorable a la estrategia de la oposición, pero sus opositores armados no sólo no ganaron el gobierno, sino que no pudieron colocar a sus hombres clave en la nueva administración. Más aún, perdieron a sus aliados políticos, quienes abandonaron tempranamente el respaldo al gobierno electo. Esta situación dejó al sandinismo en una posición de cogobernantes frente a una oposición político-militar unificada y sin responsabilidades políticas gubernamentales.

Esta apreciación no debe, sin embargo, confundir el significado de la estrategia de conciliación, pues aunque el gobierno quedó en una situación más cercana a los intereses sandinistas que a los intereses de la oposición, ello no significaba por anticipado que se produciría la consolidación del sandinismo o la desaparición del antisandinismo armado.

Más bien, esa peculiar estrategia gubernamental dejaba que la competencia de los actores armados se dilucidara en una mezcla de renegociaciones constantes en las que el gobierno cumplía una función de facilitador, más que de autoridad, de acuerdos sin responsabilidad directa de su incumplimiento. Frente a dos ejércitos que no controla, el gobierno sólo es útil como mesa de negociación a la que llegan los verdaderos actores con el fin de dilucidar sus competencias de poder.

Las elecciones de 1990 no respondieron a las expectativas de los electores; por ejemplo, dar a la sociedad nicaragüense una capacidad de pronóstico sobre el futuro político nacional.

En realidad el poder continuó en manos de quienes lo tenían antes de las elecciones, y la capacidad para ejercerlo apenas cambió con los resultados electorales. Esta situación propició que pronto se perdiera la ilusión del cambio político por medio de la vía electoral, creándose una situación extraña dentro de los procesos de situación de régimen ocurridos en América Latina.

El actual estado de confusión y caos que existe en Nicaragua muestra que la presidenta gobierna en un pantano. Sin embargo, constituye el escenario donde ocurre la redefinición de fuerzas. El gobierno resulta, en esta visión de nuestro proyecto, más importante de lo que parece a primera vista. En ese sentido se comprende que la evaluación de su comportamiento, especialmente en su estrategia de conciliación, sea fundamental para el estudio de la transición nicaragüense y para sus perspectivas.

El hecho de que el gobierno de Chamorro parezca débil, al punto de parecer una continuidad del sandinismo, no debe confundirse con el hecho real de que los cambios que se iniciaron como consecuencia de la negociación para poner fin a la guerra en 1988 son irreversibles, y que la lentitud observada en la toma de decisiones gubernamentales para llevarlos a la práctica sólo refleja la magnitud de los problemas que encierra la estrategia de conciliación. Esto último representa una situación irritante para los opositores al sandinismo, que no logra, sin embargo, ocultar que el país está cambiando. Finalmente, al concluir 1993 la situación está cambiando en una dirección que no coincide con exactitud en ninguna de las dos visiones con las que los actores principales de la guerra civil enfrentaron el reto de negociar la paz en 1988, pero tiende a ser más cercana a los intereses de la oposición en el largo plazo.

Este tipo de situaciones se parece poco a la que surge en los gobiernos de transición que aparecieron después de los gobiernos militares en el Cono Sur, a pesar de que estos nuevos gobiernos han usado la estrategia de reconciliación con el pasado. Asimismo, se parece poco, también, a los gobiernos instalados luego del bloque socialista, en cuanto a que éstos han usado más la estrategia de confrontación con los anteriores regímenes.

En Nicaragua, la circunstancia de la guerra civil previa a la transición hace la diferencia. Los hombres de la guerra continúan imponiendo el ritmo y la profundidad de los acontecimientos

políticos que definen la transición del sandinismo hacia la democracia.

Este libro pretende analizar algunos de los problemas actuales del cambio de régimen político en Nicaragua. El esfuerzo de investigación está concentrado en establecer: *a)* cuáles fueron las condiciones, nacionales e internacionales, en que se inició el cambio del régimen sandinista; *b)* cuáles fueron y cómo operaron los mecanismos escogidos que propician dicho cambio, en particular las negociaciones entre el gobierno sandinista y la oposición armada; *c)* cuáles fueron las consecuencias de esas negociaciones en la organización y resultados de la contienda electoral de 1990; *d)* cuáles son las particularidades del caso nicaragüense en la formación del nuevo gobierno, respecto de la definición de sus tareas prioritarias y en la secuencia prevista para su realización y *e)* finalmente, cuál es la situación actual de los cambios de régimen: los avances y retrocesos durante los tres primeros años del nuevo gobierno, en materia de pacificación, estabilidad política y recuperación económica.



## 1. LOS DILEMAS TEÓRICOS QUE EXPLICAN LOS CAMBIOS EN NICARAGUA

Durante los últimos años, numerosos estudios latinoamericanos enfocan sus análisis hacia la teoría de la transición a la democracia. Esto es particularmente válido para los estudios que se realizan con el fin de analizar los cambios del autoritarismo a la democracia en los países del Cono Sur, en la década de los ochenta.

Un nutrido grupo de académicos latinoamericanos, norteamericanos y europeos, se dieron a la tarea inicial de estudiar los autoritarismos en América Latina, estimulados por los avances teóricos de las investigaciones de Juan Linz sobre el régimen franquista español.<sup>1</sup> Posteriormente, cuando a comienzos de la década de los ochenta, los regímenes autoritarios del Cono Sur iniciaron una apertura política, la mayoría de aquellos autores continuaron los estudios de transición del autoritarismo hacia la democracia, tomando como base trabajos suyos de análisis comparados.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Los trabajos compilados por David Collier en *The New Authoritarianism in Latin America*, Princeton University Press, 1979 y el libro de Guillermo O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*, Berkeley, University of California, 1973, fueron esenciales en esa dirección de investigación.

<sup>2</sup> El Programa Latinoamericano del Centro Woodrow Wilson produjo una serie de investigaciones sobre el tema "La transición del autoritarismo a la democracia", con autores como Guillermo O'Donnell, Marcelo Cavarozzi, Laurence Whitehead, Luciano Martins, Antonio Garretón, Julio Cotler, Charles Gillespie, Terry Lynn Karl, Kervin Middlebrook, Phillippe Schmitter, Adam Przeworski, Alfred Stepan, Robert Kaufman, Fernando H. Cardoso, John Sheahan y Abraham Lowenthal. Véase Guillermo O'Donnell, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead (compiladores), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, 4 vols., Buenos Aires, Paidós, 1988. Los trabajos de Juan Linz, "The Transition from Authoritarian Regimes to Democratic Political Systems and the Problems of Consolidation of Political Democracy", en *ISSA Tokyo Round Table*, marzo, 1982, y "Crisis, Breakdown and Reequilibration" en el libro editado conjuntamente con Alfred Stepan, *The Breakdown of Democratic Regimes*, vol. I, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978, estimularon las investigaciones comparadas, así como el debate teórico sobre el tema.

Los resultados de las investigaciones sobre los cambios en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, se diseminaron rápidamente en numerosos centros de investigación y docencia de Estados Unidos, y se proyectaron con rapidez hacia sus similares latinoamericanos, propiciando una variedad de estudios nacionales en los que ha prevalecido la noción de que, en general, los países de América Latina están abandonando las maneras autoritarias de hacer política y comienzan a adoptar formas democráticas de comportamiento. La idea de transición empezó a tener una notable aceptación académica, pero también política, en toda la región latinoamericana.<sup>3</sup>

Muy rápidamente el concepto teórico de la transición dominó los escenarios de la investigación de las ciencias políticas y fijó los parámetros que definirían la acción política en América Latina. Al igual que ocurrió con otros conceptos que tuvieron gran aceptación en otros momentos de América Latina (el desarrollismo y la dependencia), el concepto transición, utilizado por los académicos, fue cooptado por las fuerzas políticas para autodefinirse o plantear sus planes hacia el futuro frente a sus seguidores o a sus adversarios. Con la asociación de dicho concepto a una serie de temas, políticamente candentes —por ejemplo, los de elecciones libres, el pluralismo y los partidos políticos, los sistemas electorales, la seguridad del Estado, el papel de las fuerzas armadas, etcétera— la mayoría de las investigaciones aplicadas a casos nacionales se convirtieron en una agenda política para los partidos y sus respectivos liderazgos.

Juntos, académicos y políticos, con la cobertura amplia de una cooperación política internacional de organizaciones internacionales, colocaron el concepto de transición democrática en un terreno fértil: urgencia de protección intelectual al frágil proceso de traspaso negociado del mando de militares a civiles en países con una historia reciente de confrontaciones ideológicas y armadas.

Visto en esa perspectiva utilitaria, el uso de la teoría de la transición democrática para dar sustento intelectual a la acción política ha tenido, en el caso latinoamericano, el mérito de ser

<sup>3</sup> El término "transición" es usado en el discurso político gubernamental como sustituto del término "cambio".

realizado por grupos plurales generalmente en conflicto y, por ello en cierto modo generadores de una alianza inusitada, entre intelectuales, líderes políticos, líderes militares y organizaciones políticas internacionales. Constituye, en definitiva, una alianza que se ha convertido en una guía de campañas de educación cívica que tiene como objetivo revalorar la importancia del ciudadano en la práctica política.<sup>4</sup>

El concepto de transición democrática comienza a asumir en América Latina como interés primordial de una empresa política deliberada: fomentar el acuerdo entre las élites respecto de cuestiones fundamentales no resueltas durante las experiencias populistas, revolucionarias y autoritarias, de las últimas décadas.<sup>5</sup>

En la actualidad existen dos situaciones prácticas que afectan el buen desempeño de los usos teóricos de la transición. La primera se presenta cuando se toma una posición política; el concepto de transición democrática queda entonces atado a la suerte de quienes participan en el desarrollo de cualquier evento. La deslegitimación de los hombres de la transición, en unos casos, y, en otros, las severas dificultades para justificar la teoría de una separación tajante entre política, economía y sociedad en los países latinoamericanos, ha quitado al concepto muchas de sus virtudes originales. La crisis presidencial en Brasil, así como las crisis de gobernabilidad en Perú, Venezuela y Colombia, han evidenciado la idea de que se marcha en una dirección radicalmente nueva y distinta.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Desde posiciones políticas opuestas, izquierdas y derechas empujaron, en el pasado, una visión profundamente autoritaria de la vida política y social. Lo nuevo es esa perspectiva democrática de la mayoría de las corrientes ideológicas de América Latina. Véase una discusión al respecto en Guillermo O'Donnell, "Introducción a los casos latinoamericanos", en Guillermo O'Donnell, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, vol. 2, Buenos Aires, Paidós, 1988, pp. 34-35.

<sup>5</sup> Al respecto, véase la discusión en las notas de Marcelo Cavarozzi y de Ludolfo Paramio, en *Nexos*, núm. 168, México, diciembre de 1991.

<sup>6</sup> La democracia necesita el respaldo de una economía en crecimiento, de tal manera que favorezca la justicia social. El 46% de los latinoamericanos vive en niveles de pobreza. En esas circunstancias la oleada de democratización que ha vivido la región durante la década de los ochenta, puede resultar seriamente afectada. En estos momentos América Latina es, sin duda, más libre que hace una

La segunda consiste en que una buena cantidad de aportes metodológicos para el análisis de situaciones de cambio político, como resultado de las investigaciones sobre la transición en países latinoamericanos, fueron poco explorados para privilegiar, en cambio, la producción de tendencias adecuadas para la acción política.

La rapidez con que el avance de las investigaciones se mezcla en la acción política, deja sin que fructifiquen logros importantes para el desarrollo de las ciencias sociales. Las fundaciones que financian las actividades académicas, privilegian los temas de acuerdo con la relación que éstos tienen con la acción política latinoamericana, entrando con ello en un ciclo de producción de modas académicas convertidas en modas ideológicas.

No hay duda que el trabajo de los intelectuales y los académicos de América Latina ha sido significativo en la definición de la realidad política. Las vicisitudes ideológicas en las que se enfrascaron las sociedades latinoamericanas desde la década de los sesenta las sustentaron, también, intelectuales y universitarios. Los resultados autoritarios, en unos casos y totalitarios, en otros, que fueron consecuencia de dichas situaciones provocaron que se olvidaran muchas de las aspiraciones democráticas consecuentes con la modernización de la posguerra. La obstinación por el desarrollo tradicional durante los años cincuenta, fue sustituida por la porfía de la revolución y la contrarrevolución, a partir de las décadas de los sesenta y los setenta; sin embargo, luego fue subrogada por este nuevo empeño por la democracia, en los ochenta y los noventa.<sup>7</sup>

---

década, pero hay tendencias que quisieran un retorno al autoritarismo. En especial se observa en algunos de los países que viraron a la democracia en el bloque socialista y en el Tercer Mundo. El resto de los años noventa puede ofrecer una disminuida perspectiva de democratización, como indicó R. Bruce McCollm, director ejecutivo de Freedom House, cit. por *U.S. News and World Report*, enero, 1993, p. 69.

<sup>7</sup> Las escaladas ideológicas en América Latina reflejan "la adopción en masa de las ideologías", con efectos dramáticos sobre el desarrollo político y económico de los países latinoamericanos. Véanse los trabajos recientes de Albert O. Hirshman, así como su artículo "Opiniones obstinadas y democracia", en *Breviario político*, México, CIDE, 1990, y su libro *Retóricas de la intransigencia*, México, FCE, 1991.

De acuerdo con la costumbre latinoamericana, especialmente en los círculos intelectuales y académicos, de incorporarse a las adopciones colectivas de una determinada corriente de pensamiento, valdría la pena guardar cierto escepticismo sobre esta nueva adopción y preguntarse hasta dónde esta suma de esfuerzos de intelectuales y académicos en favor de la democratización corresponde a la realidad o si se trata sólo de una tendencia coyuntural.

De todas maneras, esta unidad de propósitos políticos entre sectores tradicionalmente contrarios (intelectuales y políticos) tiene el mérito de que facilita el consenso entre las élites para aceptar límites a la noción democrática de los procesos de liberalización política. Quizá el reconocimiento de esos límites sea la característica central que unifica a todos los procesos englobados en la tendencia general de democratización en América Latina.

#### EL CONCEPTO DE TRANSICIÓN EN CENTROAMÉRICA

Rodolfo Pastor, en su libro *Historia de Centroamérica*, destaca la aparición de la transición democrática en la región como una huida de los militares frente a la crisis:

..tenían sus manos llenas. Seguir en el gobierno no resultaba atractivo bajo la crisis y, ante el previsible empeoramiento de ésta, decidieron entregar el gobierno a los civiles.<sup>8</sup>

Los hechos demostrarían después que se trataba de algo más que una graciosa huida. Desde 1979, con el arribo de los sandinistas al poder en Nicaragua, el concepto de transición democrática fue ampliamente utilizado en los escenarios del conflicto centroamericano, como parte de una estrategia de contención a los movimientos revolucionarios que planteaban la transición al socialismo.

Sin importantes apremios teóricos y con poco sustento intelectual, los gobiernos militares de Honduras, El Salvador y Guatema-

<sup>8</sup> Rodolfo Pastor, *Historia de Centroamérica*, México, El Colegio de México, 1988, pp. 242-243.

la, pasaron a manos civiles por la vía electoral. Partidos políticos que en el pasado habían sido excluidos de la competencia política reaparecieron y ganaron las elecciones presidenciales en Guatemala y El Salvador; asimismo, nuevos liderazgos políticos partidarios en Costa Rica y Honduras se afirmaron en la presidencia. Estos cambios provocaron lo que discretamente se denominó la “Consolidación de las democracias frágiles”,<sup>9</sup> unos puntos más cerca de las transiciones ocurridas en los regímenes autoritarios de América Latina, sólo que operando en tiempos de guerra.

¿Democracia en tiempos de guerra? Las anteriores versiones de la contrainsurgencia en América Latina excluían, precisamente, toda posibilidad de pluralismo y competencia política y dejaban en suspenso las garantías ciudadanas. Los autoritarismos sudamericanos combatieron los intentos insurreccionales y colocaron en una situación de incertidumbre las instituciones políticas consagradas constitucionalmente. En las condiciones centroamericanas, de alta comunicación interestatal, la consolidación de un Estado revolucionario socialista en Nicaragua planteaba serios problemas a los estados vecinos. Para éstos, la guerra de contención al sandinismo, impulsada por los propios nicaragüenses, resultaba insuficiente. En el nivel centroamericano, la estrategia antisandinista debía incluir una oferta política de parte de los gobiernos militares, de manera que fuese alternativa a la oferta revolucionaria. Esa opción, debía ser lo suficientemente atractiva como para generar, en los actores políticos centroamericanos, un interés distinto al de asociarse con las guerrillas locales.

El riesgoso comportamiento de importantes sectores de la élite nicaragüense en 1979, caracterizado por su apoyo al sandinismo, preocupó primero y unificó después a los sectores sociales poderosos de los restantes países del área. Esta situación permitió, con extraordinaria rapidez, que se procesara, entre ellas, un acuerdo cívico-militar con el objetivo de traspasar el mando a gobiernos civiles que surgieran de elecciones democráticas. En Guatemala, El Salvador y Honduras ocurrió ese traspaso de mando, justo

<sup>9</sup> Título de un artículo de Laurence Whitehead, “The Consolidation of Fragile Democracies: A Discussion with Illustration”, en *Consultation Paper*, 20 de noviembre de 1986.

cuando los sandinistas no ocultaban su alianza con los cubanos y con el gobierno de la antigua Unión Soviética para consolidar su revolución con el poder militar; sin embargo, esta estrategia tuvo como respuesta —durante 1982 y hasta 1986— una fuerte campaña militar antisandinista, puesto que habían convertido su victoria política en un intento de victoria militar, forjada en alianzas originales. En esa conversión encontraron una rápida resistencia centroamericana que privilegió los aspectos políticos sobre los militares, que colocaron al sandinismo en una posición militarista excesivamente vulnerable a los cambios político-electorales de la región.

El cambio del mando militar a civil siguió en Centroamérica muchas de las rutas establecidas por otros gobiernos militares de la región latinoamericana: la celebración de elecciones como vía de traspaso. El pacto para la realización de elecciones fue posible porque incluyó la fijación previa por parte de los militares de límites precisos a la participación de quienes contenderían electoralmente; de igual manera, concedió espacio sólo a los partidos y liderazgos que estuvieran dispuestos a aceptar un juego controlado, con reglas definidas para regular la presentación y mediación de demandas populares y, en particular, con una visión clara frente al problema de la guerra misma y la actuación de los militares en ella.<sup>10</sup>

En las circunstancias del triunfo revolucionario en Nicaragua y su propuesta de transición al socialismo, la estrategia adoptada por los gobiernos centroamericanos consistía en contener, por la vía política, el avance de las propias guerrillas locales que seguían el proyecto de transición nicaragüense. Lo anterior sólo sería posible si los militares se asociaban, asumiendo un riesgo bien calculado, con partidos capaces de potenciar la gobernabilidad en tiempos de crisis: partidos opositores previamente excluidos y cuyos líderes hubiesen tenido el mérito de actuar históricamente como oposición cívica. En Guatemala y El Salvador ese hecho signifi-

<sup>10</sup> En todos los estudios de transición realizados para los países sudamericanos existe una referencia clara a estos aspectos, debido a que los regímenes autoritarios fueron, básicamente, militares.

caba abrir el espacio a la democracia cristiana. En ambos casos, esta última preparó el camino para reimplantar gobiernos civiles.<sup>11</sup>

La repercusión práctica del traspaso de gobierno por la vía electoral, era ofrecer a la población una alternativa a la propuesta guerrillera, que lograra, además, reducir la tentación en sectores de la élite civil para alentar la construcción de coaliciones funcionales a la guerrilla y, finalmente, disminuir, a nivel internacional, las presiones sobre los gobiernos militares en materia de derechos humanos y prácticas políticas competitivas.<sup>12</sup>

La búsqueda de soluciones a la intensa crisis político-militar en los países centroamericanos, además de llevar al traspaso de los gobiernos militares a manos de civiles, en Honduras, El Salvador y Guatemala, trajo la aparición de procedimientos de negociación política entre fuerzas políticas opuestas. En realidad constituyó un evento extraordinario, pues esta situación no había sido muy usual en Centroamérica. Los pactos intraélite eran frecuentes pero quedaban reducidos a compactos grupos cívico-militares que actuaban por un consenso defensivo frente a las amenazas revolucionarias. Esos procedimientos de negociación política demostraron su eficacia en El Salvador y Guatemala. En ambos países la lucha de los ejércitos oficiales contra las guerrillas pudo realizarse con la legitimidad gubernamental. Justificados en su acción puramente mili-

<sup>11</sup> La democracia cristiana salvadoreña tuvo destacada participación en los sucesos posteriores al golpe de Estado de 1979 en contra del general Romero. Napoleón Duarte fue la figura central en ese periodo; posteriormente, en 1984, ganó las elecciones presidenciales. En Guatemala, la democracia cristiana triunfó en 1986.

<sup>12</sup> La aceptación de Napoleón Duarte para presidir la junta cívico-militar en 1980, fue significativa para impedir las alianzas de sectores democrata-cristianos con la guerrilla izquierdista. Aunque esas coaliciones surgieron en la formación del Frente Democrático Revolucionario (FDR), la decisión de Duarte propició una bandera centrista. En consecuencia, el desempeño de la democracia cristiana fue decisivo para la celebración de elecciones de una Asamblea Constituyente en 1982, en la que no obtuvo mayoría, pero que provocó una estrategia político-electoral que desviaría los deseos de alianzas con la guerrilla y que, además, concentraría de manera organizada los temores de los sectores conservadores. La Alianza Republicana Nacionalista (Arena), formada en 1981 bajo estilos militares, fue convirtiéndose en un verdadero partido político a tal grado que en 1988 ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, y en las municipalidades del país y, un año después, las elecciones presidenciales.

tar, los ejércitos, al subordinarse a los civiles, no podían ser cuestionados. Hacían su trabajo de militares contra militares.

La sensación de que los países centroamericanos han encontrado una ruta para superar la guerra, ha alimentado, a su vez, la idea de que la democracia es posible en los pequeños estados centroamericanos.<sup>13</sup> La primeras prácticas electorales abiertas y competitivas han alentado la tesis de que la posibilidad democrática existe en países tradicionalmente ligados a una cultura autoritaria y belicista.

Si bien es difícil aceptar que la práctica electoral sea una muestra suficiente para marcar una ruta democrática,<sup>14</sup> en especial porque ha sido una ruta visiblemente orientada a reaccionar frente a una amenaza externa,<sup>15</sup> es un paso que representa una oportunidad de consecuencias futuras positivas para la democratización. La liberalización política que se ha desarrollado durante la última década ha enseñado que la ampliación de los acuerdos intraélite son posibles y de que pueden servir para alentar nuevos y más profundos acuerdos hacia el futuro.

<sup>13</sup> A los primeros presidentes civiles los han sustituido nuevos mandatarios civiles. Aunque ello parezca insuficiente, para la situación centroamericana es bastante. Los partidos que ganaron primero la presidencia, la han perdido a manos de sus contrarios. Elecciones y alternancia en el poder parecen llevar un ritmo de comportamiento político que sugiere un futuro optimista para la política centroamericana.

<sup>14</sup> La celebración de elecciones puede reflejar la liberalización del régimen por razones de presiones externas o acomodos intraélites temporales, sin que ello signifique un movimiento real y permanente hacia la democracia. Véase una discusión sobre este asunto en John A. Booth, "Toward Reconciliation and Democracy in Central America: Possible Roles for External Assistance", en Joaquín Roy (ed.), *The Reconstruction of Central America*, Miami, North South Center, University of Miami, 1992, pp. 343-345.

<sup>15</sup> El consenso entre las élites para trasladar los mandos del gobierno a manos civiles, reafirmó, sin embargo, la decisión gubernamental (militares y civiles) de enfrentar las amenazas extremistas internas que pudieran estar ligadas con el exterior. En Honduras se reforzó el aparato de seguridad estatal y se mantuvo un estrecho control sobre las actividades de los sindicatos, los grupos no incorporados en los procesos electorales y los estudiantes. Véase Mark Rosenberg, "The Military in Politics: From Populism to National Security in Honduras, 1972-1983", Paper Presented to the LASA Meeting in Mexico, septiembre de 1993.

Sin embargo, ahora que ha fracasado la transición al socialismo en Nicaragua, que ha sido frenada la insurgencia guerrillera en El Salvador y Guatemala, la idea de la transición a la democracia puede perder la fuerza estratégica que tuvo en los años anteriores. El retorno a los cauces tradicionales de enfrentamiento político en los que prevalecen razones estructurales ligadas con la economía y la desigualdad social y no las razones de alineamiento ideológico internacional, pueden conducir a un reforzamiento de las conductas autoritarias de la sociedad centroamericana.

A su vez, la distensión internacional, que se presenta cuando terminan los conflictos asociados a la guerra fría en Centroamérica, puede dejar abandonado en la mitad del camino al proceso de democratización centroamericano. El cambio de administración en Estados Unidos en beneficio de los demócratas, puede significar un indicio para incrementar las presiones sobre los sectores más conservadores. Aumentar las tensiones, en la derecha y en la izquierda de la política centroamericana, como consecuencia de la incertidumbre respecto de la política norteamericana, puede conducir a un extraño proceso de estancamiento político en toda la región. La idea de transición a la democracia estaría perdiendo la fuerza estratégica que tuvo en los últimos años y se convertiría en una demanda política de proyecciones distintas. El paso de la liberalización política a la democratización, puede encontrar ahora más resistencias que en el pasado. La guerra que obligó a un consenso intraélite ha terminado. ¿Cuál será ahora el sustento de un nuevo pacto intraélite?

La oportuna sugerencia de un incremento de la cooperación y la integración centroamericana, como mecanismo de apoyo a la democratización, ha quedado tan sólo en eso, una insinuación sin visos de viabilidad en las circunstancias actuales.

#### LAS EXPERIENCIAS DE TRANSICIÓN EN AMÉRICA LATINA Y LOS APORTES METODOLÓGICOS PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO DE NICARAGUA

La investigación sobre los cambios de régimen político en Nicaragua enfrenta algunos de los problemas centrales encontrados en las investigaciones sobre la transición del autoritarismo a la demo

cracia en los países del Cono Sur. Pero, como lo ha demostrado el caso nicaragüense, en los tres primeros años del gobierno de Violeta Chamorro, este proceso es más complicado que el que ocurrió durante las aperturas políticas en los países sudamericanos.

Con el fin de ser más específicos respecto del caso nicaragüense es preciso hacer un deslinde entre los distintos escenarios de transición ocurridos en la última década.

Debido a que el sandinismo no logró consolidarse en una determinada naturaleza política —totalitaria al estilo exsoviético-cubano o autoritaria al estilo de las dictaduras militares sudamericanas—, resulta difícil hacer comparaciones con las transiciones ocurridas en esos regímenes.

La adopción de la ideología socialista vincula al sandinismo con el modelo exsoviético, pero en su desarrollo logra solamente privilegiar una parte de las instituciones totalitarias de ese campo. El sandinismo, más bien, se quedó en el camino de un socialismo al estilo africano, un socialismo tercermundista, de los que se desarrollaron en la década de los setenta en África, Asia y el Medio Oriente.<sup>16</sup>

Pero también el caso nicaragüense es diferente a los de las aperturas de los regímenes autoritarios de América del Sur.

En primer lugar, el cambio de régimen del autoritarismo a la democracia, de acuerdo con numerosos estudios sobre el Cono Sur, se explica en los orígenes temporales de dichos regímenes. Su carácter provisorio define, de antemano, que habrá un momento en que se retornará a la vida regular.<sup>17</sup> Una normalidad más o menos

<sup>16</sup> Carmen Diana Deere, en su trabajo "Reforma-agraria, organización de la producción y participación obrero-campesina en la transición", en J. Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *La transición difícil*, México, Siglo XXI, 1986, pp. 215-254, enlista a Nicaragua junto con doce "países periféricos del Tercer Mundo que están en transición al socialismo" (Vietnam, Cuba, Argelia, Siria, Yemen, Tanzania, Somalia, Etiopía, Guinea-Bissau, Mozambique, Angola y Zimbabwe); Roger Burbach, en "El imperialismo norteamericano y las nuevas sociedades revolucionarias", en J. Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *op. cit.*, pp. 363-401, menciona a Nicaragua junto con catorce nuevos estados revolucionarios que emergieron en el Tercer Mundo entre 1974 y 1980.

<sup>17</sup> Desde un punto de vista teórico, esos regímenes se asumieron a sí mismos como provisorios, jugando un papel de emergencia, para luego, resueltas sus tareas, retornar a la normalidad democrática. Véase a Linz, "The Transition from Authoritarian Regimes to Democratic Political Systems and The Problems of Consolidation of Political Democracy", en *IPSA Tokyo Round Table*, marzo, 1982, p. 14.

previsible para todos los actores, aunque sólo algunos pocos participan en la fijación de las reglas para volver a ella.

En segundo lugar, porque esa definición de temporalidad señala con oportunidad que el cambio ocurrirá mediante un proceso de decisiones tomadas en el seno mismo del régimen, ampliado luego con la participación, por invitación, de algunos actores civiles seleccionados por aquél.<sup>18</sup>

En tercer lugar, no son regímenes que cambian por la fuerza de la presión militar opositora que los obliga a negociar el poder, sino que más bien escogen el momento adecuado, cuando la confrontación ha disminuido y se sienten más seguros de los resultados de su propia decisión o conservan la seguridad de controlar su propia debilidad frente a sus opositores.<sup>19</sup>

Por último, la apertura del régimen autoritario toma sobre todo un camino de redemocratización o restauración democrática, más que la ruta de un cambio táctico destinado solamente a superar las dificultades.<sup>20</sup> Aunque esos regímenes pretenden amarrar ciertos hilos del poder en forma preventiva, su amenaza de retomar a éste si el nuevo gobierno fomenta la venganza o el desorden o pierde la capacidad de control, no constituye en realidad una acción destinada a impedir el retorno a la constitucionalidad. Fundamen-

<sup>18</sup> La discusión de O'Donnell sobre la división en el seno de los regímenes autoritarios entre "duros" y "blandos", es relevante para identificar a los propugnadores de la apertura. Véase Guillermo O'Donnell, *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, vol. 4, Buenos Aires, Paidós, 1988, pp. 36-38.

<sup>19</sup> El caso de la transición argentina recoge elementos diferentes debido a que ocurrió luego de la guerra de las Malvinas. Aunque la apertura siempre estuvo en la agenda de los militares y civiles asociados, no fue asumida como una empresa política deliberada, con estrategias y puntos de partida calculados para producir un resultado totalmente predecible. La guerra y sus consecuencias hizo que el cambio fuese abrupto, pero no fue la causa del cambio. Véase Carlos Floria, "La turbulenta transición de la Argentina secreta", en Raúl Alfonsín *et al.*, *Agenda para la consolidación de la democracia en América Latina*, IIDH, CAPEL, San José, 1990, p. 53; el caso nicaragüense es también diferente, pues sucede bajo la presión militar de sus opositores.

<sup>20</sup> Linz ubica a los países del Cono Sur como estados en proceso de redemocratización o restauración democrática; Linz, "The transition...", *op. cit.*, p. 5.

talmente, la apertura devuelve legitimidad a la autoridad militar. Las fuerzas militares y policíacas recobran su sentido institucional.

Por estas razones es pertinente preguntarse por qué la apertura política nicaragüense es distinta a la de los regímenes autoritarios sudamericanos. El tipo de régimen que los sandinistas intentaron no era provisorio. Estos últimos plantearon e intentaron una refundación del Estado y de las relaciones entre la sociedad y el Estado, conforme a sus proposiciones ideológicas marxista-leninistas, y fracasaron. Sus objetivos y una buena cantidad de políticas seguidas para lograrlos, estaban guiadas por la idea de transición al socialismo. Se trató, sin embargo, de un régimen que no logró establecerse en su propia definición, desenvolviéndose más bien en direcciones contradictorias que terminaron por producir una mezcla de políticas incoherentes respecto de los propósitos ideológicos.

Aun cuando las formas de negociación para el cambio del régimen sandinista pueden recoger algunos elementos de las formas de negociación que adoptan los regímenes autoritarios para realizar sus aperturas, las diferencias abundan; veamos algunas de ellas:

El sandinismo no escoge el momento para iniciar la apertura, sino que lo hace cuando está agobiado por la guerra, por el desastre económico y por la presión internacional; es decir, su posición se encuentra debilitada.<sup>21</sup>

No selecciona a sus interlocutores, sino que tiene que aceptar a sus contrarios para definir los términos de la apertura.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> En 1986 la situación económica y social era desastrosa; Daniel Ortega declaró: "No tenemos la fórmula para resolver los problemas, pero sí tenemos que encontrar formas para enfrentarlos... Hay que controlar esta crisis porque no está en nuestras manos hacerla desaparecer... las medidas las tomamos para enfrentar la crisis, no para resolverla, para que la crisis no nos arrolle", citada en *Envío*, núm. 57, Instituto Histórico Centroamericano, Managua, marzo, 1986, p. 9a.

<sup>22</sup> Las negociaciones con la contra se iniciaron de manera directa en 1988; en septiembre de 1987. Daniel Ortega declaró: "No dialogaremos con la contra", citado por *El Nuevo Diario*, Managua, 20 de septiembre de 1987, p. 1; días después, el 11 de octubre, el comandante Bayardo Arce declaró al diario *Barricada*: "Sobran las voces demandando diálogo con la contrarrevolución, pero para cerrar cualquier expectativa les decimos que no habrá negociaciones con la dirigencia contrarrevolucionaria", en *Barricada*, Managua, 11 de octubre de 1987; el 6 de diciembre, Arce declaró: "El Frente Sandinista ratifica su posición firme de no hablar directamente con la contra", en *Barricada*, Managua, 6 de diciembre de 1987, p. 1.

Adolece de un proyecto de normalidad compartida con sus contrarios, es decir, no sabe la conclusión del proceso y, aunque intente definirlo bajo los términos ideológicos de su propia transición, está obligado a enseñar sus cartas al contrario; en consecuencia, suscitará una serie de reacciones políticas entre sus seguidores, con resultados impredecibles.

No logra convencer de que la apertura sea una concesión de su régimen. Aunque el sandinismo lo intenta, haciendo uso de todos los mecanismos de difusión a su alcance, no logra persuadir de que está haciendo una concesión, pues la misma cultura de fuerza<sup>23</sup> que impulsa entre sus seguidores hace que la negociación sea percibida por éstos como una muestra de debilidad y como el fruto de la lucha de sus contrarios. Este enfoque tuvo una tremenda significación en el momento de la votación para elegir presidente en 1990.

Finalmente, el sandinismo trata de interpretar su propia decisión de negociar como una salida táctica a presiones temporalmente inaguantables. La apertura es vista por los sandinistas como parte de un proyecto estratégico, en el cual pretenden asegurar su hegemonía en un nuevo orden político sumamente legitimado.<sup>24</sup> No interpretan la negociación como un pacto de salida, al estilo de los autoritarismos sudamericanos. Creen que la negociación sólo es una manera de solucionar problemas y, por lo tanto, procuran retener todo el poder que poseen en las áreas clave: ejército, policías, jueces y bienes materiales.

Los militares sudamericanos se reservaron en sus aperturas importantes mecanismos para asegurar sus intereses en el orden de la transición, pero fueron más por el lado de los “enclaves”, que dice Garretón para el caso chileno,<sup>25</sup> y no por el lado de los

<sup>23</sup> Mientras los sandinistas negociaban con la oposición armada contra, repetían el eslogan de: “En Sapoá los aplastaremos”; “Cese al fuego o aniquilamiento total”, decía el diario *Barricada*, del 21 de marzo de 1988 en su página editorial.

<sup>24</sup> Véase las declaraciones de Daniel Ortega a los líderes de los 14 partidos de oposición en el diálogo del 19 de marzo de 1988, en *Barricada*, Managua, 19 y 20 de marzo de 1988, días antes de llegar a un acuerdo negociado con la oposición combatiente.

<sup>25</sup> Véase Manuel Antonio Garretón, “La democracia entre dos épocas: América Latina en 1990”, en *Foro Internacional*, núm. 125, El Colegio de México, julio-septiembre, 1991, p. 49.

múltiples “candados” que impiden el desarrollo de las instituciones democráticas.<sup>26</sup>

El proceso nicaragüense no puede tomar un camino de redemocratización o restauración democrática, como es el caso de algunos países sudamericanos con gran tradición democrática. No sólo porque la nación no ha tenido amplias y sólidas experiencias previas de democracia, al estilo de sus vecinos del sur, sino también porque las luchas de poder y la confrontaciones políticas y militares de toda la década ahogaron las pocas prácticas democráticas que pudieron existir.

Esas diferencias con las transiciones negociadas en el Cono Sur son suficientes para justificar que el presente trabajo no destine muchos esfuerzos al análisis comparado del caso nicaragüense con los otros casos de transición, aunque es claro que en Nicaragua la apertura es producto del esquema de cambios en América Latina durante la década de los ochenta.

La otra opción de comparar la apertura nicaragüense con las que ocurrieran en el bloque socialista, tampoco es suficientemente válida.

Si bien los rasgos totalitarios del sandinismo son muchos y bastante conocidos como copiados y puestos en ejecución por los mismos asesores soviéticos, países europeos del Este y de Cuba, no alcanzaron un nivel de consolidación similar al que ocurrió en esos países.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> El uso del término “candado”, es con el fin de reflejar el propósito sandinista de dejar “bajo llave” una serie de medidas tomadas a lo largo de la revolución y que no podrían ser modificadas por el nuevo gobierno. No se refiere exclusivamente al asunto del ejército, policía y sus cuestiones presupuestarias, sino a leyes que van desde las de propiedad de la tierra, organización del poder judicial, etc., y que se encuentran resumidas en 17 áreas de gobierno que la oposición presentó como reformas necesarias a la Constitución y otras leyes, desde el 13 de septiembre de 1987, cuando se inició el diálogo nacional al que se obligaba el gobierno sandinista según los Acuerdos de Esquipulas II.

<sup>27</sup> Enrique Bolaños Geyer, opositor al sandinismo, decía el 22 de marzo de 1984 en la Asamblea Nacional Ordinaria del INDE, en Managua: “Durante más de cuatro años hemos librado una batalla titánica para evitar un totalitarismo amenazante, para detener una cubanización galopante y un marxismo creciente, así también para tratar de evitar el total aniquilamiento del sector privado y, más que todo, para no perder totalmente nuestra libertad. Consideramos que nuestra labor,

El hecho de que los sandinistas se orientaran ideológicamente por el marxismo leninismo para construir un Estado socialista y que hicieran esfuerzos para lograrlo, no es suficiente razón para afirmar que lo habían logrado cuando fueron forzados a negociar su retiro del gobierno.

Más bien, en el análisis de sus políticas y de los resultados cotidianos obtenidos se revela que los sandinistas quedaron atrapados entre sus intenciones ideológicas y sus realizaciones políticas.<sup>28</sup>

En Nicaragua, aunque los sandinistas intentaron reproducir algunos de los esquemas totalitarios, especialmente en las áreas de represión y control social, siempre encontraron en sus propias alianzas serias dificultades para afianzarlos. En otras ocasiones, para tratar de evitar o neutralizar las presiones en contra de su consolidación, los sandinistas adoptaron medidas que les alejó de sus intenciones ideológicas o les condujo a extremar posiciones semejantes en unas políticas y a ceder en otras. Sin embargo, era claro que existía contradicción en sus decisiones; esta situación les impedía avanzar en sus decisiones; “una revolución en el atolladero”, la llamó uno de sus críticos.<sup>29</sup>

Aun cuando los sandinistas establecían la base de su poder en el eje ejército-partido-gobierno, al estilo soviético, aún no lograban el aniquilamiento constitucional de partidos opositores y de

---

en principio, ha dado resultado. Los hemos obligado a retrasar el proceso totalitario; los hemos forzado a un paréntesis político y a una media apertura, a la cual ellos ideológicamente no se encuentran acostumbrados.” Véase *Discursos selectos del Ing. Enrique Bolaños Geyer*, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Managua, s.f., p. 72.

<sup>28</sup> El estudio de Colburn sobre uno de los nudos centrales de la definición ideológica de las políticas sandinistas, la cuestión agraria, señala cómo estas contradicciones resultaron dramáticas: no querían al sector privado en el campo, pero necesitaban de divisas y éstas sólo se conseguían por medio de la exportación agropecuaria. Esto les llevó a diseñar políticas que, por un lado, denostaban a ese sector y, por otro, les beneficiaba económicamente. Véase Forrest D. Colburn, *Post-Revolutionary Nicaragua. State, Class, and the Dilemmas of Agrarian Policy*, University of California Press, 1986.

<sup>29</sup> Enrique Bolaños, discurso del 28 de marzo de 1985 en la Asamblea Nacional Ordinaria del INDE en Managua: “El FSLN está perdido en la incertidumbre y paralizado en el atolladero o atrapado en sus propias redes de fracasadas marañas políticas, electoreras, sociales, morales, religiosas, diplomáticas y sobre todo en las marañas económicas de su propia creación”, *op. cit.*, p. 56.

organizaciones cívicas.<sup>30</sup> La aceptación, en la Carta Magna del país, de una economía privada revalidó, jurídica y políticamente, la existencia de grupos empresariales en el marco, aunque limitado, de una economía de mercado.<sup>31</sup> En ese contexto, les quitó espacio para lograr una sindicalización de la clase trabajadora bajo su control total. Aunque lo intentaron, terminaron por reconocer que la sindicalización forzada les estaba agravando el de por sí escaso apoyo de los trabajadores organizados.<sup>32</sup>

La existencia de organizaciones ajenas al control sandinista, aunque fue constantemente limitada por las acciones represivas gubernamentales, terminó imponiendo al sandinismo una situación distinta a la de los gobiernos totalitarios.

El punto de partida de la liberalización en Nicaragua no es, pues, similar al de los países socialistas.

¿Qué fue, entonces, al final de cuentas el régimen sandinista? Fue un gobierno de pretensiones totalitarias que, desde sus inicios, se vio frustrado en su transición al socialismo. Tuvo semejanzas

<sup>30</sup> Elaborar leyes, consideradas similares en sus textos a las de otros países latinoamericanos, en un país que se encontraba siempre en estado de emergencia, desde marzo de 1982 hasta enero de 1988, resultó una causa de críticas al sandinismo. Las leyes estaban suspendidas bajo el estado de emergencia, especialmente en todas aquellas garantías que definen a un Estado como democrático. El jugar a la democracia nominal, como una estrategia para neutralizar las críticas en su contra, dejó al sandinismo en una posición difícil, pues al existir la oposición, aunque no pudiese actuar libremente, esas leyes eran objeto de negociación. Ello sucedió con la Propuesta de Ley de Partidos Políticos, de noviembre de 1981, discutida y aprobada en el Consejo de Estado de 1983, cuando regía la situación de emergencia y cuando en el órgano no estaban los partidos opositores. Sucedió igual con la Ley Electoral aprobada en el Consejo de Estado en marzo de 1984, como un atractivo para que la oposición participara en las elecciones de 1984. En octubre, ante la visible negativa opositora de contender en el plano electoral, luego del fracaso de las conversaciones en Río de Janeiro, los sandinistas tuvieron que ofrecer garantías adicionales, que aún así resultaban insuficientes para la oposición. Algo similar sucedió con la Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional, pero no suscrita por los miembros de la oposición. Éstos mantuvieron la presión para su reforma, al menos en 14 puntos considerados inaceptables para un Estado democrático.

<sup>31</sup> El 60% de la economía quedó en manos del sector privado, después del triunfo de la revolución.

<sup>32</sup> Los sindicatos socialcristianos y comunistas resistieron la presión del gobierno para subordinarlos a la Central Sandinista de Trabajadores.

con los regímenes socialistas africanos o tercermundistas en general, así como con los socialismos rumano, búlgaro o, incluso cubano, a pesar de que se alimentó de éste para definir su transición al socialismo. Resultó un régimen distinto también a los regímenes instalados durante otras fracasadas revoluciones de América Latina, como la guatemalteca de los cuarenta y la boliviana de los cincuenta, ambas más cercanas al populismo que al socialismo pretendido por los sandinistas.

Buscar en esa borrosa identidad del sandinismo una justificación de las causas de su fracaso es útil para explicar también el hecho significativo de que decidieran negociar su retiro del gobierno.

#### LA TRANSICIÓN NICARAGÜENSE: UN CASO ESPECIAL DE CAMBIO NEGOCIADO EN AMÉRICA LATINA

Hemos ordenado en tres etapas sucesivas la investigación sobre la transición negociada en Nicaragua: *a)* la etapa de apertura negociada del régimen, que incluye la negociación entre contrarios; *b)* la etapa de la resurrección de la sociedad civil que implica las elecciones de 1990, y *c)* la etapa del gobierno de pacificación y reconciliación instalado en 1990.

De hecho, dichos periodos, encajan dentro de la noción de una sola etapa de emergencia que cubre desde la apertura hasta la deflación del poder anterior y que la teoría de la transición ha desarrollado en sus aplicaciones para América Latina.<sup>33</sup>

La primera etapa se refiere a la apertura que precede a la negociación entre fuerzas opuestas: los sandinistas y la Resistencia Nicaragüense, durante 1988. En este lapso se manejan los escenarios en que ocurre la decisión sandinista de abrir su régimen, tanto los ámbitos internacional y nacional. En el primero, se privilegian las situaciones de dependencia, subordinación y vulnerabilidad

<sup>33</sup> La etapa de emergencia incluye, siguiendo la sucesión de etapas definidas por la teoría de la transición, la apertura y el socavamiento del régimen, la negociación con el contrario, la resurrección de la sociedad civil, las elecciones y la instalación del nuevo gobierno. Esta sucesión de etapas se encuentra en el trabajo de Guillermo O'Donnell y Phillippe C. Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, vol. 4, caps. 3-6.

que los actores locales, de ambos bandos, tienen respecto del orden internacional en que se encuentran alineados. El segundo privilegia las situaciones que afectan la consolidación de la revolución sandinista, especialmente las que se refieren a las alianzas políticas, las políticas económicas y los conflictos entre la élite revolucionaria.

En esta etapa se privilegia el análisis de los efectos y complicadas relaciones que se establecen en una negociación forzada por las circunstancias.

La segunda etapa incluye el análisis de las elecciones generales de 1990, asumiendo que éstas son un resultado de las negociaciones y, al mismo tiempo, constituyen el punto de referencia para definir el establecimiento de un nuevo y más legítimo gobierno.

La última etapa se refiere al establecimiento del nuevo gobierno. En este lapso se privilegian dos conjuntos de situaciones, manejadas por separado: el de la pacificación (diseño y ejecución de las garantías de sobrevivencia de los actores armados) y el de la reconciliación nacional (las cuestiones de orden institucional que limitan o posibilitan el cambio ordenado y pacífico del régimen). Ambas situaciones encierran una variedad de problemas que se entremezclan para impedir o para impulsar la evolución de la liberalización sandinista hacia un proceso de democratización nacional.

La dinámica de tales situaciones, deja a la vista una variedad de temas novedosos en el análisis de las revoluciones que no logran consolidarse, pero cuyo derrumbe se logra por la vía negociada. Son novedosos también porque el gobierno encargado de conducir la pacificación y la reconciliación, posterior al fracaso revolucionario, es una administración sin autonomía real, pese a su instalación por votación mayoritaria de la población.

La selección de estas etapas, con sus respectivas definiciones de actores, tareas y dificultades, sólo pretende ordenar lo complicado que es el proceso nicaragüense, y no tanto teorizar sobre la vía de negociación, aun cuando esta última sea la vía que han tomado en la actualidad los procesos políticos en Centroamérica.

Existe una variedad de conceptos teóricos desarrollados alrededor de la teoría de la transición que son de gran utilidad para nuestro trabajo.

En la etapa de apertura negociada son especialmente relevantes los que se refieren a las cuestiones de garantías de sobrevivencia

de los actores políticos y militares en una transición negociada; en la etapa de elecciones, en particular, en el referendo electoral de 1990, son relevantes las cuestiones que afectan la hegemonía y la identidad de los actores de la negociación, puestos frente a la población en general y, finalmente, en la etapa del gobierno de transición, destacan las cuestiones de orden institucional que afectan la construcción de un orden político distinto al anterior.

En virtud de lo difícil que resulta reunir en una sola pieza elementos simultáneos que corresponden a etapas diferentes, hemos optado por normalizar los temas en capítulos separados, aun expuestos al riesgo de la repetición de argumentos que suelen no gustar al lector.

## 2. LA ETAPA DE APERTURA DEL RÉGIMEN SANDINISTA: LAS INFLUENCIAS EXTERNAS

### LOS ESCENARIOS INTERNACIONALES DE LA APERTURA EN NICARAGUA: LAS TRANSICIONES NEGOCIADAS BAJO INFLUENCIA INTERNACIONAL

Los pactos, las componendas y aun los acuerdos para poner fin a la violencia no son nuevos en América Latina.<sup>1</sup> Hay, incluso en Nicaragua, una cierta tradición de pactos entre partidos o facciones de éstos destinados a solucionar situaciones de crisis.<sup>2</sup>

Durante la década de los ochenta, los acuerdos intraélite en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, permitieron soluciones al autoritarismo militar; ello propició las más recientes muestras de la capacidad de concertación en el sistema político de América Latina.<sup>3</sup>

En la mayoría de los casos en que se han aplicado soluciones políticas negociadas a las crisis de violencia, los actores internos son los responsables del diseño y ejecución de las soluciones. La influencia de otras naciones ha sido mínima. Los casos de Nicara-

<sup>1</sup> Entre los más conocidos están los de Punto Fijo, de octubre de 1958, en Venezuela y el acuerdo del Frente Nacional de 1958, en Colombia.

<sup>2</sup> El Pacto de los Generales de 1950 (general Somoza y general Chamorro) y el Kupia Kumi de 1972 (que renueva aquél). Una referencia a la importancia de los pactos en la estabilización política en Nicaragua, se encuentra en René Herrera Zúniga, *Las relaciones internacionales y la formación del poder político en Nicaragua*, México, El Colegio de México, 1991.

<sup>3</sup> El Acuerdo o Pacto del Club Naval, de 1984 en Uruguay, ha sido el más conocido de todos los acuerdos, generalmente no dados a conocer, que dieron lugar a las transiciones del autoritarismo militar a la democracia en el Cono Sur. Véase Juan Rial, "Transición hacia la democracia y restauración en el Uruguay 1985-1989", en Raúl Alfonsín *et al.*, *Agenda para la consolidación de la democracia en América Latina*, *op. cit.*, pp. 249-292; Charles G. Gillespie, "La transición uruguaya desde el gobierno tecnocrático-militar colegiado", en Guillermo O'Donnell, Phillippe Schmitter y Laurence Whitehead (eds.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, vol. 2, Buenos Aires, Paidós, 1988, pp. 261-294.

gua, El Salvador y Guatemala, son distintos, pues se logran con base en acuerdos previos entre las potencias<sup>4</sup> y/o bajo la presión de terceros países y de organizaciones internacionales.<sup>5</sup>

De esta manera, el momento de la negociación entre fuerzas opuestas tiene, en países pequeños con baja capacidad de autonomía, una característica especial: los aspectos internacionales son esencialmente dominantes en las decisiones de los actores locales.<sup>6</sup>

Aun cuando los acontecimientos internos vuelven factibles esas circunstancias internacionales, la decisión de negociar y el ejercicio práctico de la negociación se da, en lo fundamental, en un escenario estructurado internacionalmente.

Hay presiones internacionales que influyen sobre los acontecimientos locales en forma extraordinaria. El caso de Nicaragua, ubicado en el contexto de los conflictos regionales de la guerra fría, es quizá el más notable de las últimas décadas. Inserta en un grupo de países interconectados históricamente como una sola subregión, vecina de México y cercana a Estados Unidos, ofrecía una situación geopolítica decisiva que no se había reproducido, como conflicto, desde la revolución cubana y la crisis de República Dominicana. En esta circunstancia incidían muchos intereses internacionales juntos en un solo problema nacional.

Semejante diversidad de intereses provocó, desde su inicio, una reacción de los países que veían amenazados sus intereses de seguridad. De esas reacciones surgieron sugerencias para la solución pacífica y negociada del conflicto nicaragüense.

Las declaraciones de los líderes mundiales, el delineamiento de posiciones gubernamentales en favor de la negociación y un interminable enlistado de organizaciones políticas y religiosas, con propuestas o promoviendo una solución negociada, se sumaron en una campaña de información que rodeó el problema nicaragüense a nivel internacional.

<sup>4</sup> A partir de 1987 hubo constantes reuniones entre delegados estadounidenses y soviéticos con el fin de solucionar los conflictos regionales, incluido el problema centroamericano.

<sup>5</sup> El Grupo Contadora pudiera ser el mejor ejemplo de ese tipo de presiones internacionales en el caso nicaragüense.

<sup>6</sup> La insistencia sandinista de negarse a hablar con sus opositores armados fue superada a nivel internacional.

Desde la declaración franco-mexicana sobre El Salvador en 1981, hasta las propuestas de Contadora de 1986, pasando por una variedad de propuestas internacionales de partidos políticos latinoamericanos —por ejemplo, la Confederación de Partidos Políticos de América Latina (Copal) y europeos, como la Internacional Socialista (IS), la democracia cristiana internacional, la Internacional Liberal, con sus respectivas fundaciones académicas y de cooperación, las asociaciones de iglesias de diversa denominación y agrupaciones civiles interesadas—, hasta el Acuerdo de Esquipulas, la influencia internacional fue decisiva en la negociación nicaragüense.

Los países más distintos y distantes participaron, de una u otra manera, en el problema de Nicaragua, como nunca antes en la historia centroamericana. Las estructuras internacionales, como Naciones Unidas, y regionales, como la Organización de Estados Americanos, tuvieron un papel de organizadores, supervisores y verificadores de los acuerdos. Las ofertas de ayuda y de lineamiento de planes de cooperación de las comunidades europeas fueron también una expresión de la influencia internacional sobre la crisis y sus soluciones.

En el caso nicaragüense, la acción internacional incluyó la fijación de tiempos y modalidades de negociación, los diseños específicos de acuerdos y los mecanismos de verificación para el cumplimiento de los mismos.<sup>7</sup>

Esos aspectos resultarían normales en la celebración de acuerdos entre países en guerra. En las circunstancias de conflictos internos, la presencia de múltiples actores internacionales produjo efectos muy variados sobre los procesos de decisión internos y sobre el comportamiento de los actores políticos. Estos resultados impactaron a los procesos derivados de la negociación pero en cuyo desarrollo sólo correspondió a los actores nacionales su cumplimiento.

<sup>7</sup> Primero el Acta de Contadora y luego el Acuerdo de Esquipulas fijaron las acciones que adoptaría el gobierno nicaragüense.

El desfase entre la cultura política de los proponentes externos y la de los actores internos en guerra, se manifestó después de celebrados los acuerdos, en su fase de ejecución, cuando ya aquellos dieron por satisfechos sus intereses de seguridad o de prestigio.

El conflicto nicaragüense involucró a varios países, especialmente a Estados Unidos y a la ex Unión Soviética. Por lo tanto, las decisiones que tomaron las potencias en relación con el conflicto, afectaron las formas y contenidos de las políticas internas de naciones cercanas y las actuaciones de los propios actores nacionales en conflicto.

A ese comportamiento le hemos definido como políticas exteriores coordinadas.

#### POLÍTICAS EXTERIORES COORDINADAS

Cuando los intereses de las potencias se manifiestan en conflictos localizados en una determinada región, Centroamérica en este caso, producen interacciones estratégicas entre los países que se sienten afectados por los acontecimientos. De esas interacciones se generan distintas respuestas de política exterior frente al conflicto. En un primer momento esas respuestas son básicamente reacciones nacionales de carácter preventivo. Aunque algunas de esas decisiones hayan sido consultadas entre mandatarios, no constituyen todavía políticas exteriores coordinadas. Entre 1979 y 1982, México, Venezuela, Estados Unidos, Francia, Costa Rica y Cuba realizaron consultas sobre decisiones relacionadas con el caso nicaragüense, pero no coordinaron sus políticas exteriores.<sup>8</sup> Aun-

<sup>8</sup> Podría pensarse que la decisión mexicana de romper relaciones con el gobierno nicaragüense del general Anastasio Somoza, el 20 de mayo de 1979, constituyó una decisión de política exterior coordinada, porque estuvo precedida de consultas directas con el gobierno cubano, durante la visita que en aquella fecha hicieron Fidel Castro a Cozumel, México, el 17 de mayo y con el gobierno costarricense, en la visita del presidente Rodrigo Carazo a Cancún, México, el 20 de mayo. Sin embargo, fue más bien una aclaración de México a dos de los involucrados en el conflicto, sobre cuáles eran sus intenciones frente a la situación nicaragüense, más que una coordinación de políticas exteriores con esos países. La declaración franco-mexicana del 28 de agosto de 1981 en relación con El Salvador,

que, posteriormente, algunos de esos países sí lo hicieron, con la creación del Grupo Contadora, en enero de 1983.<sup>9</sup>

Las políticas exteriores coordinadas que pretenden ser internacionalmente eficaces, son las que aplican terceros países que proponen acciones conjuntas que involucran soluciones a problemas concretos y que pretenden modificar u orientar el rumbo de los acontecimientos, de acuerdo con sus intereses. La primera muestra de ese tipo de política la ofreció el Acuerdo de San José —en agosto de 1980, para el suministro de energéticos a los países centroamericanos y del Caribe—, celebrado entre Venezuela y México; otra muestra sería el Acuerdo de Cooperación de las Comunidades Europeas y Centroamérica (también conocido como proceso de San José), de 1984; otra más es la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que aunque norteamericana en esencia, involucra a varios países.

Quizá el mejor ejemplo de ese tipo de políticas exteriores coordinadas la ofrece, sin embargo, la constitución del Grupo Contadora, en enero de 1983.

Para presentarse como una política internacionalmente eficaz, Contadora ofreció un modelo de equilibrio político general para la región en conflicto.<sup>10</sup> El modelo trató de combinar las tres áreas críticas de interacción entre Estados Unidos y Nicaragua: seguridad, estabilidad política y desarrollo económico,<sup>11</sup> con el fin de ganar flexibilidad y adaptabilidad con una serie de aspectos y

---

por involucrar a dos países, parecería también una muestra de política exterior coordinada, pero tampoco tuvo un seguimiento de acciones de política exterior conjunta de ambos países.

<sup>9</sup> La bibliografía sobre Contadora es abundante. Véase Mario Ojeda, *La política exterior activa*, SEP, México, 1986; Bruce Bagley, *Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America*, SAIS Papers in Latin American Studies, Westview Press, The Johns Hopkins University, 1987.

<sup>10</sup> El modelo integra tres áreas: seguridad regional, estabilización política y crecimiento económico y bienestar social. La primera versión ordenada de ese modelo surgió con las Normas de Ejecución (8 de enero de 1984) de los compromisos establecidos en el Documento de Objetivos (9 de septiembre de 1983).

<sup>11</sup> Vínculos con Cuba y la ex Unión Soviética, balance de fuerzas militares con los países del área y apoyo a las guerrillas salvadoreñas. Estos puntos fueron consistentemente presentados como causal del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, desde 1979.

combinaciones de políticas sugeridas previamente por los otros países centroamericanos.<sup>12</sup>

A partir de los trabajos de las comisiones de Contadora, referidas a seguridad regional, estabilización política y crecimiento y bienestar, el conjunto de condiciones de equilibrio regional se precisó aún más. El Acta de Contadora (de acuerdo con la versión revisada del 6 de junio de 1986), logra un impresionante detalle de restricciones al comportamiento político y militar de los países centroamericanos, como condición de equilibrio regional.<sup>13</sup> Al final, el equilibrio regional que pretendió Contadora requería la renuncia de Nicaragua a su proyecto de alineamiento internacional, expresado en la presencia de personal militar del campo socialista, armamentismo, militarización y políticas antidemocráticas. Desde su primera declaración hasta la propuesta del acta revisada del 6 de junio de 1986, Contadora finalmente regresó al punto de partida: la consolidación del sandinismo era incompatible con la estabilización del área.<sup>14</sup>

Aun cuando Contadora no logró la firma del tratado, y por lo tanto asume una figura de fracaso, la acción fue una muestra eficaz de política coordinada internacional. Quizá esta calificación no viene, obviamente, de la firma de la propuesta, puesto que ello no se alcanzó, sino porque logró neutralizar la presencia de otros actores internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que en 1982 se habían manifestado en el escenario centroamericano con una militancia internacionalista que amenazaba convertir a la zona en el terreno de las más diversas confrontaciones.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> La propuesta de paz de seis puntos, de Honduras, del 23 de marzo de 1982; la propuesta de paz de seis puntos de Nicaragua, del 19 de julio de 1983.

<sup>13</sup> En política, las elecciones libres, competitivas y observadas (sección 4, capítulo II); en seguridad, se anula la relación partido-ejército (sección 2. 22a.) y se sujeta el desarrollo militar a criterios de población, territorio y tamaño del Producto Nacional Bruto (sección 2, 22c,1 a 9), sometimiento a verificación y control del inventario de armas y el censo de asesores militares y de seguridad a extranjeros (secciones 4 y 5); en economía y sociedad, se reafirma el retorno a las instituciones tradicionales (mercado común, integración económica, legislación común en materia laboral, salud y entrenamiento para el trabajo).

<sup>14</sup> Es el momento en el cual los presidentes centroamericanos deciden asumir directamente la solución de la crisis en los acuerdos de Esquipulas.

<sup>15</sup> En Managua circulaban una gama de grupos y movimientos revolucionarios de todo el mundo.

En buena medida esa militancia que afectaba o preocupaba a los países miembros de Contadora se debió al decaimiento de las influencias dominantes de Estados Unidos en América Latina, incluida la zona de Centroamérica y el Caribe, en los años setenta. La crisis nicaragüense puso en evidencia la llegada a esa zona de los más variados actores e intereses políticos del campo socialista de Europa y del Tercer Mundo dispuestos a retar la tradicional posición hegemónica de Estados Unidos. La presencia en Nicaragua de líderes de movimientos revolucionarios latinoamericanos y de organizaciones armadas y activas en el Medio Oriente, Asia, África y Europa, constituía un reto impresionante para la seguridad regional. La concentración de parque militar soviético, impresionante y sofisticado, en Nicaragua, fue considerado por las cúpulas militares de México y los países integrantes de Contadora, como una amenaza real a la paz en la zona.

En ese sentido, Contadora logró que todos los proponentes de algún tipo de solución al conflicto quedaran bajo su jurisdicción: desde grupos prorrevolucionarios y organizaciones religiosas, hasta organizaciones internacionales (Naciones Unidas, OEA, Comunidad Económica Europea y agencias financieras). Con ello, Contadora deslegitimó la intervención de terceros dispuestos a internacionalizar el conflicto y coordinó a éstos para hallar una solución. En esta perspectiva, Contadora confirmó, frente al campo socialista y terceros, la capacidad de algunos países latinoamericanos para tomar ventaja de las oportunidades internacionales, sin que se afectara su alineamiento estratégico con Estados Unidos.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Aunque nunca fuese declarada esa intención y más bien aparentando lo contrario, Contadora afirmó las presunciones hegemónicas de Estados Unidos en los asuntos hemisféricos frente a potencias extracontinentales. Ello en un periodo de franca debilidad norteamericana para enfrentar los movimientos revolucionarios del Tercer Mundo en su propia zona. Los "caciques" (actores regionales, especialmente México y Venezuela) actuaron en ausencia, primero, y en colaboración, al final, con la nación hegemónica que había perdido habilidad para jugar con eficacia su papel. Véase una discusión al respecto, que revive la tesis de Norman Bailey sobre Estados Unidos como país hegemónico interamericano, en Roland H. Ebel, Raymond Taras y James D. Cochrane, *Political Culture and Foreign Policy in Latin America. Case Studies from The Circum-Caribbean*, Albany, State University of New York Press, 1991, pp. 51, 62-71.

Además, Contadora resultó eficaz como gestión unificadora de intereses centroamericanos y norteamericanos, frente a las inclinaciones externas asociadas con Nicaragua, Cuba y el bloque socialista en general. Aunque algunos sectores del gobierno de Estados Unidos manifestasen constantemente su crítica respecto del papel de Contadora, el gobierno estadounidense se reservó la opción negociadora planteada por ella.<sup>17</sup> El que sus aliados europeos y latinoamericanos se colocaran detrás de Contadora, le permitió influir, a través de ellos, los contenidos y ritmos de la negociación sugerida, sin que se involucrara directamente en las negociaciones. Por su parte, en apoyo de la presión militar en contra de los sandinistas, Estados Unidos alentó y dio autonomía a la vía negociadora, al menos temporalmente. A su vez, luciendo en algunos momentos como una instancia antinorteamericana de corte mexicano<sup>18</sup> Contadora constituyó el medio para que Nicaragua hiciera cada vez más concesiones relativas a la seguridad.

En términos prácticos, las negociaciones entre los países de Centroamérica dentro de Contadora fueron útiles para definir las responsabilidades del conflicto, según perspectivas de cada país centroamericano. La negociación fue evolucionado desde una fórmula que lucía como favorable a la consolidación del régimen sandinista (por su insistencia en cuestiones de seguridad estratégica) hasta una fórmula que hacía incompatible la consolidación del sandinismo, con la estabilización regional (por su insistencia en la democratización). En la medida en que los gobiernos militares

<sup>17</sup> Aunque el gobierno norteamericano reaccionara frente a las propuestas de Contadora como si este grupo fuese un "problema de relaciones públicas", a Estados Unidos le resultaba conveniente la existencia de un foro en donde los sandinistas pudieran ir haciendo concesiones sin que ello representara compromisos bilaterales. En la medida en que aquéllas mostraban la creciente presión a la que estaban sometidos, eran también mayores las posibilidades de que la presión militar resultara exitosa. En ese sentido Contadora resultaba funcional tanto a los "duros", como a los "blandos" de Washington.

<sup>18</sup> Para algunos países latinoamericanos que apoyaban las críticas de Estados Unidos a Contadora, ésta debería desechar la influencia de México para que sus propuestas resultaran adecuadas a los intereses latinoamericanos o, en todo caso, incluir al gobierno estadounidense como miembro del grupo. Véase Canadian Institute for International Peace and Security, *Negotiations for Peace in Central America. A Conference Report*, Ottawa, 27-28 de septiembre de 1985, p. 37.

de Honduras, El Salvador y Guatemala eran transferidos por la vía electoral a gobiernos civiles, las discusiones en Contadora servían para afirmar la tesis de la democratización. Gradualmente ese proceso de discusiones entre centroamericanos fue útil para que Nicaragua fuese ubicada como “el problema de Centroamérica”. En una proporción de cuatro a uno, el gobierno sandinista fue quedando aislado en el entorno político centroamericano. Frente a la posibilidad de un derrumbe dramático, la fórmula negociadora ofreció a Nicaragua la salida de una apertura negociada. En esta dirección, Contadora también resultó una fórmula internacionalmente eficaz porque logró demostrar, en especial a Nicaragua y Cuba, que no habría posibilidad de ganar lealtades latinoamericanas<sup>19</sup> a un proyecto de cambio político que se sustentara en el apoyo soviético para la confrontación con Estados Unidos. Tendrían que arriesgar, dijo México a los sandinistas, su sobrevivencia en un marco competitivo y democrático.

A mí me parece sano que Nicaragua diversifique sus relaciones políticas, económicas y comerciales con varios países del mundo. En la medida que las diversifique y no se haga dependiente, preponderantemente del bloque socialista, en esa medida disminuye su riesgo de confrontación con los Estados Unidos y en esa medida también tendrá mayor apoyo y simpatía de los demás países latinoamericanos, que no vemos con agrado que haya países latinoamericanos que se afilien, con características de dependencia, a los grandes bloques de poder internacional.<sup>20</sup>

El paso de Contadora a Esquipulas, en 1987, confirmó la tesis de la liberalización política, sobre la de la seguridad regional. Desde la perspectiva centroamericana, la incompatibilidad de la consolidación del sandinismo y la estabilización del área, se mostraba más claro en el aspecto de la democratización.

<sup>19</sup> Para reafirmar su postura a nivel latinoamericano, el Grupo Contadora buscó que otros países de la región asumieran un respaldo a sus propuestas. El Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), creado el 27 de julio de 1985 en Lima, tendría una función de sostenimiento a la negociación, sin participar directamente en ella. Véase “The failure of Diplomacy”, en Bruce Bagley (ed.), *Contadora and the Diplomacy of Peace in Central America*, SAIS PAPERS in Latin American Studies, Westview Press/The Johns Hopkins University, 1987, p. 194.

<sup>20</sup> Declaraciones del entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, al diario *Excelsior*, de la ciudad de México, 4 de julio de 1984, p. 10-A.

## La diplomacia y la negociación en Nicaragua

El caso nicaragüense es una buena muestra de los distintos planos que tiene una negociación para poner fin a una guerra civil de claros alineamientos internacionales; asimismo, da la oportunidad de iniciar una apertura política negociada que conduciría, posteriormente al derrumbe electoral del régimen revolucionario.

En otro tipo de regímenes, la negociación política destinada a pactar reformas estabilizadoras cumple una función legitimadora del régimen.<sup>21</sup> En el caso nicaragüense, la resistencia sandinista lo condujo a buscar acomodo temprano y eficaz con sus opositores, incluido Estados Unidos, lo llevó a negar constantemente la negociación con sus contrarios y cuando se vio presionado a hacerlo, lejos de legitimarse, fue llevado a la caída negociada de su régimen. Es uno de esos casos de apertura iniciada bajo la creencia de que podría proporcionarles un alivio a ciertas presiones, pero que al final tienen resultados contrarios.

Los intereses externos que favorecieron tanto la consolidación del régimen sandinista como su desplome, terminaron por adoptar la negociación como vía de solución a sus conflictos en Nicaragua. Los oferentes externos de la negociación crearon ilusiones en los bandos opuestos, sobre las ventajas que obtendrían si decidían negociar, pero al final de cuentas las negociaciones opacaron los intereses locales involucrados en el conflicto, posponiéndolos a una etapa posterior en la que los actores externos ya no estaban interesados. Una etapa en la que la negociación fue vista, retrospectivamente, como responsable de los errores y de la intensa frustración e incertidumbre de la transición.

<sup>21</sup> El caso mexicano sigue siendo el mejor ejemplo latinoamericano de un régimen autoritario que siempre cambia a tiempo y, por hacerlo así, puede determinar el contenido y la extensión del cambio, sin caer en dramáticos sobresaltos. Véanse los trabajos de Rafael Segovia, "La situación mexicana. Algunas perspectivas", en Enrique Baloyra y Rafael López Pintor (comps.), *Iberoamérica en los años ochenta*, Madrid, 1984; "La reforma pactada", en *Nexos*, núm. 138, México, junio de 1989. En América Latina hay varios casos de pactos estabilizadores que tuvieron éxito durante varias décadas; por ejemplo, los ya mencionados Pacto de Punto Fijo de Venezuela y el Acuerdo Nacional colombiano.

La presión internacional para la apertura del régimen sandinista reveló que la multiplicidad de intereses ajenos, prevalecieron sobre los propiamente locales del conflicto. Aunque la oferta externa de negociación lleva explícitamente el mensaje de que la paz garantiza la posibilidad de lograr el desarrollo económico y el bienestar social, lo que sigue importando es la eliminación de los factores que afectan la seguridad regional. Es la paz vista desde la perspectiva externa. Ésta es la consecuencia de las estrategias revolucionarias que buscan desarrollarse en el seno de las confrontaciones externas.

Las revoluciones tercermundistas, conducidas por vanguardias marxistas, buscan su consolidación en el terreno de las confrontaciones internacionales. Su naturaleza es internacionalista: “la transición desde el capitalismo periférico es un proceso de lucha contrahegemónica.”<sup>22</sup> El sistema internacional constituye un sitio estratégico porque tiene fisuras “que deben ser utilizadas pragmáticamente para impedir el aislamiento y la eventual derrota de las luchas de liberación nacional”.<sup>23</sup> “El conflicto natural, inevitable, de la revolución es con el imperialismo estadounidense, por la vía militar, económica o cultural.”<sup>24</sup>

Los sandinistas lograron mantener la atención mundial haciendo uso de medios localizados en el ámbito internacional: insertándose en la confrontación Este-Oeste procuraban una posibilidad de sobrevivencia, mientras lograban la consolidación de su proyecto socialista.<sup>25</sup> Mientras más trasladan su proyecto de conso-

<sup>22</sup> José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *La transición difícil*, México, Siglo XXI, 1986, p. 49.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Bayardo Arce, citado por David Nolan, *FSLN The Ideology of the Sandinistas and the Nicaraguan Revolution*, Miami, University of Miami, 1984, p. 116.

<sup>25</sup> En septiembre de 1979, durante la reunión de los No Alineados en La Habana, Nicaragua se afilió del lado cubano justo cuando la tendencia tercermundista iba en dirección a la moderación; en marzo de 1980, Tomás Borge, Humberto Ortega y Henry Ruiz, miembros de la Dirección Nacional del FSLN, visitaron Moscú para suscribir un acuerdo de partidos. Véase “Comunicado conjunto soviético-nicaragüense”, en *Pravda*, 23 de marzo de 1980, citado por Nolan, *op. cit.*, p. 117 ; en los comienzos de 1983 cuando la confrontación militar apenas comenzaba en territorio nicaragüense, Humberto Ortega sugirió que Nicaragua permitiría a la Unión Soviética el desplazamiento de misiles nucleares en territorio nicaragüen-

lidación en el plano internacional (más ayuda exsoviética originaba mayor ayuda estadounidense a sus contrarios) esas revoluciones se vuelven más dependientes de lo que ocurre a nivel internacional. Si no logran afianzar sus fuentes de consolidación en la confrontación internacional, el proyecto se resquebraja internamente. En el caso de Nicaragua, los sandinistas lograron un apoyo del bloque socialista que no fue suficiente para garantizar su consolidación, como pudo lograrlo la revolución cubana con los acuerdos derivados de la crisis de los misiles de 1962. A diferencia del caso cubano, en el que el factor sorpresa fue significativo para su consolidación, la sobrevivencia de la revolución sandinista estuvo condicionada desde el comienzo a no buscar su afianzamiento en el plano internacional de la confrontación Este-Oeste.<sup>26</sup> La respuesta norteamericana a cualquier intento sandinista en esa dirección era previsible.<sup>27</sup> Los mismos países latinoamericanos que respaldaron al sandinismo para

---

se, en clara alusión al camino que tomó Cuba para consolidarse, como consecuencia de la crisis de los misiles de 1962, citado por Nolan, *op. cit.*, p. 117.

<sup>26</sup> Varios autores que simpatizaban con las posiciones iniciales del gobierno de Carter en relación con el ascenso de los sandinistas al poder, atribuirían años después a la misma administración, los orígenes de la confrontación con las revoluciones tercermundistas; sugería que la actitud del gobierno de Ronald Reagan sólo evidenció dicha confrontación. Véase Roger Burbach, "El imperialismo norteamericano y las nuevas sociedades revolucionarias", en José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *op. cit.*, p. 366; también en Roger Burbach y Pat Flynn (eds.), *The Politics of Intervention: The United States in Central America*, Monthly Review Press, Nueva York, 1985; Richard Feinberg, *The Intemperate Zone: The Third World Challenge to U.S., Foreign Policy*, Norton, Nueva York, 1983.

<sup>27</sup> Luego de la firma de un acuerdo de cooperación entre Nicaragua y la antigua República Democrática Alemana (octubre de 1979) y de la llegada de asesores cubanos y de otros países socialistas para participar en tareas de reconstrucción, Estados Unidos empezó a condicionar el paquete de ayuda estadounidense, en particular el préstamo por 75 millones de dólares autorizado por el presidente Carter. La legislación establecía que 60% de los fondos de ayuda serían canalizados hacia el sector privado y en todo caso la ayuda no debía ser usada en actividades en las que participaran los asesores cubanos, ni se harían desembolsos si Nicaragua se asociaba con el terrorismo internacional. Pocos días después, el 12 de marzo, tres miembros de la Dirección Nacional del Frente Sandinista firmaban en Moscú un acuerdo de cooperación con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Véase Harold Sims, "Revolutionary Nicaragua: Dilemmas Confronting Sandinistas and North Americans", en Alan Adelman and Reid Reading (eds.), *Confrontation in the Caribbean Basin*, University

su ascenso al poder así lo manifestaron desde un comienzo: ni Cuba, ni México, llegó a decir el presidente mexicano José López Portillo, en su primera visita a Managua.<sup>28</sup> El factor sorpresa no existía en el caso nicaragüense. Esta circunstancia elevó los costos del riesgo exsoviético en Centroamérica y alentó la firme decisión estadounidense de no permitir la consolidación del sandinismo alineado a Cuba y al campo exsoviético. Aunque estos últimos brindaron una asistencia militar significativa para un país pequeño y despoblado (cuatro mil millones de dólares entre 1979 y 1989)<sup>29</sup> y ofrecieron asistencia económica importante, no lo incluyeron en sus prioridades tercermundistas, localizadas en África y el Medio Oriente.<sup>30</sup>

En la medida en que los compromisos externos con el bloque socialista eran magnificados por los revolucionarios en la prensa local, las profecías comenzaron a cumplirse. La visita de tres miembros de la dirección sandinista a Moscú, en marzo de 1980, argumentando el condicionamiento de la ayuda norteamericana, así como la presencia de equipo militar exsoviético en las celebraciones del primer aniversario de la revolución<sup>31</sup> y el arribo de miles de internacionalistas que incluían miembros de la OLP, la ETA española y de grupos guerrilleros de otros países, empezaron a decidir la orientación de los acontecimientos internos.

La pronta radicalización del proyecto sandinista redujo los márgenes de autonomía que gozaban distintos actores no socialis-

---

of Pittsburgh, 1984, p. 61; Rubén Berrios y Marc Edelman, "Towards Diversification of Dependence: Nicaragua's Economic Links with the Socialist Countries", 1985 (inédito) p. 10.

<sup>28</sup> Véase Mario Ojeda Gómez, *La política exterior activa*, México, SEP, 1984.

<sup>29</sup> Véase Linda Robinson, *Intervention or Neglect. The United States and Central American Beyond the 1980s*, Nueva York, Council on Foreign Relations Press, 1991, p. 15.

<sup>30</sup> Richard Feinberg, "Centroamérica: el punto de vista de Moscú", *Cuadernos Semestrales*, núm. 12, segundo semestre de 1982, México, CIDE, pp. 375-380.

<sup>31</sup> En las celebraciones del primer aniversario de la revolución se mostró equipo militar del bloque socialista, en particular, transporte militar W-50 de la antigua República Democrática Alemana, lanza misiles tierra-aire SA-7 y artillería antiaérea exsoviéticos. Jozef Goldblat y Víctor Millán, *The Honduras-Nicaragua Conflict and Prospects for Arms Control in Central America*, SIPRI Yearbook, Estocolmo, Stockholm International Peace Research Institute, 1984, p. 531.

tas involucrados en la revolución y provocó la cautela en los centros de respaldo internacional en Occidente.<sup>32</sup>

La unidad nacional fue sustituida como valor dominante de la acción política, por la de unidad revolucionaria que se sustenta en una visión antihegemónica que toma lugar en la confrontación internacional. El desplazamiento de objetivos nacionales (desarrollo económico y bienestar social) hacia objetivos internacionales (la derrota del imperialismo), implica la ruptura del proyecto revolucionario de amplio respaldo interno. Así lo plantearon los directivos de la revolución:

... la luna de miel de la revolución está llegando a su fin. Me refiero a la idea romántica de aquellos que creyeron que la revolución popular sandinista era una revolución idílica en la cual los intereses de un grupo de traidores y los intereses del verdadero pueblo trabajador podían fundirse; una visión estrecha, de la cual la dirección revolucionaria nunca padeció.<sup>33</sup>

Precisamente, el traslado de objetivos nacionales hacia el exterior clarifica la diferencia entre nacionalismo y antimperialismo. Esta circunstancia que privilegia la lucha antimperialista sobre la cuestión nacional, sucedió en Nicaragua, de hecho, desde el inicio de la revolución, con la definición de Estados Unidos como enemigo de la humanidad y la formación inmediata de una estructura militar y de inteligencia con direcciones soviética y cubana, antes de la aparición de resistencias armadas patrocinadas por Estados Unidos.

A comienzos de 1980, se difundió la definición ideológica como línea de acción política en medio de pugnas; este hecho propició la renuncia de miembros conservadores de la Junta de Gobierno y del control del Consejo de Estado por una aplastante mayoría de miembros sandinistas (74%). Lo anterior tiene relevancia para la estrategia de consolidación de la revolución en el ámbito

<sup>32</sup> La salida de Alfonso Robelo y Violeta Chamorro de la Junta de Gobierno, en 1980, y la defección de Edén Pastora, en 1982, confirman la tendencia de privilegiar el antimperialismo sobre la visión nacionalista de la coalición antisomocista.

<sup>33</sup> Comandante Henry Ruiz, junio de 1982, citado por Nolan, *op. cit.*, p. 126.

internacional, pero también para su fracaso en el plano nacional. Las resistencias interna y externa a la consolidación de los sandinistas, fue siempre creciente.

En la situación interna, como luego veremos, la misma política de alianzas que el sandinismo construyó para su llegada al poder, se convirtió en una atadura de la que no pudo librarse: Iglesia, empresarios y obreros independientes.

Por el lado externo, luego de los intentos de acomodo de la presidencia de James Carter y de las ofertas de Ronald Reagan, con el Plan Enders de 1981, vino la presión militar con apoyo a los grupos nicaragüenses de oposición.

Entre 1983 y 1986, la presión sobre el sandinismo mostró que no habría posibilidades de consolidación de un proyecto prosoviético en Centroamérica. En 1985, la estrategia norteamericana de tensar la confrontación con la exUnión Soviética, se vio recompensada con los cambios en la dirigencia de este país. Con ello, disminuyeron las posibilidades de un respaldo de los soviéticos para enfrentar a Estados Unidos. Desde 1987, cuando se publicaron noticias sobre conversaciones entre soviéticos y estadounidenses para buscar una solución a los conflictos regionales de la guerra fría, esas posibilidades tendieron a desaparecer.<sup>34</sup>

Aun cuando los soviéticos mantuvieron, en 1988, el ritmo de envíos de equipo militar a Nicaragua, la tendencia dominante en las relaciones entre las potencias era, después de 1986-1987, la de cambiar la confrontación por la negociación. En ese nuevo contexto, la estrategia sandinista de buscar la consolidación de la revolución, insertándose a fondo en la guerra fría, quedó invalidada.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> La ayuda económica soviética fue reducida en 75 millones de dólares entre 1987 y 1989; esta reducción constituía un mensaje a la dirigencia sandinista de iniciar correcciones a su deficiente conducción de la economía, por la vía de una perestroika local. Véase Linda Robinson, *op. cit.*, p. 10.

<sup>35</sup> En 1987 los sandinistas solicitaron un sustancial incremento de ayuda militar externa. A pesar del respaldo oficial, de las dos potencias involucradas, al Acuerdo de Esquipulas de ese año, que preludiaba un arreglo negociado en Nicaragua, los soviéticos atendieron la petición sandinista. En 1988, cuando ya se habían realizado las negociaciones entre los sandinistas y la resistencia armada, la ayuda militar soviética alcanzó el nivel de 515 millones de dólares; citado por Linda Robinson, *Intervention or Neglect, op. cit.*, pp. 165-167.

Mientras los soviéticos evidenciaban su abandono de respaldo estratégico al sandinismo, el país se hallaba en un desastre económico. Varios cientos de miles de nicaragüenses se habían refugiado en el exterior y la sociedad, militarizada, mostró sus peores tendencias de violencia. El proyecto revolucionario de una Nicaragua socialista en una Centroamérica prendida en llamas revolucionarias se había terminado. Los intereses locales involucrados en el proceso revolucionario, según las diferentes perspectivas de sus actores, desaparecieron en la confrontación ideológica internacional. La sociedad nicaragüense, incapaz de conocer el destino de sus conflictos, se convertía en una sociedad polarizada, llena de incertidumbres.

Los líderes sandinistas advirtieron que la presión por solucionar el conflicto por la vía negociada colocaría las prioridades de solución en las áreas del conflicto internacional en donde más habían colocado sus prioridades de sobrevivencia: desvinculación del proyecto sandinista con el bloque socialista, limitación de armamentos, reducción de efectivos militares y acomodo de intereses políticos entre facciones opuestas. En pocas palabras, la cancelación de su proyecto político.

Los líderes antisandinistas compartían la misma sensación de abandono. Sumamente irritados algunos importantes líderes de la resistencia optaron por no estar presentes en la reunión en que los enviados de Washington comunicaron al directorio de la resistencia, en Miami, que todo había terminado. Cuando se logró el acuerdo mínimo entre los actores internacionales de que los conflictos debían ser resueltos por la vía de la negociación, los actores locales maniobraron, según sus propias posibilidades, para transformar esas concertaciones en acuerdos propios.

El traslado de la diplomacia internacional a la negociación local sería difícil.

Aunque la experiencia de Contadora sirvió para estimular la idea de la negociación entre países, más tarde retomada por los propios centroamericanos en las reuniones presidenciales de Esquipulas, la concertación entre contrarios tenía un sentido diferente: significaba una derrota interior.

En un país que había visto crecer los valores de la confrontación sobre los del compromiso, la negociación tenía un sabor de

derrota. Para un régimen como el sandinista, era una derrota mayor. Para los opositores al sandinismo, la negociación implicaba una victoria política, pero curiosamente la simple idea de negociar llegó a motivar profundas divisiones internas.

La negociación bajo presión internacional no serviría a los sandinistas para lograr la consolidación de su régimen. En todo caso serviría como una opción de sobrevivencia.<sup>36</sup> Para los opositores al sandinismo, la negociación también era una opción de sobrevivencia y, aunque no lo percibieran así, de algo más, como lo comprobarían al recibir la recompensa de la derrota electoral del sandinismo.

<sup>36</sup> Los observadores nacionales e internacionales marcaron el acontecimiento negociador como la única y mejor alternativa. “La razón es que no tienen otra alternativa mejor”, *La Prensa*, Managua, 15 de abril de 1988, p. 2; James Le Moyne, “Having Little Choice, the Sandinistas and the Contras Talk On”, en *The New York Times*, 5 de junio de 1988, p. 2.



### 3. LA ETAPA DE APERTURA NEGOCIADA: DE CONTADORA A ESQUIPULAS, SAPOÁ Y MANAGUA. LA RUTA DE UN DERRUMBE NEGOCIADO

#### LOS EFECTOS DE LAS NEGOCIACIONES DIRECTAS ENTRE EL SANDINISMO Y SUS OPOSITORES

En este capítulo trataremos de establecer los efectos que produce la presión internacional para lograr una solución negociada del conflicto nicaragüense, en un nivel interno.

Distintos autores han señalado a la presiones externas como una fuente de la democratización.<sup>1</sup> Aquí tratamos de precisar cómo la presión por una negociación entre fuerzas contrarias induce a un proceso de liberalización de un régimen que, a diferencia de otros gobiernos autoritarios, se consideraba instalado en el poder de manera irreversible. También es importante que este proceso se distinga de los casos en que el régimen es derrotado en una guerra internacional.

El sandinismo no sólo cultivó su irreversibilidad, sino que actuó en función de la destrucción de las alternativas contrarias. Sin embargo, en cuanto se inició el traslado de las negociaciones de nivel regional (Contadora) al subregional (Esquipulas) y luego a un nivel nacional (Sapoá y Managua), esa circunstancia afecta profundamente la naturaleza del régimen establecido, en virtud de que esa cascada de negociaciones pone en evidencia su reversibilidad.

En el contexto de las negociaciones nicaragüenses de 1988, podemos detectar seis efectos que produce la negociación entre

<sup>1</sup> Los trabajos citados de Juan Linz, Alfred Stepan, Guillermo O'Donnell y Adam Przeworski, coinciden en señalar que ello ocurre así, especialmente en tiempos de crisis, en los cuales el papel de la geopolítica es relevante para el inicio de una liberalización.

contrarios y que se suceden uno tras otro con el fin de que se impacte significativamente el orden político establecido en Nicaragua desde 1979.<sup>2</sup>

#### EFFECTO IGUALADOR DE LOS CONTRINCANTES

El primero de los efectos se refiere a que la presión externa para que las partes locales en conflicto negocien; modifica la asimetría de poder previamente existente y producen un efecto igualador de los contrincantes. La guerra deja de ser un conflicto entre Nicaragua y Estados Unidos, tal como lo presentaba la diplomacia sandinista, y se traslada como conflicto entre fuerzas político-militares insertas en la sociedad nicaragüense.

#### EFFECTO SOBRE LAS LEGITIMIDADES POLÍTICAS

Confiados en su fuerza, los sandinistas basaron su legitimidad en el triunfo sobre el gobierno de Somoza y presentaron su proyecto como la única solución de largo plazo a los problemas económicos, sociales y políticos del país. No basaron su legitimidad en la conservación de alianzas perdurables. Más bien, se preocuparon por consolidar el monopolio del poder y confiar en la fuerza militar y en el control burocrático "para irse solos internamente", sobrestimando su poder. Con mucha facilidad abandonaron fuerzas y personalidades aliadas y las convirtieron en adversarias y luego en enemigas asociadas con sus tradicionales enemigos armados. Según los sandinistas, la suya era la única fuerza legítima en el proceso de transformar el país.<sup>3</sup> La negociación con la resistencia nicaragüense, además del efecto igualador de la negociación, modificó los términos que sustentaban tanto la legitimidad del

<sup>2</sup> Una primera discusión sobre estos efectos se encuentra en Xóchitl Lara y René Herrera Zúniga, "La participación en Nicaragua" avance de investigación, México, CIDE, junio de 1993.

<sup>3</sup> Véase la discusión al respecto en Giuseppe di Palma y Laurence Whitehead (eds.), *The Central American Impasse*, Londres, Crom Helm, 1986, pp. 225-226.

régimen como la de sus opositores armados. Ya no eran los únicos legítimos en el juego del poder.

#### EFFECTO SOBRE LAS LEALTADES DE LOS SEGUIDORES POLÍTICOS DE AMBOS BANDOS

El tercer efecto consiste en que la negociación con el contrario, en un conflicto en el que sus actores han negado insistentemente esa posibilidad, modifica las lealtades de sus respectivos seguidores y produce en ellos, casi al mismo tiempo, frustración y desencanto, en especial entre los jóvenes combatientes, quienes la advierten como derrota.

Esta situación se halla relacionada con realineamientos oportunistas de grupos o liderazgos estratégicamente ubicados dentro del régimen y de la organización opositora armada, que no habían aparecido a flote en momentos anteriores. En esto es útil la división que O'Donnell hace entre "duros" y "blandos", al hablar de la división que se produce entre la dirigencia del régimen que decide la apertura y la dirigencia de la resistencia nicaragüense que decide negociar con el sandinismo. En el caso de los sandinistas, su división anterior en tres tendencias o facciones se agravó durante la negociación con la resistencia. A su vez, la dirigencia de esta última se vio afectada con la decisión de negociar con los sandinistas. Rupturas y realineamientos resultaron de dichas decisiones, afectando la moral y la lealtad de los seguidores de ambos bandos.

#### EFFECTO SOBRE LA IMAGEN DEL MOVIMIENTO Y SUS LÍDERES

Éste se relaciona con el anterior, en el sentido que la intensa visibilidad del proceso de negociación tiene importantes impactos psicológicos sobre los actores de ambas fuerzas, pues se saben expuestos frente a la prensa, la radio y la televisión internacionales. Esta situación es vista por los dirigentes como un asunto que les afecta su imagen y la posición de poder que ocupan en sus respectivas organizaciones.

Los más variados medios de comunicación masiva aprovechan la circunstancia para calificar o descalificar a los actores de la negociación, con el ánimo de dibujar a “duros” y “blandos” frente a la población. A su vez, los dirigentes procuran utilizar el novedoso espacio del escenario para presentarse, de manera oportunista, como favorables u opuestos a una negociación con el contrario.

Es importante que se observe lo anterior para calcular, desde afuera, la correlación de fuerzas de las organizaciones que negocian. En esta perspectiva prevalece el interés, de parte de los líderes, de ubicarse frente a sus seguidores más que frente a la población en general. En cierto modo representan las cámaras internacionales funcionando, como en circuito cerrado, en los pasillos de cada facción. Esto tiene sentido porque satisfacía las expectativas de las tres facciones del sandinismo, con el fin de reafirmar sus liderazgos dentro de estas últimas.

Para comprobar lo anterior bastaba observar la división del trabajo, frente a la negociación, entre los líderes de cada facción. Los “duros” controlaban los medios de comunicación mientras se desarrollaban las negociaciones guiadas por los “blandos”. Las fotos de los líderes de la contra, con manchas de sangre alrededor, ocupaban las páginas de *Barricada* y *El Nuevo Diario*, en los días que la contra negociaba en Managua; asimismo, las estaciones de radio sandinistas mencionaban los nombres de los delegados de la contra y los señalaban como asesinos, genocidas, etc. Por otra parte, los “duros” adquirían posiciones de fuerza para impresionar a sus seguidores, de tal manera que cuestionaban a los “blandos” en sus manejos en la mesa de negociaciones.

#### EFFECTO QUE PRODUCE LA NEGOCIACIÓN EN LA POBLACIÓN NO MILITANTE

En esta situación, en cuanto la negociación se inicia y se informa al público, se presume que ella desencadena nuevas percepciones en la gente común respecto del futuro del país y de su propio futuro personal.

Es un efecto sobre quienes no son seguidores de nadie y para quienes la difusión de noticias del exterior (en la relación negociación igual a llegada de abundante ayuda económica, promesa de

empleo, suspensión del servicio militar obligatorio, amnistía, libertades públicas, etcétera) se vuelve una fuente que agrava la deslegitimación del régimen y alienta la resurrección de grupos políticos opositores interesados en una competencia política. No son grupos decisivos en la negociación, pero sí lo son posteriormente, cuando ésta es sometida a prueba en una contienda electoral abierta y supervigilada.

#### EFFECTO DE LA NEGOCIACIÓN SOBRE EL DISCURSO POLÍTICO

Este último efecto está relacionado con la apropiación que los líderes hacen del proyecto democratizador: los sandinistas dicen que negocian para contribuir a la paz del país; sus opositores manifiestan negociar con los sandinistas para impulsar la democratización del país. Paz y democratización reflejan identidades distintas que tratan de afirmarse en la negociación. Ésta modifica las identidades en el sentido de que la fuerza (objeto de la negociación en la estrategia sandinista) es sustituida por la influencia política (objeto de la negociación en la estrategia de sus opositores). La insistencia sandinista en la identidad pacificadora condujo la negociación a un punto de estancamiento, después de Sapoá, y propició un efecto fortalecedor de la identidad democratizadora de sus opositores, sin que éstos tuviesen que renunciar a la fuerza.

Desde 1988 hasta las elecciones de 1990, la contra pudo conservar su condición armada, mientras el sandinismo caía en una cascada de concesiones políticas para lograr el desarme de esta fuerza opositora. Este dismantelamiento sólo habrá de iniciarse después de las elecciones y se concretaría dos años después, de manera incompleta.

Todos estos efectos, sumados y aplicados al caso concreto de Nicaragua, tienden a materializarse en la forma de una descomposición del orden establecido por la revolución, dentro y fuera de ella y que puede medirse con el comportamiento general de la población durante las elecciones nicaragüenses de 1990.

La revisión de estos efectos nos ayuda a explicar la relación directa que hay entre la negociación sandinismo-antisandinismo (1988) y los resultados electorales de 1990, conservando la preocu-

pación teórica de avanzar en la explicación de una de las formas de liberalización negociada de un régimen político que, según sus dirigentes, había llegado para quedarse.

En este contexto, en seguida agruparemos estos seis efectos en tres temas afectados por la negociación: legitimidad del régimen, identidades políticas y pérdida de hegemonía sandinista en el orden interno, como consecuencia de la negociación y de la posterior derrota electoral de 1990.

## Legitimidad

Los zigzagueantes movimientos, militares y diplomáticos, que conducirían a copar el sandinismo, no respondían a un plan maestro o a una gran teoría, pero tampoco era necesario que así fuese: los sandinistas eran cada vez menos aceptados en Centroamérica, región en la que fueron identificados como “el problema”. Originalmente, tal posición era sustentada sólo por Honduras y El Salvador, pero luego la apoyaron los cuatro gobiernos centroamericanos. El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, señaló en diferentes ocasiones:

El régimen sandinista es la causa principal de la crisis en Centroamérica [...] El régimen sandinista es ilegítimo [...] No se vería con malos ojos su derrocamiento [...] Sandino sería el primer contra...<sup>4</sup>

El argumento de la guerra había sido un factor importante de la legitimidad del régimen sandinista, sustitutivo del fallido desempeño económico; las promesas del régimen, orientadas a generar el bienestar de la población, desaparecieron como función legitimadora, fueron sustituidas por el argumento de la “guerra de agresión”:

...los problemas de fondo de la economía nicaragüense no se podrían resolver hasta que pudieran dedicarse los recursos a tareas producti-

<sup>4</sup> Declaraciones citadas por H. Rodrigo Jauberth Rojas, Gilberto Castañeda y otros (eds.), *La triangulación Centroamérica-México-EUA*, CIDDE, PACCA, CRIES, San José, 1990, p. 99.

vas en vez de destinarlos a la defensa. En otras palabras, hasta que finalice la guerra.<sup>5</sup>

Pero el fin negociado de la guerra coloca los términos de la legitimidad sandinista en un situación distinta: la negociación le resta reconocimiento al régimen y le impide su consolidación como régimen de socialismo tercermundista. Curiosamente, después de firmado el Acuerdo de Sapoá, en marzo de 1988, y en los meses siguientes en los que el sandinismo se ve obligado a hacer más concesiones políticas por medio de una política económica conservadora, se usa más la retórica de “vamos hacia el socialismo”. “Una curiosidad semántica que conmocionó a pocos.”<sup>6</sup> Desde que los sandinistas firmaron el Acuerdo de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, hasta la celebración de elecciones libres en febrero de 1990, sucedieron una serie de acontecimientos políticos que revelaron cómo la negociación desmoronó, entre los seguidores del sandinismo y del público en general, la creencia en la legitimidad del régimen.

La negociación de Sapoá, en marzo de 1988, quitó al sandinismo la función legitimadora que le daba la guerra y puso al desnudo las desventajas de su régimen respecto del orden interno (falta de eficacia socioeconómica); defendiendo su fuerza, los sandinistas perdieron su influencia política.

Al negociar con la contra en Sapoá y Managua, el gobierno de Daniel Ortega confirmó frente a la población que la oposición armada existía como una alternativa política organizada<sup>7</sup> y no como una simple “banda de mercenarios”. En ese sentido, la negociación aceleró la pérdida de legitimidad del régimen y fo-

<sup>5</sup> Declaraciones del ministro de Planificación y Presupuesto de Nicaragua, citado en “Contadora y crisis económica”, envío, núm. 57, Managua, Instituto Histórico Centroamericano, marzo de 1986, p. 9a.

<sup>6</sup> Carlos Vilas, “La contribución de la política económica y la negociación internacional a la caída del gobierno sandinista”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, México, UNAM, 1990, p. 340.

<sup>7</sup> Como señala Adam Przeworski, la pérdida de legitimidad puede no causar el derrumbe de un régimen; para que ello ocurra es preciso que los individuos tengan de manera reconocida una alternativa, una opción frente al consentimiento forzado. Véase su artículo “Algunos problemas en el estudio de la transición a la democracia”, en Guillermo O’Donnell y otros (eds.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, vol. III, Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 88.

mentó una esperanza de movilización política opositora. Al acordar ambas fuerzas un cese al fuego a cambio de un proceso de democratización que tendría una prueba política en el proceso electoral programado para 1990, el país vio renacer la posibilidad de una contienda electoral decisiva.

A pesar de la notable debilidad de los partidos y organizaciones civiles opositoras y de que la contra misma estaba inhabilitada para actuar como partido político en la contienda de 1990, la negociación favoreció en Nicaragua lo que para el contexto sudamericano O'Donnell llamó la resurrección de la sociedad civil.<sup>8</sup>

Si los sandinistas pensaron que la negociación les permitiría una relegitimación frente a la sociedad, al ofrecerse como promotores de la paz, se equivocaron. El problema de su supervivencia no estaba en la guerra, en la fuerza, sino en que toda la trama política y social del país estaba deteriorada; éste era un argumento que hacía a la población vulnerable a las demandas propiamente políticas de la oposición. Al ofrecer la paz se producía un efecto de alivio en la población, pero ésta no atribuía los méritos al sandinismo. La paz tenía sentido en la medida en que la población la asociaba con recursos y ayuda externa, misma que a su vez era asociada con los opositores al sandinismo en virtud de sus relaciones con Estados Unidos. La sucesión de ofertas políticas opositoras conducía a un solo conjunto de promesas: paz, democracia y recuperación económica.

Para los sandinistas era un problema distinto la relación paz y democracia. Tuvieron la oportunidad de abanderarse como gestores de la democratización; sin embargo, dejaron ese privilegio a la oposición y asumieron como bandera principal la defensa de su fuerza (la rendición de la contra). Más interesados en la función ideológica de la rendición militar de la contra (“ganamos la guerra”) que en los aspectos políticos prácticos de lograr, vía negociación, la cooperación opositora para un plan de democratización,

<sup>8</sup> “Una vez que algo ha sucedido, una vez que los ‘blandos’ prevalecieron sobre los ‘duros’ y comenzaron a otorgar garantías individuales y ciertos derechos de cuestionamiento, y a negociar con algunos opositores escogidos del régimen, es probable que haya una movilización generalizada, que hemos preferido describir como ‘la resurrección de la sociedad civil’”, Guillermo O'Donnell y Phillippe Schmitter, *Transiciones desde un gobierno autoritario*, op. cit., vol. 4, cap. 5, p. 79.

los sandinistas quedaron en una posición difícil: habían quedado obligados a la democratización frente a los países vecinos, pero dentro del país, la bandera de la democratización la enarbolaba la oposición!

Ustedes se presentan como abanderados de la democracia y dicen que los sandinistas no han hecho nada, que son peores que el somocismo. Si así entendemos las cosas no vamos a llegar nunca a nada [...] no ven nada positivo en el sandinismo. ¿Cómo suponer que verán algo bueno después? [...] Ahora San Bolaños dice que aquí no hay democracia [...] pero quedemos claros que aquí estamos negociando el fin de la guerra, no la democracia [...] no permitiremos jamás la reforma de la Constitución.<sup>9</sup>

Ese discurso de Humberto Ortega en la mesa de negociación con los dirigentes de la resistencia reflejaba que precisamente lo que se estaba discutiendo era la democratización del país, no la rendición de la contra y que ello significaba el drama del sandinismo: "...Sapoá es bien claro en su objetivo de poner fin a la guerra para lograr la democratización."<sup>10</sup>

Puesto de otra manera: "Ustedes quieren el fin de la guerra para quedarse como partido armado único, nosotros queremos la eliminación de las causas que nos llevaron a la guerra."<sup>11</sup>

Al negociar con la contra, los sandinistas no estaban concertando el fin de la guerra; negociaban la apertura de su régimen. Nunca lo reconocieron en el discurso público, pero era evidente durante las negociaciones mismas.

La insistencia en utilizar la negociación militar como si fuese una estrategia separada de la apertura política, estaba orientada a separar la fuerza militar de la influencia política, sin darse cuenta que en el caso de la oposición, fuerza e influencia eran inseparables. Según un funcionario sandinista: "La negociación es triple:

<sup>9</sup> Humberto Ortega en la mesa de negociaciones, sesión del 28 de abril de 1988, Managua.

<sup>10</sup> Adolfo Calero en la mesa de negociaciones, sesión del 28 de abril de 1988, Managua.

<sup>11</sup> Pedro Joaquín Chamorro en la mesa de negociaciones, sesión del 28 de abril de 1988, Managua.

militar con la contra; política con los partidos en el diálogo nacional; de seguridad, con Estados Unidos.”<sup>12</sup>

Los medios democráticos que adoptaron bajo la presión internacional, como promesa primero y como obligación después, para facilitar la negociación y poner fin a la guerra civil, despertaron expectativas de competencia política entre grupos y organizaciones civiles que habían sido reprimidas;<sup>13</sup> por otra parte, al negociar con los contrarios armados, debilitaron su monopolio en el ejercicio de la fuerza y autoridad sobre el territorio y la población.<sup>14</sup> En ambos casos, la negociación actuó en dirección contraria a los intereses sandinistas y señaló el camino para que se operara en el país una tendencia en el público para identificar la concertación como una debilidad del sandinismo.

<sup>12</sup> Declaraciones del jefe de Inteligencia Militar del Ejército Popular Sandinista, mayor Ricardo Wheelock, citado en *Barricada*, Managua, 19 de abril de 1988, p. 4; en el mismo sentido, véase el editorial de *Barricada*: “La democratización como evasiva”, 20 de abril de 1988, p. 3.

<sup>13</sup> Alentados por el ambiente de negociación, la Coordinadora Democrática lanzó en enero de 1988 la más fuerte y decidida campaña de oposición en las calles de la capital; la reapertura del diario *La Prensa* y de estaciones de radio opositoras, mostró que la gente “le había perdido el miedo a los sandinistas”; la huelga de seis mil trabajadores de sindicatos independientes, que se extendería desde febrero hasta mayo de 1988, mostró la profunda oposición al sandinismo en sectores sociales muy diversos.

<sup>14</sup> La discusión sobre el control territorial y poblacional por parte de la contra, no pudo ser evitada por el sandinismo, que terminó reconociendo que ese asunto afectaba la concertación de un cese definitivo al fuego. Una vez señalada la existencia de zonas (siete en total) en las que la resistencia armada se ubicaría y en las cuales el gobierno no ejercería su autoridad, era inevitable que los sandinistas se sintieran entrampados. Las reuniones de negociación se estancaron, después de firmado el Acuerdo de Sapoá el 23 de marzo de 1988, precisamente por la dificultad de llegar a un *modus operandi* de dichas zonas, en cuya firma insistía la contra, mientras el sandinismo proponía una serie sucesiva de prórrogas a la tregua militar, para obviar el problema del reconocimiento a una autoridad paralela a la suya. Si políticamente habían tenido que hacer dicho reconocimiento, legalizarlo en un acuerdo escrito de *modus operandi* les resultaba más complicado aún. El tamaño del territorio reconocido a la contra era similar a todo el territorio nacional de El Salvador y el no ejercicio de su autoridad implicaba el desmantelamiento de estructuras militares y de inteligencia que con la denominación de “cooperativas agrarias” servían para controlar a las poblaciones rurales.

¿Por qué el sandinismo no pudo usar la negociación como fuente de relegitimación de su proyecto revolucionario? Porque llegaron a ella cuando tenían más enemigos que amigos. No calcularon los tiempos políticos y cuando tuvieron que negociar confundieron su estrategia: negociaron para defender su fuerza; no se percataron que lo que estaba en juego era la influencia política en la definición de un proyecto democratizador, que ellos mismos habían abandonado al romper sus alianzas con sectores democráticos. Una influencia que sólo podía estar, para entonces, en manos de sus opositores. Lo que antes pudo verse como magnanimidad de la revolución se vería después como debilidad.<sup>15</sup> Como señala Di Palma, el problema de la extrema izquierda radica exactamente en su propensión única a considerar que su hegemonía y la legitimación del sistema son idénticas, fusionándolas en un solo bloque ideológico y un proyecto estratégico.<sup>16</sup>

El manejo que la propaganda sandinista hace de la decisión de negociar, no para ofrecer democracia (pues “tenemos democracia desde 1979”)<sup>17</sup> sino para negociar la rendición de sus contrarios (“si no se rinden, los aplastaremos”),<sup>18</sup> refleja la confusión del significado de la negociación. El sandinismo creyó que la negociación era la vía para lograr la supervivencia hegemónica de su posición en un régimen liberalizado por ellos mismos, cuando en realidad, en la negociación, sus contrarios los condujeron a efectuar dicha liberalización. Entrampados en esta confusión, no pudieron sacar ventajas de la negociación, cedieron a sus opositores la identidad democratizadora del país, justo ante la inminencia de una contienda electoral abierta.

<sup>15</sup> El tiempo consumió las opciones del sandinismo para mantener, vía concesiones a sus opositores políticos, relegitimado el proyecto. Cuando concedieron lo hicieron a sus opositores armados, acrecentando los problemas de la unidad interna del sandinismo. Véase el señalamiento que hacen al respecto, Whitehead y Di Palma en *The Central American Impasse*, *op. cit.*, p. 226.

<sup>16</sup> Giuseppe Di Palma, “No es fácil establecer el predominio del partido”, en T. J. Pempel (comp.), *Democracias diferentes*, México, FCE, 1991, p. 196.

<sup>17</sup> Véase nota en este mismo capítulo.

<sup>18</sup> Texto de la manta colocada a la entrada de Managua, por donde pasaría la delegación de la contra en su primera ronda negociadora en abril de 1988.

El sandinismo buscó la negociación tardíamente, cuando ya no le era útil para lograr su propia supervivencia hegemónica en un régimen liberalizado por ellos mismos. Asistió a la negociación forzado, políticamente debilitado y con una economía en ruina. En esos términos, sentarse a la mesa con un contrario que es, además, el que le ha ocasionado esas circunstancias, constituía renunciar con anticipación a la perspectiva de ser un ganador en la paz. Procurar la conservación de su hegemonía jugando a la legitimación democrática exigida por sus contrarios, resultó un juego fatal para el sandinismo.

La promoción externa para la solución negociada del conflicto nicaragüense fue, en orden ascendente, una fuente de cambios en las relaciones de poder dentro de Nicaragua. Los sandinistas negaron siempre la posibilidad de sentarse a negociar con sus contrarios armados, por considerar que éstos no eran interlocutores para una solución al problema nacional. Los calificaba como una banda de “mercenarios contrarrevolucionarios organizados, entrenados, financiados, armados y dirigidos por la CIA”.<sup>19</sup>

En consecuencia, durante varios años insistieron en que la negociación debía ser directamente con Estados Unidos. “Hablaremos con el dueño del circo, no con sus payasos”, solían decir. Lo que al principio era una forma de evadir la pérdida de legitimidad que representaba el reconocimiento de la contra como actor nacional y, al mismo tiempo, una forma de ganar legitimidad internacional bajo la imagen de gobierno “agredido”, se volvió más tarde un problema inevitable.

Este criterio prevaleció desde 1982, cuando sucedieron los primeros enfrentamientos armados, hasta el cierre de las negociaciones de Manzanillo, entre junio de 1984 y enero de 1985, luego de nueve rondas, ocho en Manzanillo y una en Atlanta, destinadas a normalizar las relaciones bilaterales.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Tomado de la presentación general de la propuesta de Nicaragua de un tratado con Estados Unidos, del 15 de octubre de 1983, en Bruce Bagley (ed.), *Contadora and the Central American Peace Process. Selected Documents*, Sais Papers, núm. 8, Westview Press, 1985, p. 62.

<sup>20</sup> Las pláticas bilaterales, concretadas en Manzanillo, fueron insistentemente pedidas por Nicaragua a Estados Unidos, luego de que habían fracasado las pláticas

A partir de 1984, cuando se aplicó la primera ayuda pública a la contra, aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 1983, este grupo representa algo más que una banda: en ese tiempo contaba con 8 500 hombres. Si la oposición armada era un instrumento de Estados Unidos para tener influencia en los asuntos nicaragüenses, para los nicaragüenses mismos, especialmente campesinos y pequeños propietarios rurales, se convirtió en una alternativa eficaz para defenderse de las políticas sandinistas. En ambos casos, la contra evolucionó más allá de lo que pensaron originalmente sus gestores y sus detractores y llegó, a finales de 1987 a convertirse, con más de 17 mil hombres armados, en una verdadera rebelión campesina.

En 1987 la contra ya representa una fuerza significativa, en todo sentido. El control de la política de los contras en Estados Unidos llegó a convertirse en uno de los problemas más influyentes de las actividades en las áreas clave de decisión política estadounidense. Cuando esa política dejó de ser área exclusiva de la CIA debido a la Enmienda Boland y pasó al control del Departamento de Estado y del Consejo Nacional de Seguridad, hubo repercusiones burocráticas de enorme significado en el desarrollo de los

---

entre Thomas O. Enders y Daniel Ortega, realizadas en Managua el 12 de agosto de 1981, como lo revela el intercambio de cartas sobre el tema que se extiende hasta el 13 de agosto de 1982. Las condiciones para la normalización de las relaciones bilaterales, desde la perspectiva de Estados Unidos, se encuentran en la correspondencia de Thomas O. Enders a Daniel Ortega del 28 y 31 de agosto de 1981, del 8 y 16 de septiembre del mismo año, del 28 de septiembre de 1981 dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Miguel D'Escoto, del 8 de abril de 1982 a Daniel Ortega en la que se le entrega al gobierno de Nicaragua una propuesta de ocho puntos y en la última carta de Thomas O. Enders a Daniel Ortega, fechada el 1 de julio de 1982. Las condiciones de Nicaragua a Estados Unidos se encuentran en la correspondencia de Miguel D'Escoto B. al secretario de Estado, Alexander Haig, del 19 de septiembre de 1981, del viceministro Víctor Hugo Tinoco a Thomas O. Enders, del 31 de octubre de 1981, el comunicado oficial de la cancillería nicaragüense del 7 de septiembre de 1982, que hace referencia a la conversación entre Rafael Córdova Rivas, de la Junta de Gobierno y el vicepresidente George Bush, en Bogotá el 7 de agosto, así como hace referencia a una propuesta de 13 puntos en carácter de contrapropuesta a los Ocho Puntos de Thomas O. Enders enviada a éste el 13 de agosto de 1982, última comunicación epistolar sobre el tema. En este comunicado oficial se pide una nueva ronda de pláticas directas para realizarse en México, Canadá, Venezuela, Francia o España.

acontecimientos nicaragüenses. Era una lucha de todos los días, entre visiones distintas para cumplir con un mismo objetivo.

“La CIA sabía qué rifle necesitaban los contras, pero en política nosotros sabíamos cómo hacerlo mejor”, diría años después uno de los principales actores estadounidenses del asunto nicaragüense.<sup>21</sup> Los sandinistas dedicaron todos sus esfuerzos a incidir en las batallas burocráticas estadounidenses, proporcionando con ello, a los actores internos de la política norteamericana, la ocasión para influir, a su vez, de manera cada vez más sofisticada en los asuntos internos de la oposición. Al considerar ilegítima a la contra y usar ese discurso para incidir en las pugnas burocráticas estadounidenses, los sandinistas aceptaban dar su reconocimiento a los opositores civiles. Con ello esperaban que una recomposición interna del liderazgo de la contra (tema que interesaba a la comunidad política estadounidense) se ligara al incremento de legitimidad de la oposición cívica interna, produciéndose una previsible combinación de fuerzas opositoras. El resultado fue que dirigentes políticos que estuvieron, directa o indirectamente asociados con el sandinismo durante la toma del poder en 1979, aparecieran luego en la cúpula de la resistencia nicaragüense.

Para esta discusión es importante ver cómo de esas pugnas burocráticas estadounidenses emergieron alternativas de acción política que terminaron por favorecer las coincidencias de objetivos entre la contra y los actores políticos en el interior del país. Desde 1984, aquellas pugnas facilitaron la ampliación de la base política del liderazgo de la contra.<sup>22</sup> Aunque estas circunstancias afectaron radicalmente los poderes e influencias que tenían algunos líderes

<sup>21</sup> Elliot Abrams, *Undue Process*, Free Press, 1992, p. 15.

<sup>22</sup> Se opera la transformación de las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FDN) a mediados de 1985, con la creación de la Unidad Nicaragüense Opositora (UNO) que suma al liderazgo de Adolfo Calero, opositor a Somoza, los de Arturo Cruz y Alfonso Robelo, antiguos miembros relevantes del gobierno sandinista. La nueva imagen de pluralismo es coincidente con los cambios en el Departamento de Estado, en donde se nombra a Elliot Abrams como subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos y figura decisiva en la política contra a partir de ese año. Abrams contaría después el significado de estos cambios en su libro *Undue Process*, Free Press, 1993, p. 15, y abundaría en el tema en sus conversaciones con un grupo de nicaragüenses en la presentación de su libro en Miami, el 3 de diciembre de 1993.

en la contra, finalmente resultaron decisivas para la estrategia destinada a favorecer los vínculos entre el orden político interno y la acción militar, al tiempo que se convertían en una táctica para enfrentar las resistencias de los liberales norteamericanos en el Congreso.

Al interiorizar la dificultad nicaragüense dentro del problema de las decisiones políticas estadounidenses, los sandinistas quedaron subordinados a los resultados de las batallas burocráticas norteamericanas.

Las acciones sandinistas en contra de la población rural alimentadas por la idea de que ésta apoyaba a la contrarrevolución, ayudaron al crecimiento de la oposición armada más allá de las expectativas de quienes en Estados Unidos favorecían esta política y más allá de lo que los sandinistas pensaron enfrentar. Las principales acciones fueron forzar la reubicación de miles de campesinos para evitar que se siguieran sumando a la contra. Los anuncios oficiales de reubicación masiva y forzosa de familias campesinas del norte del país, hacían caso omiso de las denuncias de abusos de la autoridad en su contra. El ministro del Interior, Tomás Borge reconoció, según publicó el diario *La Prensa* del 11 de febrero de 1985, que se estaban cometiendo abusos por parte de los soldados y que éstos serían castigados.<sup>23</sup> Un mes después Daniel Ortega anunciaba en la ciudad de Matagalpa que la reubicación continuaría.<sup>24</sup> En 1985, 180 mil nicaragüenses, considerados como apoyo potencial a la contra fueron forzados a dejar sus poblaciones durante 1986 y 1987; a éstos se sumaron otros 250 mil campesinos y pequeños propietarios.<sup>25</sup> A finales de 1985, año en que la ayuda aprobada por Estados Unidos había sido bloqueada en el Congreso,<sup>26</sup> la contra contaba con 17 mil hombres.

La resistencia armada al sandinismo se desarrolló entre pobladores asentados en regiones ajenas a las principales poblaciones urbanas del Pacífico. Pequeños propietarios y productores rura-

<sup>23</sup> *La Prensa*, Managua, 11 de febrero de 1985, p. 1.

<sup>24</sup> *La Prensa*, Managua, 11 de marzo de 1985, p. 1.

<sup>25</sup> Citado por Linda Robinson, *Intervention or Neglect*, Nueva York, A Council on Foreign Relation Book, 1991, p. 15.

<sup>26</sup> Jaime Morales Carazo, *La contra*, México, Planeta, 1989, p. 176.

les independientes y también campesinos identificados como “indios”, pero que en realidad son mestizos, muy conservadores e independientes, generalmente pequeños propietarios. Constituyen una fuerza productiva importante para la producción de alimentos; en su conjunto representan el principal proveedor de frijoles y maíz (85 y 90%, respectivamente),<sup>27</sup> son importantes productores de café (85% son pequeños productores).<sup>28</sup> Suele distinguírsele, desde la perspectiva urbana, como el “agricultor”, asociado al campesino pobre y aislado; constituye, sin embargo, un sector importante. Los sandinistas, aunque hablaban muchas veces en nombre de éstos, actuaron consistentemente en su contra por medio de políticas de precios que beneficiaban a los grandes productores, incluido el Estado.<sup>29</sup>

El argumento sandinista de que estaba combatiendo contra mercenarios y no contra nicaragüenses fue cada vez menos consistente con la realidad. A finales de 1985, los 17 mil hombres de la contra, difícilmente podían ser considerados “guardias somocistas” y la mayoría de los 20 comandantes regionales de esa fuerza eran considerados ajenos a cualquier referencia somocista.<sup>30</sup>

Durante 1985 la Comisión Permanente de Derechos Humanos reportó el encarcelamiento de siete mil ciudadanos acusados de pertenecer o de colaborar con la contrarrevolución, más 600 casos de desaparecidos y torturados, y de violaciones a sus derechos civiles.<sup>31</sup> La contra pasó de ser un pretexto para montar un impresionante aparato militar y de seguridad destinado a defenderse de

<sup>27</sup> Citado por Forrest D. Colburn, en *Post-revolutionary Nicaragua. State, Class, and the Dilemmas of Agrarian Policy*, University of California Press, 1986, p. 86.

<sup>28</sup> Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), “Nicaragua: estudio de la situación del empleo, la absorción de la mano de obra y otros aspectos en fincas y productores de café y algodón”, Managua, 1982, p. 22.

<sup>29</sup> El análisis de Forrest Colburn, ya citado, se orienta precisamente por la tesis de que los sandinistas terminaron castigando, con sus políticas agrarias, a los sectores rurales más numerosos en aras de mantener los alimentos baratos en las zonas urbanas, sede del apoyo básico al sandinismo.

<sup>30</sup> La descripción de un sandinismo fascista y una contra marxista es presentada por Ambrose Evans-Pritchard en su artículo “Fascist Sandinistas and Marxist Contras”, en *The Spectator*, 13 de febrero de 1988, pp. 8-10.

<sup>31</sup> Citado por Linda Robinson, *op. cit.*, p. 16.

“la agresión imperialista”, para convertirse en una amenaza real para la sobrevivencia del proyecto sandinista.

Los gobiernos centroamericanos y los miembros de Contadora aumentaron sus presiones al sandinismo en la dirección de que si querían quitarse la presión de la contra tendrían que democratizarse y para que esto último sucediera deberían negociar directamente con ésta. Es esta cadena de presiones en ascenso, junto al incremento de la guerra y las conexiones entre la oposición armada y los grupos opositores civiles, lo que fue llevando al abandono de asimetrías sustentadas por el sandinismo. La diferenciación pregonada por el sandinismo de una oposición cívica y una armada, desapareció en el tiempo.

La pinza se fue cerrando, con los sandinistas adentro. La ofensiva militar de la contra y la diplomática internacional se coordinaron de tal manera que dejaron sin opciones al sandinismo. En un momento la presión militar era muy significativa (1983-1984, primera ayuda pública de Estados Unidos a la contra), en otro, aquélla disminuía y aumentaba la presión diplomática (finales de 1985 y primer semestre de 1986, cuando Contadora parece llegar a la firma de un acuerdo y el gobierno de Estados Unidos envía a Phillip Habib en una ofensiva diplomática), para luego acrecentar las presiones militares de manera dramática (segundo semestre de 1986, cuando el 25 de junio el Congreso de Estados Unidos aprueba 100 millones de dólares como ayuda a la contra, colocando el tema nicaragüense en su punto militar más álgido), para luego, en 1987, llevarlo a la presión diplomática sin que disminuyera la presión militar.

El paso definitivo de las gestiones de Contadora a las centroamericanas de Esquipulas sucedió en agosto de 1987, y es coincidente con la aprobación estadounidense de apoyo financiero a la contra.

Planeada o no, la estrategia de contención diplomático-militar del sandinismo, llegó a su clímax cuando Daniel Ortega, luego de su visita a Moscú para asistir a las celebraciones del 70 aniversario de la revolución socialista, anunció en Managua el 5 de noviembre de 1987, la disposición de su gobierno de concertar el cese al fuego con las que llamó “fuerzas irregulares”, por medio de un intermediario. Días después viajó a Washington, donde el 13 de

noviembre anunció una propuesta oficial de negociación con la contra. En la reunión de presidentes centroamericanos, en La Garita, Alajuela, el 15 de enero de 1988, Óscar Arias, presidente de Costa Rica, puso el panorama en claro a Ortega, al señalar:

Si Nicaragua adopta medidas unilaterales, el Congreso norteamericano no tendrá argumentos para votar la ayuda a los contras. Si se vota y aprueba la ayuda, Esquipulas no habrá servido para nada.<sup>32</sup>

La medida unilateral referida era que hablara directamente con la contra y tomara medidas de democratización conforme le exigía el Acuerdo de Esquipulas. De otra manera, la votación de ayuda, por 36 millones de dólares, prevista para el 3 de febrero, podría ser favorable. No había alternativa. El 2 de febrero, en la víspera de la votación en el Congreso, Daniel Ortega anunciaría la decisión de establecer conversaciones directas y sin intermediario con las “fuerzas irregulares”, a un alto nivel. La votación en el Congreso fue contraria, 219 a 211, a la reanudación de la ayuda, congelándola por seis meses, para dar oportunidad a la negociación. Para los demócratas en Estados Unidos, ese hecho quitaba el pretexto a los sandinistas de no negociar; para los republicanos, significaba que el gobierno de Nicaragua eliminara cualquier incentivo de negociar seriamente con la contra, debido a que ésta carecía de recursos.<sup>33</sup>

La batalla por resistir la negociación había terminado en ambos bandos. La contra ganó la legitimidad de interlocutor del proceso político nicaragüense, a expensas de la legitimidad del régimen.

Comenzaba una batalla distinta: justificar, en ambas fuerzas, la decisión y tratar de ganar con ella en un terreno incierto: el de las elecciones de 1990. Los sandinistas intentaron esa justificación frente a los países centroamericanos:

<sup>32</sup> Citado por Rodrigo Jauberth y Gilberto Castañeda, “La triangulación...”, *op. cit.*, p. 110.

<sup>33</sup> Linda Robinson, *op. cit.*, p. 33; en el mismo sentido se manifiesta Jaime Morales Carazo señalando que primero la debilitaron y luego la empujaron a un “delicadísimo proceso de negociación”, *op. cit.*, p. 183.

Como ya lo dijimos [...] en nuestro país el proceso de democratización no comenzó a partir de Esquipulas II, sino del propio 19 de julio de 1979. Es por ello que para Nicaragua no ha significado problema alguno impulsar un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social [...] Todo lo contrario [...] para nosotros la democracia es un elemento consustancial a nuestra Revolución...<sup>34</sup>

Los líderes de la resistencia lo hicieron, por su parte, deslindando la paz y la democracia: “Los sandinistas entienden la paz como la ausencia de la guerra; para nosotros la paz implica la reforma democrática.”<sup>35</sup>

Todos los días previos a la firma del acuerdo de Sapoá, pero especialmente durante esa noche —23 de marzo de 1988—, la radio sandinista leía una y otra vez los nombres de los “asesinos, genocidas y criminales, que están firmando su rendición en Sapoá”. Un observador internacional que se encontraba en el hotel Las Espuelas, de Liberia, Costa Rica, población cercana a Sapoá, Nicaragua, señalaría, mientras escuchaba una estación de radio sandinista: “Ya no importa lo que digan: en la misma hoja de papel, en la misma mesa y en territorio nicaragüense, se estampa en este momento la firma de Ortega y la de Calero.” Ambos bandos habían acordado el cese al fuego. Independientemente de lo que cada quien pensara en ese momento, los contendientes quedaron en igualdad de circunstancias frente a la población y frente al resto del mundo.

<sup>34</sup> Tomado del documento “Fundamentación del gobierno de Nicaragua para la discusión del cese al fuego”, entregado por el gobierno sandinista a los delegados de la resistencia nicaragüense y a la prensa en Sapoá, Rivas, fechado el 21 de marzo de 1988.

<sup>35</sup> Adolfo Calero, en la primera ronda negociadora directa en Managua, 17 de abril de 1988. Referencias de este argumento son publicadas en Julia Preston, “Managua’s Arms Offer is Rejected”, en *The Washington Post*, abril 18 de 1988, A241 col 1.

## Identidades políticas

Tener un ejército grande, bien equipado, destinarle 56% del presupuesto nacional a su funcionamiento, controlar todo el gobierno aplicar restricciones al funcionamiento de las organizaciones que no están bajo su control directo (sindicatos independientes, asociaciones religiosas, empresas de comunicación, etc.), puede garantizar una superioridad para dominar en cualquier mesa de negociación destinada a poner fin a una guerra. Pero el ejercicio o la renuncia de la fuerza no es el objetivo de una negociación entre actores armados, cuando éstos responden a una lucha por el poder político. La fuerza militar no sólo no es suficiente, sino que carece de valor en cuanto se inicia la negociación.

Los sandinistas, pese a su superioridad militar, sabían que estaban en una negociación política pero trataron de mantenerla en asuntos estrictamente militares. La identidad del proyecto negociador era, para el sandinismo, de pacificación.

Para sus opositores, la identidad del proyecto era la democratización. La simple decisión de sentarse cara a cara, como contendientes en un proyecto de país, disminuía, casi anulaba el significado de la fuerza militar y privilegiaba el de la influencia política. Desde un comienzo ésa era la trampa de la negociación. Los sandinistas cayeron en ella, sin poder salir.

Posteriormente a la firma del Acuerdo de Sapoá, que concede influencia política a la contra, los sandinistas trataron una y otra vez de lograr un acuerdo militar destinado a buscar una rendición y posterior desmantelamiento de la contra. Esta última no sólo resistió dicho acuerdo sino que logró, por no llegar a él, que las reformas democráticas fuesen el precio a pagar por su desarme. Una concesión arrastraba a la otra, sin que nunca fuera suficiente para llegar a la firma del acuerdo militar. De hecho, nunca sucedió ese acuerdo y los sandinistas llegaron a las elecciones sin que lograran la rendición de la contra.

La identidad pacificadora del sandinismo quedó rezagada respecto de la identidad democratizadora de sus opositores. Mientras más se exigía la rendición de la contra, más se fortalecía la identidad del proyecto democratizador, como apropiado por la oposición cívica respaldada por la contra.

El discurso cotidiano del régimen insistiendo en que negociaba con su contrario porque éste estaba acabado moral y militarmente, se revirtió cuando el contrario no se rindió.

La desesperación por ganar lealtades a la negociación es mayor en los grupos de extrema izquierda revolucionaria, porque no han superado la idea de que negociar es perder. Más aún, negociar con quienes ellos han jurado no negociar, es perder más.<sup>36</sup> En este sentido se hallan las declaraciones de funcionarios sandinistas: “La contra perdió la guerra en un estricto sentido militar, desde hace mucho tiempo.”<sup>37</sup> “Con el Acuerdo de Sapoá le ayudamos a la contra a salvar la cara, les dimos una salida política elegante.”<sup>38</sup>

En contraste, para la otra parte, aunque llegó a la mesa con menos poder militar, el hecho de estar en un plano de igualdad formal le significó una condición de supervivencia legítima que no poseía. La suspensión de ayuda estadounidense a la contra, antes de iniciar la negociación, era una condición sandinista. Estados Unidos satisfizo esa demanda, pero a cambio los sandinistas tenían que concederle a la contra su reconocimiento político nacional; esto último representaba un hecho que no se votaba en el Congreso americano.

“Sapoá ha causado un verdadero terremoto político”,<sup>39</sup> declaró un líder de la contra.

Los sandinistas pensaron que ese reconocimiento y la presencia de líderes contras en la capital del país —“una píldora amarga”,

<sup>36</sup> Las fotos del comandante Enrique Bermúdez, rodeado de ataúdes y cruces, presentadas por el diario sandinista *Barricada*, mientras la contra estaba en la mesa de negociaciones en Managua, tenía precisamente un efecto contrario al buscado por los sandinistas. Véase fotos en *Barricada*, Managua, 10 de junio de 1988, p. 6.

<sup>37</sup> Humberto Ortega en conferencia de prensa, citado por *The Washington Post*, 18 de abril de 1988, p. A24.

<sup>38</sup> Declaración del vicescanciller Víctor Hugo Tinoco, citado en *The Washington Post*, 18 de abril de 1988, p. A24.

<sup>39</sup> Declaraciones de Alfredo César, de la resistencia nicaragüense, en Managua, citado en *Los Angeles Times*, 17 de abril de 1988, p. 10; *Barricada* fue también expresivo al citar la frase de César y lo manifestó en el título de su editorial “Los contras en Managua: una visita reveladora”, en *Barricada*, Managua, 22 de abril de 1988, p. 3.

que debían tomarse, según dijo Humberto Ortega—<sup>40</sup> no tendría repercusiones pues este grupo cambiaría su identidad armada en política sólo después de rendirse. Pero la resistencia tampoco estaba interesada en rendirse para convertirse en alternativa política por sí misma, sino que bastaba ganar su identidad política y Sapoá era suficiente. Convertida en interlocutora legítima, la contra podía hacer uso de su influencia política trasladándosela a la oposición cívica. En este sentido, los opositores cívicos internos fueron reconocidos por los sandinistas como única fuerza política. La oposición cívica gozaba de legitimidad política pero carecía de atractivo y fuerza para ejercerla. El reconocimiento sandinista a la contra, en Sapoá y en Managua, se la estaba proporcionando.

La condición impuesta a lo largo de todas las negociaciones para el cese al fuego, por parte de los sandinistas, de que la resistencia no podría participar en las elecciones de 1990 como partido propio, a menos que se rindiera, facilitó ese traslado de identidades del grupo armado al candidato opositor de la UNO.

Los sandinistas actuaron bajo la óptica de que la negociación no era política, porque ésta se realizaba con la oposición cívica: “La contra no puede esperar que el gobierno tenga dos diálogos políticos al mismo tiempo.”<sup>41</sup>

De hecho, el verdadero diálogo político era el que estaba ocurriendo en las negociaciones con la resistencia, y el sandinismo, pese a su retórica, estaba consciente de que la estrategia de pacificación buscada por ellos, implicaba el refrendo de la estrategia de democratización de sus opositores, no importa cómo los clasificara (cívicos o armados).

Mientras la dirigencia de la contra realizaba su primera visita a Managua en abril de 1988 y el general Humberto Ortega negociaba con ellos, el presidente Daniel Ortega gritaba ante una muchedumbre convocada para calmar a los enemigos de la negociación, dentro del sandinismo, en la Plaza de la Revolución:

<sup>40</sup> Citado en *Los Angeles Times*, 17 de abril de 1988, p. 10.

<sup>41</sup> Declaración del vicescanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, citado en *The Washington Post*, 18 de abril de 1988, p. A1.

Actuamos con gran flexibilidad, pero hay límites. Si la negociación no avanza, debemos estar preparados para dejar nuestro trabajo, nuestras escuelas y marchar al frente para combatir, para destruir a los mercenarios de una vez por todas.”<sup>42</sup>

La negociación, vista como escenario de la rendición de la contra, colocó al sandinismo en una posición desesperada: si no lograba que la contra se rindiera mediante un nuevo acuerdo, el alargamiento de la negociación le obligaría a hacer más concesiones a la oposición cívica y al hacerlas, más se dilataba la contra en llegar a un arreglo con el sandinismo. Esto último fue lo que ocurrió, pues los sandinistas, al no lograr la conclusión de los acuerdos de cese definitivo al fuego, quedaron de todas maneras obligados a cumplir con las reformas que “sólo discutía con los partidos políticos”. Una contradicción se sumaba a la otra: “La contra quiere negociar en Managua porque es realista: perdió la guerra y sabe que será recibida en el espacio político que la revolución le garantiza.”<sup>43</sup>

La campaña publicitaria destinada a impedir que la negociación con la oposición armada fuese vista por la población como una derrota del sandinismo, incluía las más variadas declaraciones: “Los Estados Unidos enfrentaron la derrota de sus tres opciones en Nicaragua: la ruta militar, la ruta de la negociación y la del fortalecimiento de la oposición interna.”<sup>44</sup>

Cuando la sociedad dejó de ser un orden impuesto y se volvió un orden negociado, cada actor trató de legitimar sus posiciones en el diseño del nuevo orden. Restarle legitimidad al contrario es normal y, de hecho, es la tarea prioritaria de cada actor en la mesa de negociaciones. Lograrlo es, sin embargo, un asunto distinto que depende de una diversidad de factores que la retórica no logra modificar. El dominio político e ideológico es una cuestión de influencia más que de fuerza, dice Duverger.<sup>45</sup> Cuando la

<sup>42</sup> Citado por *La Prensa*, 21 de abril de 1988.

<sup>43</sup> Declaraciones de Daniel Ortega, citadas en *Bohemia*, núm. 21, La Habana, 20 de mayo de 1988, pp. 68-70.

<sup>44</sup> Declaraciones de Xabier Gorostiaga, *Los Angeles Times*, 22 de julio de 1988, p. 7.

<sup>45</sup> Maurice Duverger, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern States*, Londres, 1967, p. 309.

cultura de la violencia es incentivada a un grado extremo, por ejemplo: “o te rindes o te aplasto”, es muy difícil que la negociación facilite la construcción de relaciones sociales ordenadas en un contexto de cooperación mínima entre los actores contrarios.

### **Hegemonías políticas**

El sandinismo fue forzado a negociar. En consecuencia, su preocupación mayor no se orientó hacia la cooperación de sus opositores para mantener su dominio en el país, sino simplemente a garantizar su supervivencia mediante la rendición del contrario en la mesa de negociaciones.

En tales circunstancias la negociación nunca obtuvo la cooperación opositora para que el sandinismo continuara su hegemonía.

Como lo señalan algunos teóricos de la apertura de los gobiernos autoritarios, éstos actúan en la negociación con mayor autoconfianza cuando tienen enfrente una oposición menos activa y agresiva.<sup>46</sup> En la condición de polarización que vivía Nicaragua, la negociación implicaba para los sandinistas el reconocimiento de que sus contrarios constituían una alternativa a la suya. Eso les quitaba flexibilidad y confianza, pues les representaba una muestra de debilidad.

Bastaba sentarse a la mesa para que se diera por iniciado el derrumbe de la hegemonía del FSLN. Sin embargo, lo anterior tenía significados adicionales relacionados con las posiciones de las facciones sandinistas. La negociación afectó los lineamientos de grupos o facciones estratégicamente ubicadas dentro del sandinismo, pues ofrecía el colapso de instituciones totalitarias sustentadas por sectores sandinistas internos. La negociación no las hizo desaparecer, ni a las instituciones ni a las facciones que las manejaban, pero las colocó en una posición difícil e insostenible.

<sup>46</sup> “Los regímenes autoritarios que habían tenido relativo éxito y que enfrentaron una oposición menos activa y agresiva optaron por la transición con mayor grado de autoconfianza”, dice O’Donnell y Schmitter, *op. cit.*, p. 39.

La facción encargada de diseñar y ejecutar las políticas de control social, de seguridad y represión, etc., quedó expuesta por la negociación. Lo anterior la volvió más agresiva desde su posición de control de los medios de comunicación y propaganda; en este contexto reprodujo discursos y consignas de los líderes “duros” del sandinismo.<sup>47</sup> Sin embargo, la negociación provocó que aparecieran sectores del sandinismo que visualizaran en la concertación una posibilidad de sobrevivir en un espacio político más abierto, precisamente por colaborar en su construcción.<sup>48</sup>

La negociación, en consecuencia, dividió a los sandinistas según su ubicación estratégica dentro del proyecto. Los sectores que realizan las tareas más visiblemente represivas y que son identificados como más radicales dentro de la faccionalización del sandinismo, habrían de sufrir el impacto más directo del efecto deslegitimador de las negociaciones. Los aparatos represivos, las agencias de control de medios de comunicación, lucen en un periodo de apertura, como los más grotescos del régimen. A ellos se les atribuiría el trabajo de sabotear las negociaciones.

Terminada la primera ronda negociadora en Managua, con la mediación del cardenal Obando y Bravo, Radio Sandino, voz oficial del frente sandinista, acusó a Obando de “ser director intelectual de la contrarrevolución y, por lo tanto, corresponsable de crímenes y asesinatos de ancianos y niños”.<sup>49</sup> Rápidamente el

<sup>47</sup> Tomás Borge diría que las dificultades de la negociación con la contra servían para “el llanto de la derecha”. Véanse sus declaraciones respecto de la resistencia nicaragüense en *Barricada*, Managua, 22 de julio de 1988, pp. 4-5.

<sup>48</sup> Para el caso de los regímenes autoritarios, esto es más claro porque los miembros de la élite autoritaria están menos apegados a una concepción ideológica y porque pueden estar dentro del régimen sin que se identifiquen con todas las políticas de éste. En los casos como el nicaragüense, los conflictos entre la élite sandinista son ocultos y sólo pueden medirse en función de las decisiones tomadas y de sus resultados. Sin embargo, sus opiniones se filtraban en los medios de comunicación. Por ejemplo, véase la defensa de las ofertas de democratización sandinista frente a las exigencias de la contra en el editorial de *Barricada* del 10 de junio de 1988, justo cuando en el mismo diario se publicaban las fotos dramáticas de líderes de la contra rodeados de cruces, ataúdes y el letrero: “Nosotros no olvidamos”.

<sup>49</sup> Citado por *El Nuevo Herald*, Miami, 21 de abril de 1988, p. 3B.

cardenal Obando envió un telegrama a Daniel Ortega, preguntándole si ése era el sentir oficial del gobierno.<sup>50</sup>

En la medida en que la negociación alienta la aparición de más demandas políticas, la división entre “duros” y “blandos” dentro del régimen se vuelve más nítida: por un lado surgen grupos civiles demandando apertura y, por otro, una reactivación de grupos represivos dentro del gobierno. El resultado es el inicio de una espiral de violencia que alimenta las pugnas entre “duros” y “blandos” dentro del régimen.<sup>51</sup> Los primeros atribuían a los segundos, la responsabilidad de “las libertades” que se estaban tomando los opositores internos. Como señaló una publicación inglesa, los sandinistas habían tolerado demasiado, en un esfuerzo por ajustarse a las negociaciones de paz, hasta que no pudieron más y se fueron en contra de los medios escritos y radiales, así como en contra de diplomáticos estadounidenses.<sup>52</sup>

En otros procesos de apertura política, en los que la reforma es siempre consecuente con la demanda opositora, la decisión “desde arriba” produce un efecto relegitimador del orden establecido. Cambiar a tiempo es siempre una manera de evitar el cambio en peores condiciones. Hay regímenes autoritarios que muestran esa notable habilidad de la élite política que aplica cambios incrementales para reducir la validez de demandas exageradas que pueden ser peligrosas. Por el caso particular, el régimen sandinista fue forzado a negociar la apertura y, en consecuencia, la reforma política que trae consigo la negociación con sus contrarios, tuvo efectos multiplicadores que agravaron la deslegitimación del régimen y lo fue conduciendo a que toda apertura siempre era poca frente a la magnitud de las demandas. Eso lo condujo a una espiral de presiones que solicitaban más concesiones difíciles de satisfacer sin perder toda su legitimidad.

<sup>50</sup> Citado por *El Nuevo Herald*, Miami, 21 de abril de 1988, p. 3B.

<sup>51</sup> La reapertura de los diarios y estaciones de radio clausurados por órdenes del Ministerio del Interior, significará una derrota para ese sector, al igual que la amnistía de prisioneros políticos y la suspensión del estado de emergencia, al amparo del cual cometían todo tipo de abusos, justificados siempre por la defensa “ante la agresión”.

<sup>52</sup> “Peace Process: Sandinistas Jettison Policy of Restraint”, en *Latin American Weekly Report*, Londres, 28 de julio de 1988, p. 3.

Todo intento por justificar las concesiones, como muestra de la derrota del contrario, terminaban visualizadas como su propia derrota.

La publicidad de las negociaciones promovió en la población una sensación de que algo ha terminado, pero de que no se sabe bien qué ha comenzado. Las percepciones, equivocadas o no, de que las elecciones podrían cambiar al país trasladaron el problema de la supervivencia del sandinismo a un problema de identidad: ¿cuáles serían las relaciones con los obreros, con los campesinos, con los profesionales, con las clases medias, si hubiesen elecciones transparentes y vigiladas?

Hacia finales de 1989 la contra no mostraba deseos de desmovilizarse y seguía con el argumento de la democratización a cambio de su desarme. Los sandinistas no tenían alternativa. En los días 13 y 14 de febrero de 1989 se comprometieron —en la reunión de presidentes de Costa del Sol, en El Salvador—, a adelantar las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional para febrero de 1990 si a cambio los presidentes formulaban un plan de desmovilización de la contra en un periodo de noventa días. Sin posibilidades de obtener de la contra el compromiso de su propia rendición, los sandinistas siguieron dependiendo de la diplomacia centroamericana, confiando en que ello les ganaría la cooperación estadounidense.

En agosto de 1989 los presidentes se reunieron de nuevo en Tela, Honduras, para acordar la desmovilización de la contra para el 5 de diciembre. El argumento sandinista de que no serían posibles las elecciones si la oposición armada seguía intacta como fuerza de combate, era ripostado por aquélla al señalar que respetarían los resultados electorales si las elecciones eran libres y vigiladas. Daniel Ortega ofreció a los partidos políticos de la oposición una serie de garantías sobre el proceso electoral; a cambio solicitó que los partidos hicieran un llamado a la desmovilización de la contra.

“Con ustedes [la contra] no negociamos la democracia. Eso corresponde a otras instancias”, solían decir los sandinistas en la mesa de negociaciones con la resistencia. Se referían al diálogo nacional con los partidos de oposición, “los de adentro”, como les llamaban. ¿Hasta dónde, sin embargo, en 1989 había dos oposiciones? ¿Quiénes eran “los de adentro”?



## 4. LA ETAPA DE NEGOCIACIÓN: LOS ACTORES INTERNOS

ASCENSO Y CAÍDA DEL SANDINISMO: LOS MISMOS ESCENARIOS,  
LOS MISMOS ACTORES

En forma paradójica, los conjuntos de circunstancias que favorecieron el ascenso del sandinismo en 1979, fueron los mismos que obstaculizaron la consolidación de su proyecto. La contra sólo actuó para reforzarlos.

El primero de esos conjuntos se refiere a las alianzas políticas para la toma del poder en 1979.

La pérdida de coherencia en las acciones militares y políticas del gobierno de Somoza, desde 1974 hasta 1979, marcó un espacio favorable a la radicalización de las demandas sandinistas. Pero, además, al privilegiar concesiones al sandinismo, obtenidas por el secuestro de personalidades en 1974 y por el asalto y toma del Palacio Nacional, en 1978, Somoza erosionó los vínculos de la política tradicional, asentada en acuerdos intraélite.

Hasta 1974 el gobierno había combatido y desarticulado a las organizaciones guerrilleras armadas; asimismo, utilizó a los partidos políticos para mantener una política de consenso mínimo para la estabilidad del régimen.<sup>1</sup>

A partir de 1974 el sandinismo reta esa condición mediante acciones armadas espectaculares, que situaron al gobierno en la disyuntiva de aceptar las demandas o reprimirlas.<sup>2</sup> Somoza cedió a

<sup>1</sup> El último de los acuerdos intraélite, el pacto libero-conservador o *Kupia Kumi*, como le llamó la población, celebrado entre Somoza y el líder conservador Fernando Agüero. Véase su significado en la crisis del poder político nicaragüense en René Herrera Zúniga, *Relaciones internacionales y formación del poder político en Nicaragua*, *op. cit.*

<sup>2</sup> El 27 de diciembre de 1974, una célula guerrillera asaltó la residencia de un político nicaragüense en la que éste ofrecía una recepción al embajador de Estados Unidos en Managua. Somoza aceptó satisfacer las demandas de los secuestradores.

las demandas: pagó el rescate, liberó prisioneros y permitió a los sandinistas, durante varios días, el uso de los medios de comunicación para expresar y publicar su ideario político y sus ofertas para una alianza nacional en contra de la dictadura. La opción revolucionaria de la montaña fue convertida en la opción política de las ciudades. Los sandinistas ganaron un lugar en la imaginación popular.

Entre uno y otro asaltos, Somoza no trató de recomponer sus relaciones con los sectores políticos tradicionales y confió en que el anticomunismo era suficiente para evitar los acercamientos de esos sectores con el sandinismo. Confió, además, que la represión sellaría los temores de una revuelta victoriosa del sandinismo. Los hechos superaron el cálculo de Somoza. El país entró en una escalada de politización, polarización y violencia. Los intereses económicos y el sectarismo político se alternaron en una retroalimentación, agravando la polarización del país.

La grave situación económica de la nación en 1975 y 1976, dificultó al mandatario su estrategia de recomposición de fuerzas aliadas por la vía tradicional: contratismo con los empresarios, expansión burocrática con los profesionales, no interferencia en los asuntos de la Iglesia y obras públicas básicas.

La inexperiencia del gobierno para aislar del sistema a las organizaciones guerrilleras y para mantener alejada a la oposición tradicional de las ofertas revolucionarias, condujo al debilitamiento de los partidos políticos tradicionales en su papel de estabilizadores del régimen somocista.

Mientras los sandinistas se fortalecían, los moderados se dividían, sin saber exactamente hacia dónde iban. Esta situación permitió un espacio novedoso para que grupos civiles opositores ocurrieran al encuentro de las ofertas guerrilleras y construyeran una alianza nacional opositora destinada a democratizar al país.

El cambio de gobierno en Washington reforzó la incertidumbre. La caída de Richard Nixon también debilitó a Somoza: el presidente Ford designó, en 1975, como embajador en Managua a

---

Años después, el 22 de agosto de 1978, un comando sandinista tomó el Palacio Nacional en el cual se encontraba en sesiones el Congreso y en su despacho varios ministros del gobierno. Somoza satisfizo las demandas de los secuestradores.

James Theberge, quien cumpliendo instrucciones del Departamento de Estado informó a Somoza que se reuniría con sus opositores y que mantendría una posición neutral en los conflictos entre facciones políticas nicaragüenses.<sup>3</sup>

La llegada de Carter a la presidencia de Estados Unidos completó el panorama de incertidumbres en el escenario político nicaragüense. Los intensos conflictos burocráticos en el gobierno de Carter, respecto de qué hacer con la situación de Nicaragua, acentuaron los conflictos entre facciones dentro y fuera del régimen de Somoza.<sup>4</sup>

Los sandinistas aprovecharon el debilitamiento de las alianzas de Somoza para atraer a su favor los apoyos disponibles de sectores de la Iglesia, personalidades empresariales, organizaciones políticas y de gente importante en el gobierno de Estados Unidos. Todos esos sectores eran contrarios al establecimiento de un proyecto socialista, pero también observaban el aislamiento de Somoza como peligroso a sus intereses. Empecinado en no hacer concesiones a los sectores civiles que se acercaban al sandinismo, Somoza se fue aislando de sus propios soportes, incluido Estados Unidos.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Véase Anthony Lake, *Somoza Falling. The Nicaraguan Dilemma: A Portrait of Washington at Work*, Boston, Houghton Mifflin, 1989, p. 20.

<sup>4</sup> Durante la crisis de Nicaragua han sido publicados numerosos trabajos con referencia a los conflictos entre los burócratas del Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad. Algunos de aquéllos fueron escritos por funcionarios que entre 1977 y 1979, estuvieron directamente involucrados en el asunto de Nicaragua. Especialmente véase Robert A. Pastor, *Condemned to Repetition: The United States and Nicaragua*, Princeton, Princeton University Press, 1987; Anthony Lake, *op. cit.*

<sup>5</sup> Richard Feinberg, funcionario del Departamento de Estado, en Washington, declaró en la reunión interagencial del 29 de agosto de 1979, llevada a cabo para evaluar los acontecimientos de la toma del Palacio Nacional por Edén Pastora (comandante Cero), que Somoza había perdido su legitimidad. Estaba regresando de Managua en donde se había entrevistado con el gobernante. Prácticamente todos los presentes estuvieron de acuerdo en que Somoza debía renunciar en beneficio de los moderados, antes de que el poder quedara en manos de los sandinistas. Sin embargo, no sabían cómo hacer para que ello ocurriera. Véase el relato de Anthony Lake, *op. cit.*, p. 115.

Ninguna de las opciones planteadas en Managua o en Washington pudo evitar las alianzas victoriosas de los sandinistas.

Lo relevante de este conjunto de circunstancias que hicieron posible las alianzas políticas necesarias para el ascenso de los sandinistas al poder, es que, años después, fueron exactamente las mismas que provocaron la caída del sandinismo.

#### EL SANDINISMO: UN SOCIALISMO AFRICANO EN AMÉRICA

Los regímenes socialistas del Tercer Mundo empezaron a aparecer en la década de los cincuenta, como parte de la campaña de descolonización europea en África, Asia y el Medio Oriente, pero aumentaron en la década de los setenta, durante la cual aparecieron, entre 1974 y 1980, 14 nuevos estados revolucionarios autoproclamados socialistas o actuando en nombre del socialismo.

Autores dedicados al tema de la transición al socialismo en países periféricos ubican a Nicaragua en la lista de países en transición al socialismo, junto a Vietnam, Cuba, Argelia, Siria, Granada, Irán, Angola, Etiopía, Mozambique, Guinea-Bissau, Kampuchea, Afganistán, Yemen, Zimbabwe y Somalia.<sup>6</sup>

El hecho de que los sandinistas hayan planteado la creación de un Estado socialista, pero no lo hayan logrado, tiene importancia para el análisis de las revoluciones fracasadas en América Latina, pues es un tema latinoamericano de historia política comparada que no ha sido abordado de manera suficiente.<sup>7</sup> Nuestra preocu-

<sup>6</sup> Véanse, entre otros, a Roger Burbach, "El imperialismo norteamericano y las nuevas sociedades revolucionarias", en José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere (coords.), *La transición difícil*, México, PACC, Siglo XXI, 1986, pp. 363-378; G. White, R. Murray y C. White (eds.), *Revolutionary Socialist Development in the Third World*, Lexington, University of Kentucky Press, 1983; Peter Wiles (ed.), *The New Communist Third World*, Nueva York, St. Martins Press, 1982; Carmen Diana Deere, "The Peasantry and Agrarian Reform in the Transition to Socialism in the Third World", Kellogg Institute, documento de trabajo, University of Notre Dame, 1984; Richard Feinberg, *The Intemperate Zone: The Third World Challenge to U.S. Foreign Policy*, Nueva York, Norton, 1983; Colburn, *op. cit.*

<sup>7</sup> Los estudios individuales sobre la revolución de Guatemala de 1944-1954, sobre la revolución de Bolivia de 1952 y los actuales sobre la revolución sandinista en Nicaragua, permitirán un proyecto de análisis comparado.

pación está, sin embargo, centrada en definir y explicar los obstáculos para la consolidación del proyecto socialista de los sandinistas, porque de ahí partimos en una vía más segura a dilucidar una de las variantes menos conocidas de ese tipo de revoluciones: su reversión negociada. ¿Por qué y cómo ocurrió este proceso en esa revolución incompleta<sup>8</sup> y cuál es el papel de los actores internos, a quienes constantemente se referían los sandinistas como sus opositores “de adentro”?

Uno de los argumentos que más se usan para justificar la falta de consolidación de los regímenes socialistas del Tercer Mundo, se refiere a las guerras de agresión.<sup>9</sup> En Nicaragua, ése fue el argumento cotidiano de los sandinistas. Un argumento adicional, no aplicable al caso nicaragüense aunque fue muchas veces mencionado en la prensa internacional, al menos en el sentido en que ha sido aplicado a otras revoluciones tercermundistas, es el de las divisiones étnicas y las respectivas culturas de violencia, que afectan la integración nacional y que obligan a adoptar políticas autoritarias de corte militar. Otro argumento es el de que las revoluciones del Tercer Mundo llegan al poder en un orden predecible de situaciones internas a las que de antemano están obligadas a responder pero con políticas que contradicen sus propios objetivos: pretender el socialismo por la vía del capitalismo.

Sin duda esos argumentos son importantes para explicar las dificultades de consolidación que padecen los regímenes revolucionarios tercermundistas, pero son insuficientes para ocultar que, en el fondo, esos gobiernos fracasan porque no logran descifrar y utilizar, para consolidarse fuera de las armas, las tendencias de largo plazo del desarrollo social y económico de sus respectivos países. La proclamación de objetivos socialistas mediante la aplicación de medidas capitalistas, termina en un estancamiento del proceso revolucionario en general.

<sup>8</sup> Con la expresión “incompleta” queremos entender, en sentido contrario, la definición que de las revoluciones completas hace S. Huntington, como aquellas que “logran la creación e institucionalización de un nuevo orden político”, *Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, 1968, p. 266.

<sup>9</sup> Richard Fagen, *Forjando la paz. El desafío de América Central*, CRIES, PACCA, San José, 1988.

El caso nicaragüense es bien ilustrativo de cómo la diversidad de intereses dentro de la revolución para derrocar a Somoza en 1979, condujo en muy poco tiempo a un enfrentamiento sobre las políticas económicas adecuadas, no sólo entre las facciones del sandinismo, sino entre éste y los sectores no revolucionarios que formaban parte de la coalición antisomocista.<sup>10</sup>

Las serias dificultades que enfrentan las dirigencias revolucionarias convertidas en gobierno, para el manejo simultáneo de muchas variables de orden distinto —económicas, sociales y políticas—, son constantemente pospuestas adoptando una vía que esas dirigencias consideran inevitable: la militarización de la sociedad.

Al adoptar la tesis leninista de que lo más difícil no es derrocar a las clases dominantes, sino destruir las antiguas relaciones sociales que atentan contra el paso al socialismo, la militarización se vuelve, como lo señalaba uno de los ideólogos del sandinismo, “un requisito imprescindible de cada transición al socialismo en el siglo xx...”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Como señala Colburn para el caso nicaragüense, la adopción de medidas económicas destinadas a aumentar la producción agrícola para exportación, esencialmente en manos privadas, terminó por dar fuerza política a los empresarios sin que ello beneficiara a los pobres del campo, a quienes estaba dirigido el discurso de la revolución. Forrest D. Colburn, *Post-revolutionary Nicaragua. State, Class, and the Dilemmas of Agrarian Policy*, University of California Press, 1986, pp. 10-11. En una forma semejante, otro autor considera que la presencia de importantes miembros de familias oligárquicas dentro de las filas prominentes del sandinismo, incluyendo el control de posiciones clave dentro del Estado, facilitó que las políticas económicas y la aplicación de ciertas políticas sociales fueran dirigidas a impedir la estrategia socialista y a favorecer a los ricos y perjudicar a los pobres. Véase Carlos Vilas, “La contribución de la política económica y la negociación internacional a la caída del gobierno sandinista”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, México, 1990, pp. 329-351.

<sup>11</sup> “La guerra es, si se quiere, la ‘luz particular’ que baña todo el proceso de transición al socialismo en los pequeños países de la periferia... De la misma forma que la mercancía fue el foco que sirvió a Marx para analizar el modo de producción, la guerra nos sirve como la puerta para entender el socialismo joven en la periferia”, Peter E. Marchetti, “Guerra, participación popular y transición al socialismo”, en José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere (eds.), *La transición difícil. La autodeterminación de los pequeños países periféricos*, México, Siglo XXI, 1986, p. 101.

La exposición de un “enemigo principal”, les permite unificar sus fuerzas con las de sus seguidores en una perspectiva doblemente útil: anular o posponer sus propias dificultades de poder, entre facciones y liderazgos, y encubrir las luchas en contra de quienes se oponen en el país a la consolidación de una revolución socialista.<sup>12</sup>

Cuando estas revoluciones cuentan con respaldo importante de la población, pero éste es diverso en sus objetivos, mantenerlas unificadas en el tiempo es prácticamente imposible; debido a ello la tarea de la unidad revolucionaria prevalece sobre la idea de unidad nacional. Esto último es visto como un requisito para que no fracase el proyecto revolucionario.

Las políticas de unidad nacional pueden ser orientadas aduciendo amenazas externas.<sup>13</sup> Sin embargo, cuando las dirigencias revolucionarias mantienen serias divergencias sobre el proyecto a seguir, el camino unificador lo proporciona la militarización y el reparto de cuotas burocráticas o la distribución de posiciones por áreas gubernamentales.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> “La lucha contra el imperialismo eleva el nivel de polarización social; entre aquellos que apoyan la revolución y los que la atacan”... “En síntesis, podemos afirmar que durante la transición [al socialismo] el proyecto revolucionario se encuentra entre el subdesarrollo y el imperialismo, entre las fuerzas que pugnan por el socialismo y aquellas que pugnan por la restauración del orden anterior”, Orlando Núñez Soto, “Las condiciones políticas de la transición”, en Coraggio y Deere, *op. cit.*, p. 68.

<sup>13</sup> En un primer momento, especialmente para la toma del poder, ambas necesidades (la unidad revolucionaria y la unidad nacional) se confunden en el discurso sandinista, pero después, ya en el ejercicio del poder, prevalece en el sandinismo, como tarea prioritaria, mantener la unidad revolucionaria. “Sin la unidad monolítica del sandinismo... sin una política de alianzas hábil, inteligente y madura, no habría habido triunfo revolucionario”, declararía Humberto Ortega. *La estrategia de la victoria*, Managua, 1980; dos años más tarde, otro de los dirigentes sandinistas diría: “La luna de miel de la revolución está llegando a su fin”, refiriéndose a la idea de la revolución como conjunto de alianzas”, “en la que los intereses de un grupo de traidores y los intereses de la verdadera clase trabajadora, pudieran fundirse”, Henry Ruiz, de la tendencia de Tomás Borge, citado por David Nolan, *FSLN. The Ideology of the Sandinistas and the Nicaraguan Revolution*, Miami, University of Miami, 1984, p. 126.

<sup>14</sup> Los sandinistas estuvieron permanentemente divididos en tres tendencias. La unidad formal lograda con los acuerdos de marzo de 1979 no implicó la confusión de intereses faccionales en el gobierno. La división de posiciones por áreas fue clara. La tendencia Guerra Popular Prolongada (GPP) controló las activi-

Las políticas militaristas están más referidas a la búsqueda de soluciones a luchas internas de poder y reflejan esfuerzos de hegemonía de unos sectores sobre otros. En esa dinámica, las alianzas políticas originales, que incluyen sectores no revolucionarios, se descomponen y se vuelven contradictorias en la medida que se enfrentan las aspiraciones políticas con las decisiones económicas.

La lógica económica se contradice, en muchos casos, con la lógica política. En un proyecto como el nicaragüense —se decía en un análisis sandinista— el dilema es decisivo. ¿Cómo conseguir avanzar en los objetivos políticos cuando las exigencias de la economía van en sentido contrario? Renunciar a la pretensión política es renunciar a la revolución; desconocer el realismo económico puede condenar a la muerte al proceso.<sup>15</sup>

Y las divisiones étnicas, cuando existen, son más bien profundizadas en una dirección que atenta contra la unidad nacional promovida en el discurso revolucionario.<sup>16</sup> En Nicaragua, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el problema de la formación, consolidación y constitución del Estado nacional se resolvió en el siglo pasado y, si se quiere, se ha venido resolviendo en un continuo proceso de centralización política y desarrollo económico durante el presente siglo. Pero no constituye, como en muchos países africanos, un problema fundamental para explicar las guerras que afligen el proceso político y tampoco representan la dificultad básica para la consolidación de la revolución.

---

dades de seguridad y control policiaco, desde el Ministerio del Interior y las tareas de planificación de la economía; la Tendencia Proletaria, las áreas de administración del desarrollo agropecuario, desde el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria; la Tendencia Tercerista, de los hermanos Ortega, controló el ejército y las agencias gubernamentales, guardando siempre un lugar para las clientelas de las otras tendencias.

<sup>15</sup> *Envío*, Instituto Histórico Centroamericano, año 5, núm. 57, Managua, marzo de 1986, p. 9A; también, véase Colburn, *op. cit.*, p. 10.

<sup>16</sup> La cuestión de los indígenas miskitos y la cuestión de las ciudades-familias (Granada-León-Managua), aparece nuevamente en Nicaragua como un tema asociado al ejercicio de las políticas sandinistas, más que como una cuestión nacional conflictiva.

Las revoluciones latinoamericanas aún guardan esa distancia de las que ocurren en el resto del Tercer Mundo. Los problemas de integración nacional están referidos a asuntos más concretos de desigualdad y distribución regional de recursos nacionales. Las guerras dentro de la guerra, que observamos en los procesos revolucionarios de países africanos, no se encuentran en las revoluciones latinoamericanas.

El problema de los indios miskitos en el Atlántico nicaragüense, representa un grave conflicto de integración nacional en términos de una mala distribución de recursos nacionales, pero no tanto un problema de identidad nacional. La cuestión miskita adquirió notoriedad internacional y creó confusiones sobre su significado. En realidad no constituye, ni aun viéndolo como expresión de un movimiento de protesta indígena, la base de un proyecto nacional alternativo al existente en Nicaragua. Más bien, queda apegado, como dice un autor, a los ámbitos subnacionales o de carácter regional.<sup>17</sup> La excesiva utilización sandinista de los espacios geográficos de los miskitos, por razones de dar seguridad a sus relaciones con Cuba, les enfrentó rápidamente con los habitantes de la región. El tráfico de armas y abastecimientos militares de Cuba hacia Nicaragua, que se realizaba por esas vías, en el Atlántico y luego hacia el interior, convirtió a la región en zona de seguridad militar. Los sandinistas trataron de confirmar esa condición imponiendo a los habitantes de la zona un régimen de control que rápidamente fue rechazado.<sup>18</sup>

Los problemas de desintegración nacional, en el caso de Nicaragua, podrían localizarse en una dimensión distinta a la de los africanos, aunque pudiera tener consecuencias parecidas. En esta dirección, el símil de las tribus sería la división en familias, asentadas en ciudades rivales, cuyos habitantes veían el poder en función de intereses muy parecidos a los de las etnias africanas. Las identidades por familia-ciudad reaparecieron en Nicaragua bajo el sandi-

<sup>17</sup> Véase Marco Palacio (compilador), "América Latina: travesías hacia la nación moderna", en *La unidad nacional en América Latina. Del regionalismo a la nacionalidad*, México, El Colegio de México, 1983, p. 15.

<sup>18</sup> La primera rebelión contra los sandinistas sucedió precisamente en el Atlántico. La reubicación forzada de miskitos y su traslado a puntos donde fuesen controlados, les acarreó una gran resistencia.

nismo (los granadinos) al igual que la cuestión indígena de la costa Atlántica (los miskitos), pero son ciertamente fenómenos que no afectan la existencia de un horizonte nacional.<sup>19</sup>

Si bien las estructuras familiares por apellido y lugar de origen, rebasaban por momentos las líneas de clase o de la ocupación en el mercado, no lograron ocupar la idea de la nación nicaragüense.

Finalmente, y para sustentar el análisis de las causales de fracaso del sandinismo, debemos agregar que es común encontrar que la idea de la agresión de Estados Unidos se acompaña de una visión que se apoya en la tesis, compartida por muchos, de que las estructuras del somocismo eran decadentes y, en consecuencia, fáciles de vencer. Por consiguiente, argumentaban los sandinistas, teniendo a todo el país a su favor, la consolidación del proyecto dependería exclusivamente de las relaciones con Estados Unidos.

Nuestra perspectiva de análisis no comparte dicho enfoque, pues presta más atención a las causales internas, con base en la tesis opuesta: las estructuras políticas que el sandinismo heredó, no sólo no eran caducas —salvo en el entorno propiamente familiar de Somoza— sino que tenían la fuerza suficiente para decidir el ascenso, aunque no impedirlo, pero también de moldear y en su caso forzar la caída del proyecto sandinista. Y que el comportamiento de la variable de las relaciones con Estados Unidos dependería más de cómo se rompieran o estabilizaran esas relaciones internas, con el fin de neutralizar o proporcionar razones para la intervención decisiva de Estados Unidos y sus aliados en América Latina.

Las relaciones internacionales eran fundamentales en tanto el proceso político interno no recurriera al enfrentamiento ideológico internacional. La razón es muy sencilla y bien sabida por el sandinismo en aquellos tiempos: la experiencia cubana era irrepetible. La crisis de los misiles de octubre de 1962, cuyo desenlace fue la consolidación de la revolución castrista, no ofrecía para el caso nicaragüense, ninguna posibilidad de estímulo para una situación similar.

El sandinismo confundió al somocismo con Somoza y al somocismo con estructuras sociales agotadas, retrasadas, desesperadas

<sup>19</sup> Véase René Herrera Zúniga, *op. cit.*

por un liderazgo revolucionario que las modernizara. Esta confusión fue excepcionalmente influyente en las maneras específicas que los sandinistas hicieron en sus alianzas políticas para la toma del poder. Después, quisieron corregir dicha equivocación para tratar de deshacerse de ellas.

Más que el drama de la guerra misma, que privilegia la mayoría de los estudios sobre Nicaragua, es el drama político que representan los sandinistas envueltos en una multitud de dificultades para enfrentar una alianza con los más variados sectores a los que creyó serían fáciles de desplazar para luego vencer: empresarios agroindustriales, obreros urbanos organizados, clases medias profesionalizadas y liderazgos religiosos. Una buena parte de esas dificultades provenían del simple hecho de que la dirigencia del sandinismo estaba integrada por miembros de las mismas familias a las que pretendía destruir.

En un seguimiento de los hechos que ocurrieron durante el ascenso del sandinismo al poder y de las circunstancias políticas en que aquéllos sucedieron, se encuentra que una explicación de los severos problemas de consolidación del proyecto socialista impulsado por los sandinistas estuvo relacionada con la combinación de elementos vinculados a la forma y circunstancias en que llegaron al poder en 1979, tanto en el ámbito de las realidades nacionales como en el de las estructuras internacionales. Se trató de un movimiento político que para acceder al poder hizo numerosos compromisos y promesas, que cuando gobernó no tuvo la capacidad para satisfacerlos o habilidad para sustituirlos de manera creíble.

Con base en una lectura correcta del nivel de desarrollo de las fuerzas sociales productivas acumuladas durante la época del somocismo, los sandinistas encontraron aliados para su causa política, pero confiaron en que sería fácil subordinarlos a sus intereses de poder, en cuanto lo lograron.

Las realidades pronto se harían presentes para mostrarse contrarias a sus intenciones. De manera firme y con la legitimidad derivada del respaldo brindado al sandinismo, cada uno de los sectores sociales asociados al derrocamiento de Somoza fue mostrando capacidad de instalarse en la lucha cotidiana del poder, como una fuerza autónoma que resistía la cooptación planeada por

el sandinismo. Empresarios y sindicatos obreros, por un lado y, productores agropecuarios grandes, medianos o pequeños, por otro, resistieron la cooptación.

Esos sectores, a pesar de las insistentes políticas sandinistas que pretendían deshacerse de ellos en el juego político, permanecieron dentro del país, resistieron las presiones y se convirtieron en una verdadera y exitosa oposición a la consolidación del régimen. Su condición de aliados originales y la decisión de defender constantemente esa posición, exigiendo el cumplimiento de las promesas de 1979, les conservó su legitimidad y les permitió introducir sus intereses en el esquema de las confrontaciones entre las tendencias faccionales del sandinismo. Esto último fue quizá la más productiva acción de la resistencia al sandinismo: explotar sus debilidades en materia de unidad.

La existencia y actividad de variados sectores civiles no sandinistas, en la vida cotidiana del país, mantuvo acelerados los conflictos entre las tres tendencias del sandinismo respecto de cómo debían ser enfrentados, desde las políticas estatales, cada uno de esos sectores. Sergio Ramírez Mercado, refiriéndose a los empresarios, declaró a comienzos de 1988: "ellos son los sobrevivientes, ahora que naufraguen."<sup>20</sup>

Los tres factores de apoyo que los sandinistas tuvieron para subir al poder fueron precisamente los mismos para perderlo: Iglesia, alianzas políticas empresariales y relaciones internacionales.<sup>21</sup>

Los sandinistas midieron bien la fuerza de esos apoyos para la conquista del poder. En cuanto formaron gobierno, la subestimaron, pensando que los actores religiosos, empresarios, profesionales y sindicalistas, reaccionarían a las medidas socialistas, huyendo del país. Ninguna de esas predicciones fue cumplida. Aunque varios cientos de miles de nicaragüenses huyeron al exterior, esta situación no provocó una desarticulación significativa de las fuerzas sociales que el sandinismo quería eliminar. Por su parte, los norteamericanos no reaccionaron enviando sus tropas. Respaldaron el desarrollo de una fuerza armada antisandinista.

<sup>20</sup> *Barricada*, Managua, 13 de marzo de 1988, p. 1.

<sup>21</sup> Véase René Herrera Zúniga, *op. cit.*

Más bien, lo que ocurrió fue lo contrario: la Iglesia, los empresarios y los obreros no sandinistas, así como los partidos políticos tradicionales, soportaron la presión y permanecieron dentro del país en un cerrado juego de aspiraciones participativas de corte democrático que neutralizó algunas de las tendencias más fuertes del proyecto socialista.

La historia de las relaciones Iglesia-Estado, desde 1979 hasta las elecciones de 1990, recoge infinidad de incidentes, presiones y ataques oficiales contra la primera. La creación y uso de una "Iglesia popular" destinada a debilitar a la Iglesia católica se fue desacreditando, pues al mismo tiempo que atacaba a ésta, el gobierno le pedía mediar en sus conflictos con otros sectores. Pese a todas las maniobras en contra de la Iglesia, el sandinismo nunca pudo ignorar la importancia de su líder, el cardenal Miguel Obando y Bravo, como auténtico representante de las causas que los partidos y demás organizaciones cívicas no podían gestionar.

La participación de la Iglesia católica fue la clave para la sobrevivencia de pequeñas pero útiles organizaciones políticas y cívicas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y las políticas sociales. Asimismo, pudo ofrecer a la población una orientación ideológico-política alternativa al discurso sandinista. Ese protagonismo era el que los sandinistas trataban de contrarrestar, cuando atribuían al cardenal Obando la autoría intelectual de la contrarrevolución. Sólo que los sandinistas creían que la población, en general, era sandinista más que católica.

Una segunda maniobra política de los sandinistas contra la Iglesia católica fue la de respaldar abiertamente la participación de los grupos protestantes en actividades políticas. Una oportunidad que los grupos evangelistas, con financiamiento estadounidense, aprovecharon. La organización CEPAD, integrada por militantes evangelistas locales y de Estados Unidos, permitió a los sandinistas contar con una ayuda de las iglesias protestantes estadounidenses que no sólo daban dinero, sino que actuaban en los círculos norteamericanos como propagandistas de las políticas sociales del sandinismo.

Con los empresarios pasaba lo mismo: fueron constantemente acusados de diversos delitos, como clase, como agrupaciones, como individuos, como gestores del somocismo. Sin embargo,

muchos de los hijos de los empresarios eran dirigentes de la revolución. “Durante el día acusaban a sus padres, durante la noche cenaban con ellos.” De ahí que unos empresarios fueran “traidores” y otros “patrióticos”, pero en virtud de las innegables relaciones familiares entre ambos, el resultado fue una intensa sobrepolitización de las relaciones entre el Estado y los empresarios.

En la práctica esto permitió que los empresarios, independientemente de la connotación de “traidores” o “patriotas”, conservaran la capacidad para que el gobierno buscara en ellos un respaldo para la producción y para el diálogo en situaciones políticas críticas. Agobiado por la crisis económica, Daniel Ortega invitó los empresarios del Cosep para una reunión el 16 de febrero de 1985 y tuvo que escuchar directamente del presidente de ese organismo una lista importante de demandas: revisión de las confiscaciones; libertad sindical y libertad de negociación salarial; derogación inmediata de las leyes retroactivas; libertad de prensa y diálogo con la contra. Este último punto fue presentado de la manera siguiente:

Por qué no buscamos más bien integrarlos en la sociedad con la iniciación de un verdadero diálogo en el cual comencemos a hablar de estas cosas y podamos después, algún día, en Nicaragua decir que resolvimos los problemas “vía plática”.<sup>22</sup>

Las organizaciones empresariales para la defensa de la producción privada inhibieron, desde los albores del proceso revolucionario, muchas reformas totalitarias respecto de la tenencia de la tierra.

Vinculados con el sandinismo por una serie de lazos personales y familiares, y esgrimiendo una posición antisomocista, los empresarios lograron que frente a la política “ultraestatizante” sobreviviera el discurso de una política “privatista”.

Las organizaciones de productores agropecuarios privados llegaron a imponer una lógica organizacional que afectaba al Estado en sus políticas de movilización de los campesinos, pues las organizaciones de productores incluían a compradores y vendedo-

<sup>22</sup> Enrique Bolaños Geyer, *Discursos selectos, op. cit.*, p. 67.

res de fuerza de trabajo, en una clara disposición de movilización política que frenaba las proposiciones sandinistas de control total de los pequeños productores. El éxito inicial de los empresarios en ese juego de socavar el respaldo de pequeños productores al sandinismo, provocó una violenta reacción de éstos: Jorge Salazar, líder de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), venía organizando con éxito a campesinos productores, con lo que estaba disputando el control de bases campesinas y de pequeños productores, al sandinismo. En respuesta, los sandinistas lo asesinaron a finales de 1980.

Inmediatamente después de la muerte de Jorge Salazar, la dirigencia sandinista dispuso acelerar la organización de los productores bajo su control y, como alternativa directa a la Upanic, creó la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), a inicios de 1981.

Como consecuencia de la división entre las filas empresariales patrióticas y las filas empresariales contrarrevolucionarias, las políticas estatales en relación con la producción agropecuaria no producían el efecto deseado: aunque discriminaban en materia de crédito, terminaban por reforzar las estructuras del mercado. La coexistencia de grandes, medianos y pequeños productores privados, permitió que los productores fueran capaces de incidir en la lógica del poder político.<sup>23</sup>

El sandinismo estaba deseoso de recuperar los ritmos de producción agropecuaria para las exportaciones; para ello era indispensable la colaboración del sector privado.<sup>24</sup> Los sandinistas sabían que el discurso que ubicaba a Somoza como dueño del país no correspondía a la realidad: el peso de Somoza como productor había resultado, al final de cuentas, pequeño; el mayor peso estaba en una heterogénea composición de grandes, medianos y pequeños productores individuales, cuya fuerza real no podía ser ignorada a la hora de decidir la colectivización del campo. Además, un buen número de ellos había apoyado el derrocamiento de Somoza.

<sup>23</sup> Véase Eduardo Baumeister y Óscar Neira Cuadra, "La conformación de una economía mixta: estructura de clases y política estatal en la transición nicaragüense", en José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *op. cit.*, pp. 286-306.

<sup>24</sup> Véase Colburn, *op. cit.*, p. 22.

Con los sindicatos, la situación no era del todo diferente. Antes de 1979 la mayoría de los trabajadores estaban organizados en sindicatos desligados de las estructuras sandinistas. Éstos magnificaban la participación de los trabajadores en la toma revolucionaria del poder, pero no contaban con organizaciones sindicales propias. Las batallas ideológicas entre las tres tendencias del sandinismo hacían referencia a los trabajadores en una perspectiva más bien intelectual.<sup>25</sup>

Desde la perspectiva ideológica dominante dentro del sandinismo, la relación con los trabajadores no podía ser la preocupación más importante, al menos durante los años de la transición al socialismo. Según esa visión la batalla principal era ganarle a la burguesía aquellos sectores “potencialmente revolucionarios, pues querer hacer la revolución política sólo con la clase dominada... es perder la perspectiva histórica de la lucha”.<sup>26</sup>

En efecto, la clase popular no sólo no estaba llegando al poder con el triunfo sandinista, sino que se dedicó a combatir al sandinismo desde sus posiciones organizadas en las centrales obreras. El gobierno trató de forzar la sindicalización a su favor pero debió renunciar a su proyecto, quedándose concentrada su fuerza organizativa, básicamente entre los empleados públicos.

Así, a pesar de la disposición ideológica de los sandinistas para avanzar en una transición al socialismo, las circunstancias nacionales e internacionales terminaron por producir situaciones distintas a las que sugerían los programas ideológicos sustentados por sus dirigentes. Uno de éstos diría que “tampoco la política se transforma de un modo sencillo... porque el legado del pasado sigue condicionando profundamente la política del presente”.<sup>27</sup>

Una revisión simultánea de las políticas económicas, las medidas de control y represión, las relaciones entre sectores sociales y entre éstos y el Estado, muestra un escenario cargado de piezas sueltas que no encajaron nunca, en los diez años, en una sola

<sup>25</sup> Véase David Nolan, *op. cit.*

<sup>26</sup> Véase Orlando Núñez Soto, “Las condiciones políticas de la transición”, en José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *op. cit.*, p. 59.

<sup>27</sup> Citado por Richard R. Fagen, “La política de la transición”, en José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, *op. cit.*, p. 87.

dirección dominante, aunque la retórica y las medidas de fuerza tomadas por los sandinistas parecieran indicar lo contrario.

El sandinismo tenía serias dificultades para sobrevivir en esa condición de régimen con aspiraciones totalitarias no consolidado y sometido siempre a presiones que no lograba vencer.

Aun cuando el gobierno podía, mediante políticas de control y represión, mantener a los sectores no revolucionarios permanentemente temerosos bajo la acusación de colaborar con Estados Unidos y la contrarrevolución, no pudo evitar que se diera en ellos la conversión de sectores sociales y económicos en sectores políticos.

Este hecho fue posible debido a las actividades de la oposición armada. La lucha armada contra el sandinismo concedió identidad política a las fuerzas privadas opositoras al régimen. Lo anterior en dos sentidos. En uno, el sandinismo fue impulsado por las circunstancias de la guerra a tomar en consideración a lo que el Estado llamaba oposición cívica interna. Legitimaban esta última como táctica para negarle legitimidad a la contra, dando a aquélla el carácter de interlocutor.<sup>28</sup> En otro, el incremento de la acción armada producía en el sandinismo la necesidad de contrarrestarla reconociendo a la oposición cívica interna. Así, la suma de concesiones recibidas por la oposición interna era un traslado operado desde la contra.

La resistencia nicaragüense negoció la apertura en beneficio de la oposición política, a la cual no pudo sumarse como partido en las elecciones de 1990, pero le traslada a esa oposición su significado político de resistencia. Así, a pesar de la existencia de partidos opositores, la verdadera fuerza opositora estaba en la presión militar de la contra. Este grupo estaba excluido para cualquier entendimiento estabilizador del país. Sin embargo, para que la apertura política fuese viable, no bastaba un diálogo de los sandinistas con los partidos opositores, sino que tenía forzosamente que pasar por una negociación directa con la contra. Cuando esto ocurrió en Sapoá y Managua, la beneficiaria sería la oposición política organizada. La contra había cumplido con su papel: el sandinismo estaba listo para recibir el castigo electoral de parte

<sup>28</sup> De nuevo la referencia es "no negociamos la democracia con la contra, sino en el seno del diálogo nacional con los partidos de oposición".

de una población que comprendía que *algo* había cambiado después de las negociaciones y que ese *algo* estaba relacionado con la posibilidad de votar libremente el 25 de febrero. Los sandinistas pensaron que los partidos políticos, fragmentados y divididos en múltiples fracciones, no tendrían capacidad de respuesta unitaria frente a ellos.

Los partidos políticos existentes antes de la revolución eran cuatro: Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Social Cristiano y Partido Socialista Nicaragüense. Cada uno tenía sus facciones, algunas de las cuales funcionaban con membrete propio, apareciendo y reapareciendo según las circunstancias electorales o de negociación con el gobierno. En la época de la revolución los partidos tradicionales fueron superados por una multitud de organizaciones sandinistas, que pasaron a calidad de partidos con derecho a representación en el Consejo de Estado. En 1980, los sandinistas aumentaron el número de miembros del Consejo de Estado de 33 a 47 y tomaron esos lugares para sus propias organizaciones, logrando así controlar 78% de los escaños. A pesar del intenso faccionalismo en que se vieron sumidos los partidos tradicionales, lograron sobrevivir y plantear demandas políticas. La represión sandinista fue constante pero no logró desaparecerlos. Un enlistado de esos partidos o grupos políticos se encuentra en el capítulo 5 de esta obra.

La cuestión sindical agobió al sandinismo desde su llegada al poder en 1979. Los sindicatos más fuertes del país no lo apoyaban y se resistieron a los esfuerzos sandinistas por desintegrarlos con la política de afiliación forzosa en sindicatos controlados por el Estado. A pesar de la represión y de las medidas de control contra las centrales sindicales, el sandinismo nunca pudo destruirlas o impedir su militancia. Siempre aparecieron participando en organizaciones políticas como la Coordinadora Democrática y la UNO.

## 5. LA RESURRECCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL: EL DÍA DEL CASTIGO ELECTORAL

### ¿ELECCIONES PARA QUÉ?

Entre 1989 y 1990 hubo 13 elecciones presidenciales en América Latina: El Salvador, Bolivia, Paraguay, Panamá, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Honduras, Costa Rica, Perú, Guatemala y Nicaragua. Con excepción de Paraguay, donde fue confirmado el general Rodríguez, en todos los casos ganó la oposición. En unos casos se trataba de la segunda ronda electoral posautoritaria (Argentina, Uruguay y Brasil); en otros, era la primera ronda desde el autoritarismo (Chile y Nicaragua); en el resto, las elecciones tenían como objetivo sancionar acuerdos políticos previos entre las tradicionales élites contendientes (Honduras, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, Bolivia, Panamá y Perú), consideradas de alguna manera como elecciones normales, sin el carácter de elecciones decisivas o fundacionales.<sup>1</sup>

En Centroamérica las elecciones no son novedad. Entre 1931 y 1990 hubo 56 elecciones generales, pero la forma dominante de cambio político ha sido la de los golpes militares y las revoluciones, con un total de 19.<sup>2</sup> De estos procesos disruptivos de la “democracia electoral” tradicional, dos definen un cambio sustancial en la política centroamericana de la posguerra: el golpe militar de 1954 en Guatemala, para terminar con la revolución guatemalteca, y el golpe revolucionario de los sandinistas en Nicaragua, en 1979,

<sup>1</sup> Las elecciones fundacionales de que hablan O'Donnell y Schmitter, en *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, op. cit., pp. 93-103; véase también, para elecciones en situaciones autoritarias, el trabajo de Guy Hermet, Juan Linz y Alain Rouquié, *Des élections pas comme les autres*, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1978.

<sup>2</sup> Olivier Dabéne, “Amérique Centrale transformer les régimes”, en Georges Couffignal (ed.), *Réinventer la Démocratie*, París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992, pp. 221-243.

para terminar con la dictadura somocista.<sup>3</sup> El primero define el surgimiento de un militarismo profesionalizado de corte anticomunista en Centroamérica y, el segundo, determina el nacimiento de una alternativa revolucionaria para la región.

La victoria sandinista abrió la posibilidad revolucionaria en el resto de los países del área. Los movimientos guerrilleros y las organizaciones políticas de corte revolucionario aumentaron sus actividades de manera notable en El Salvador y en Guatemala. La estrategia contrainsurgente adoptada por esos países consistió en separar a los actores militares de las funciones político-gubernamentales: pasar el gobierno a manos civiles.

Las elecciones de los ochenta y los noventa, han sido en los casos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, procesos de restauración de la democracia electoral tradicional, intentada para detener el incremento de la actividad guerrillera y de violencia política en esos países. La crisis del militarismo centroamericano, puesta en evidencia por el triunfo guerrillero en Nicaragua, así como el fortalecimiento de las guerrillas en El Salvador y Guatemala, es enfrentada con elecciones que llevan implícita una fuerte dosis contrarrevolucionaria, pese a sus expresiones de populismo, especialmente socialcristiano.<sup>4</sup>

Durante el periodo sandinista en Nicaragua ocurrieron cambios políticos importantes en el resto de los países del área. Transformaciones que se dieron por la vía de revitalizar los procesos electorales como una forma política de respuesta a las posibilidades de una revolución generalizada a partir de Nicaragua.<sup>5</sup> Durante la década pasada, hubo dos elecciones generales importantes en Guatemala (1985 y 1990), dos en El Salvador (1984 y 1989) y tres en Honduras (1981, 1985 y 1989). Si incluimos las tres de Costa Rica (1982, 1986 y 1990) observaríamos que en el periodo de los

<sup>3</sup> La fuerza prevaleciendo en la dinámica de cambio político en Centroamérica. Véase Dabéne, *op. cit.*, p. 226.

<sup>4</sup> Los partidos que ganan las primeras elecciones posmilitares son de la corriente socialcristiana, tanto en Guatemala como en El Salvador.

<sup>5</sup> Sobre el tema de las elecciones en Centroamérica véase a John Booth y Mitchell Seligson, *Elections and Democracy in Central America*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1989; "Elections en Amérique Centrale 1989-1991", en *Problèmes d'Amérique Latine*, julio-septiembre, 1991, París.

diez años de poder sandinista en Nicaragua, hubo diez elecciones presidenciales y varias elecciones municipales, en los países centroamericanos.<sup>6</sup>

En todos esos casos la oferta electoral procuró neutralizar las tendencias de cambio violento en cada uno de esos países.

Para la realización de elecciones generales, los militares y los partidos políticos acordaron reformas sancionadas con elecciones para una asamblea constituyente destinada a reformar las constituciones políticas (1980, en Honduras) (1984, en Guatemala) y elecciones legislativas con fines similares en El Salvador (1982, 1985 y 1988). Estas reformas facilitaron la transición de gobiernos militares a gobiernos civiles en los tres países mencionados. Asimismo, proporcionaron credibilidad en las ofertas que esas naciones hacían a los sandinistas para que se enfrentaran electoralmente con sus adversarios.

En la estrategia contrainsurgente las elecciones y la diplomacia destacaron de manera importante, pues pasaban a formarse gobiernos civiles legítimos con capacidad de ofrecer un discurso democrático, al tiempo que los ejércitos perfeccionaban su capacitación y equipamiento militar necesarios para enfrentar a las guerrillas.

Puestos en una posición legítima, los gobiernos civiles pudieron ofrecer una alternativa política a sus conflictos internos y una oferta diplomática al sandinismo para que también optara por la democratización por medio de elecciones competitivas.

Con base en lo anterior la importancia de elecciones en una situación autoritaria se vería con mayor énfasis en el proceso electoral de Nicaragua en 1990. Representaba una elección que atraería la atención internacional como nunca antes en Centroamérica. Una revolución prosoviética se jugaba su suerte política en unas elecciones generales supervigiladas. Una elección forzada por los acontecimientos de la guerra civil y por las presiones internacionales. Una elección que presentaba una solución institucional a la crisis nicaragüense.

<sup>6</sup> Véase enlistado de las elecciones efectuadas en Centroamérica en Debéne, *op. cit.*, y en *Problèmes d'Amérique Latine*, núm. 2, *op. cit.*

Como señala O'Donnell para la definición de elecciones fundacionales, encontramos que en el caso nicaragüense se reproducen los elementos marcados para ese tipo de fenómenos: hay una rápida modificación de las relaciones entre las facciones y fuerzas contendientes, dentro y fuera del régimen; los partidos políticos se colocan en el centro del escenario político; la discusión de principios es sustituida por la discusión de procedimientos; la concurrencia a las urnas y la incertidumbre de los resultados son abundantes.<sup>7</sup>

### **Nicaragua: una elección fundacional**

Establecidas las condiciones de la competencia electoral, y fijadas las bases de supervisión internacional, prevalece en Nicaragua un entusiasmo cívico que facilita la reunión de participantes en una dicotomía simple: sandinismo contra antisandinismo. Los partidos se ven obligados a una rápida modificación de sus relaciones internas. En el caso nicaragüense, esta situación se explica por el alto grado de polarización política, que deja poco espacio para los matices. Aun cuando hay una proliferación de partidos en la oposición, la polarización los tiende a unificar en esa dicotomía, sin que influyan de manera decisiva las cuestiones diferenciales entre programas partidarios, condición social, sexo o edad. Precisamente lo que le da el carácter de una elección fundacional es ese sentido de presionar el destino del sandinismo.

Aun cuando la selección de Violeta Chamorro como candidata opositora abre un espacio a la simbología electoral destinada a bajar la intensa polarización, su candidatura coloca a la alternativa opositora por encima de la división entre partidos y entre facciones partidarias.<sup>8</sup> Resulta claro que la alianza opositora debió

<sup>7</sup> Véase O'Donnell y Schmitter, *Conclusiones tentativas...*, *op. cit.*, pp. 96-101.

<sup>8</sup> Como se observa en el enlistado de partidos dentro de la alianza opositora UNO, se encuentran, entre otros, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Nacional Conservador, una variada gama de partidos liberales, socialdemócratas y demócratacristianos. Las enemistades personales, más que las afiliaciones o coherencias programáticas, habían dividido a la oposición en un gran número de minipartidos, pero los reunió el antisandinismo.

votar varias veces para lograr consenso sobre quién debería ser su candidato. La señora Chamorro nunca obtuvo la mayoría de votos necesarios para ganar la candidatura dentro de la UNO. Después de varias rondas de votación sin resultado a favor de algunos de los precandidatos, debieron intervenir procedimientos internos ajenos al mecanismo de la votación para lograr un consenso. El retiro de Enrique Bolaños como precandidato a la presidencia y la discusión primero de quién debía ser el candidato a vicepresidente, facilitó un consenso favorable para la elección de Chamorro como candidata a la presidencia por la UNO.

En el lado del sandinismo es poco conocido cómo aceptaron las facciones internas la decisión de que nuevamente fuera postulado como candidato Daniel Ortega. Es probable que esa aceptación fuese también una decisión orientada a promover la imagen de unidad requerida para la elección. Puede también interpretarse como una confirmación de la hegemonía de la facción tercerista sobre las otras dos facciones. El hecho es que el sandinismo enfrentaba el riesgo de una democracia electoral que no deseaba pero que estaba dispuesto a permitir y respetar.

A finales de 1989, la efervescencia electoral daba lugar a la aparición de una nueva batalla en Nicaragua: la guerra de las encuestas: ¿quién ganará las elecciones del 25 de febrero de 1990?

Las noticias de un acuerdo de todos y entre todos, para darle a las elecciones de 1990 una función significativa en la solución de la crisis nicaragüense, convirtió a los electores en gente importante.

En forma deliberada o no, la opinión internacional que medía a la opinión pública local desde una diversidad de medios, forjó en la gente una imagen de que su voto sería significativo porque sería respetado. Pero, en general, la gente común habló poco o no dijo nada y cuando lo hizo, ocultó sus intenciones de voto.

La campaña opositora había sido silenciosa, escasa en recursos y poco dispuesta a arriesgar grandes y masivas concentraciones de simpatizantes. Si se observaba la campaña opositora, ésta no parecía sugerir la capacidad suficiente para lograr una impresionante participación política capaz de contrariar los niveles de organización política del sandinismo. La insistencia de presentar unas elecciones decisivas para el futuro de la nación, en ambos bandos, dejó a los votantes en una posición privilegiada. En el aspecto legal,

el sandinismo, confiando en su relación con la juventud, había disminuido la edad para votar a 16 años. Los sandinistas confiaban en esa juventud que había sido insistentemente educada por ellos en una dirección en la cual la fuerza era el instrumento privilegiado de la defensa de la revolución. Era la misma juventud invitada por los líderes a usar el voto como instrumento privilegiado para defender a la revolución.

“Todo será mejor”, decía el eslogan central de la campaña del candidato a la presidencia, Daniel Ortega. Vestido de *jeans*, camisas floreadas y botas rockeras, el candidato se dirigía a la juventud, la misma que venía de la guerra, para pedir su voto en defensa de la revolución.

El candidato sandinista pertenecía a la facción insurreccional o tercerista, la dominante dentro del sandinismo. La misma que había encabezado las negociaciones con la contra. El jefe de campaña, Bayardo Arce, pertenecía a la facción de la Guerra Popular Prolongada (GPP), que integraba a los “duros” del sandinismo. Una combinación extraña pero funcional a los intereses del sandinismo, pues era la organización, la disciplina, lo que ellos cuidaban para ir a las elecciones. Al confundir organización con participación, se sintieron confiados en superar a los débiles y fragmentados partidos opositores agrupados en la UNO.

Con un frente musicalizado de estilo *pop*, un dibujo de gobierno futuro hecho a la imagen sueca, los sandinistas salieron en busca de la victoria electoral.

### LOS CONTENDIENTES

¿Quiénes contendían? Los sandinistas y lo que éstos llamaban la oposición interna, quienes estaban organizados en una coalición de partidos bajo el nombre de Unión Nacional Opositora (UNO).

Del total de los partidos, 13 de ellos aparecieron durante el sandinismo. En seguida se explica. En la historia nicaragüense, hasta 1978 hubo cuatro corrientes partidarias con un máximo de dos facciones en cada una de ellas: los liberales, los conservadores, los socialcristianos y los comunistas. Como puede observarse en el cuadro siguiente, a partir de 1979 proliferaron facciones que

**Partidos políticos nicaragüenses**

<i>Partidos</i>	<i>Fecha de fundación</i>	<i>Alianza electoral</i>
Partido Liberal Independiente	1944	UNO
Partido Liberal Constitucionalista	1968	UNO
Partido Neoliberal	1985	UNO
Partido Liberal de Unidad Nacional	1987	
Partido Conservador Demócrata de Nicaragua	1961	UNO
Partido Social Demócrata	1979	UNO
Partido Social Conservador	1989	UNO
Partido de Alianza Popular Conservadora	1984	UNO
Alianza Nacional Conservadora	1989	UNO
Partido Nacional Conservador	1984	UNO
Partido Socialista Nicaragüense	1944	UNO
Partido Comunista de Nicaragua	1966	UNO
Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista	1972	
Partido Revolucionario de los Trabajadores	1984	
Movimiento de Unidad Revolucionaria	1988	
Frente Sandinista de Liberación Nacional	1961	
Partido Social Cristiano	1959	
Partido Popular Social Cristiano	1976	
Partido de Acción Nacional	1987	UNO
Partido Democrático de Confianza Nacional	1988	UNO
Partido Unionista Centroamericano	1920	
Partido Integracionista Unionista de América Central	1990	UNO
Movimiento Democrático Nicaragüense	1978	UNO
Total de partidos: 24		

eran resultado de divisiones de los cuatro grandes partidos tradicionales. La razón de ello es que una estrategia exitosa del sandinismo consistió en fomentar el fraccionamiento de los partidos privilegiando las prebendas a algunos líderes, y de esta manera, forzarlos a enemistades y conflictos de intereses por la distribución de beneficios provenientes del Estado (registro rápido como partidos, acercamientos selectivos con líderes dispuestos a participar como oposición leal, reparto de beneficios económicos por medio de contratos a empresas de su propiedad, etc.). El sandinismo recibía, en cambio, la oportunidad de usar como muestra de pluralismo la existencia de tantas facciones. Adicionalmente, los partidos, al fraccionarse, podían responder con cierta eficacia a la intención sandinista de hacerlos desaparecer, debido a que sus líderes en el exilio se sumaban a la "contra". Esta situación significaba para muchas de esas facciones que nacieron en la temporada sandinista, una forma de sobrevivencia en condiciones difíciles.

El sandinismo privilegió el calificativo de oposición interna para designar a los partidos no sandinistas y les facilitó el camino del faccionalismo, para hacerle concesiones diversas a quienes se conservaran en la condición de oposición leal. Con este adjetivo se excluía a los partidos en el exilio, a los que llamaban oposición externa. El sandinismo se cuidó de no confundir, sin embargo, a los opositores externos con la oposición armada a la que consideraban como fuerza mercenaria. "La democracia la discutimos con los de adentro", solían decir los líderes sandinistas. Quizá no esperaban la oportunidad de someter a prueba esa oferta en una competencia electoral supervigilada.

El intenso faccionalismo facilitado por los sandinistas no produjo los resultados esperados: en cuanto se confirmaron las elecciones libres y supervigiladas, lejos de pelearse entre sí, las múltiples facciones de los partidos opositores se sumaron en un solo frente electoral antisandinista.

Es importante destacar lo anterior siempre que se tome en cuenta que las elecciones con la oposición interna estaban calculadas para realizarse cuando la contra estuviese desmovilizada. Los sandinistas siempre calcularon que las elecciones libres que le exigían en las negociaciones centroamericanas se llevarían a cabo cuando la contra se hubiese rendido.

La imposibilidad para lograr la rendición de la contra negociada durante 1988 y 1989, cuando ya se había acordado participar en elecciones bajo supervisión internacional, condujo al sandinismo a una dependencia cada vez mayor de sus compromisos internacionales, especialmente con la diplomacia centroamericana, confiando en que por medio de ésta se lograría, por lo menos, una promesa de desmovilización de la contra antes de las elecciones.

El efecto de lo anterior era muy significativo porque sacaba a la oposición política interna del aislamiento que el sandinismo promovía para intimidarla y controlar sus movimientos, como había ocurrido en las elecciones de 1984. La situación era ahora distinta.

Los sandinistas no sólo habían reconocido a la contra como interlocutora para poner fin a la guerra civil, sino que ni siquiera obtuvieron algún beneficio con la desaparición de esa fuerza. Así, la oposición de los partidos políticos se veía fortalecida por el grupo armado, sin que ésta arriesgara su desaparición en el evento electoral.

La contra, al no desarmarse antes de las elecciones, confiaba su presencia a la UNO, pues le garantizaba que si no había respeto a los resultados electorales, el sandinismo seguiría siendo atacado militarmente. Además, ello ocurría sin que se pusiera en riesgo ninguna de las identidades (la de oposición interna y la de oposición armada). Con la posición que asumían los sandinistas, la contra obtendría doble beneficio: no se desarmaba y no se arriesgaba electoralmente como partido político.

De tal manera, los ambientes local e internacional eran, en todo sentido, favorables a una contienda en la que la oposición interna fuese respetada como legítima contendiente por el poder. Soviéticos y norteamericanos estaban de acuerdo en dejar en suspenso sus respectivas ayudas militares hasta las elecciones de 1990. La contra siguió el mismo camino: esperar el resultado de las elecciones para decidir su desmovilización.

Es interesante seguir la estrategia de la separación entre las oposiciones, promovida por los sandinistas y, posteriormente, aprovechada por sus opositores.

## EL FIN DE LA CONTRA A CAMBIO DE ELECCIONES LIBRES

Los presidentes centroamericanos decretaron el 7 de agosto de 1989, en Tela, Honduras, “el fin de la contra” para diciembre de ese año; a cambio, los sandinistas se comprometieron a una democratización irreversible, de cara a las elecciones de 1990.<sup>9</sup>

Democracia a cambio del fin de la guerra en las negociaciones inconclusas de 1988; democracia a cambio de desmovilización voluntaria de la contra, en 1989.

Los sandinistas seguían haciendo concesiones a la oposición interna, en la misma medida que obtenían promesas de los gobiernos centroamericanos en el sentido de que la contra estaría desarmada en el plazo que se indicó. Sin embargo, las concesiones políticas se hacían efectivas mientras las promesas diplomáticas tardaban en cumplirse. La contra persistía como una fuerza armada en espera de la democracia. Esta situación colocó la cuestión democrática por encima de cualquier otro tema, en claro perjuicio de la estrategia sandinista aplicada en las negociaciones de 1988 y en beneficio de la oposición agrupada en la UNO.

“Desarmarse es la mejor opción que tienen ustedes, una vez que su existencia se ha vuelto obsoleta” —dijeron, en Yamales, los representantes de la CIAV-OEA a líderes militares de la contra. “Esperaremos los cambios democráticos en el país” —contestaron.<sup>10</sup>

Por todos lados, la opinión pública coincidía: acudir a las urnas a decidir el destino del sandinismo. La impresionante fuerza militar del Estado no servía en la nueva situación. El momento militar había quedado en suspenso.

La prensa soviética señalaba el vínculo entre democracia y desmovilización de la siguiente manera: “los sandinistas están preparados a llevar adelante las reformas democráticas, a cambio

<sup>9</sup> “El fin de la contra”, *El País*, Madrid, 9 de agosto de 1989, p. 8.

<sup>10</sup> Citado por *The New York Times*, 15 de octubre de 1989, p. 11. Los sandinistas no tenían muchas opciones frente al problema. A pesar del Acuerdo de Tela, el presidente hondureño había declarado que si la contra tenía su gente en Nicaragua, él no podía hacer nada y que, además, la desmovilización de esta fuerza era voluntaria. Citado por *El Heraldo*, Tegucigalpa, 12 de agosto de 1989, p. 3. El compromiso de democratización era, sin embargo, un acuerdo obligatorio para los sandinistas, *La Nación*, San José, 17 de agosto de 1989, p. 16A.

de la desmovilización de los rebeldes.”<sup>11</sup> Por su parte, el presidente Bush declaró que su gobierno estaría listo a reconocer como legítimo a un gobierno sandinista si éste fuese resultado de elecciones libres. El cuadro político electoral estaba listo para la contienda. Numerosos grupos de observadores empezaron a llegar a Nicaragua. Los árbitros electorales congregados en una misión de las Naciones Unidas para Verificar las Elecciones de Nicaragua (NUVEN), se distribuyeron en todo el territorio nacional. Miles de observadores internacionales seguían redescubriendo el país. Los domingos asistían, como a una fiesta, a observar el intenso registro de votantes. En cuatro domingos sucesivos se registraron 1.3 millones de votantes.<sup>12</sup> En la fecha prevista (octubre de 1989) se habían registrado 1 752 088 personas, apenas 10% menos de los ciudadanos en edad de votar. Por una u otra razón el ciudadano se había percibido como importante en las elecciones.

Liberadas de la censura, las estaciones de radio opositoras alentaron la participación de los electores, mientras las radios sandinistas hacían lo mismo con sus seguidores. En un país como Nicaragua, rural y pobre, la comunicación radial es un medio fundamental para la política. Esto lo demostró en las elecciones de 1990. La población rural “vivió pegada a la radio”, como único puente de información durante la campaña electoral, como antes lo había hecho para seguir los acontecimientos de la guerra civil. Un fenómeno similar ocurre en Centroamérica, en donde la televisión todavía tiene un papel limitado como medio de uso político. Aun así, la misa dominical por televisión se convirtió, en las ciudades nicaragüenses, en un programa obligado para orientarse en política. Desde el púlpito de la iglesia de las Sierritas, el cardinal Miguel Obando y Bravo, prominente líder de los opositores al sandinismo, en sus homilías dominicales orientaba a la población sobre la importancia de votar, confirmado el uso valioso de los medios de comunicación radial y televisiva en la contienda electoral.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *The New Times*, Moscú, agosto de 1989, p. 13.

<sup>12</sup> Mark Uhlig, “Nicaraguans Register in Huge Numbers”, *The New York Times*, 23 de octubre de 1989, p. 3.

<sup>13</sup> Éste es un fenómeno que sucede en todos los procesos políticos latinoamericanos de los últimos años. Véase Thomas Skidmore, *Television, Politics, and the Transition to Democracy in Latin America*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1993.

En tal efervescencia electoral, las encuestas tenían un espacio privilegiado. En general, éstas señalaban que los sandinistas ganarían y que Estados Unidos tendría que enfrentarse con una clara victoria sandinista.<sup>14</sup> Algunos observadores, más cautelosos, señalaban que la “amplia oposición al sandinismo no se reflejaba en las encuestas”.<sup>15</sup> Otros marcaban la existencia de un buen número de indecisos. “Los indecisos se vienen con nosotros”, decían los sandinistas por medio de encuestadores privados comisionados por la Universidad Católica, guiada por jesuitas pro-sandinistas.<sup>16</sup> “La oposición de la UNO pierde terreno, el Frente adelante, 51% contra 24%”, señala la encuesta que efectuó Greenberg-Lake, en enero, bajo los auspicios de la Hemispheric Initiatives de Boston.<sup>17</sup> “Votar por la UNO es como votar por Estados Unidos, por elio el sandinismo espera ganar un mínimo de 70% de los votos”, decían publicaciones estadounidenses solidarias con el sandinismo.<sup>18</sup> “Ortega, 53%; Chamorro, 35%”,<sup>19</sup> “Ortega, 48%; Chamorro, 32 por ciento”.<sup>20</sup>

Desde La Habana, los cubanos hablaban de “Violeta con espinas” y de lo “formidables” que eran como oponentes los sandinistas, dando sólo 16% de los votos a Violeta Chamorro.<sup>21</sup> Desde Moscú, los soviéticos se apuntaban por un resultado incierto y negaban credibilidad a las encuestas; un articulista señalaba que, en todo caso, se formaría un gobierno de coalición.<sup>22</sup>

<sup>14</sup> Roth Brad, “What if the Sandinistas Win Fairly?”, en *Christian Science Monitor*, Boston, 25 de enero de 1990, p. 18.

<sup>15</sup> David Asman, “Nicaragua’s Looking-Glass Election”, en *The Wall Street Journal*, Nueva York, 22 de febrero de 1990, p. 14A.

<sup>16</sup> Citado en *Barricada Internacional*, Managua, 3 de febrero de 1990.

<sup>17</sup> Citado en *Barricada Internacional*, Managua, 3 de febrero de 1990, p. 3.

<sup>18</sup> Larry Seigle, “FSLN Focuses on Foes’ US Ties in Nicaragua Elections”, en *Militant*, vol. 54, núm. 6, Nueva York, 9 de febrero de 1990, p. 6.

<sup>19</sup> Martin MacReynolds, “Ortega Leading in Race for Presidency, Poll Indicates”, en *Miami Herald*, 13 de febrero de 1990, sección A, p. 6.

<sup>20</sup> Encuesta del *The Washington Post* y la cadena ABC, citado en *The Washington Post*, 21 de febrero de 1990, pp. A1 y A17.

<sup>21</sup> Néstor Núñez, “Violeta con espinas”, en *Bohemia*, núm. 37, septiembre de 1989, p. 67.

<sup>22</sup> Yuri Kudimov, “Nicaragua: Who Will Win?”, en *New Times*, núm. 4, Moscú, 23-29 de enero de 1990, p. 8.

Las elecciones serían la mejor encuesta: 54.7% para la UNO y 40.8% para los sandinistas.<sup>23</sup> Pese a las condiciones difíciles en las que los ciudadanos debían desplazarse para votar, en especial en las zonas rurales afectadas directamente por la guerra, la participación fue numerosa, con una abstención de 13.7 por ciento.

En cuanto se conocieron los resultados oficiales vendría luego toda una cadena de explicaciones de por qué fallaron la mayoría de las encuestas al anunciar cifras erróneas. Las encuestas fallaron en mostrar las tendencias actuales del electorado: temor de manifestar sus inclinaciones políticas.<sup>24</sup> En este sentido, un periodista norteamericano daría una versión del porqué fallaron las encuestas y no previnieron la derrota sandinista: el miedo y la intimidación no dejaron ver la verdadera opinión preelectoral. Con el fin de demostrarlo, recurrió a una simpática manera de probarlo: tres equipos de encuestadores, con el mismo cuestionario pero cada uno con un lápiz de distinto color, uno correspondiente a los colores del FSLN, otro a los de la UNO y otro neutral, hicieron la encuesta. Los resultados fueron acordes con el factor intimidante de la afiliación de color de lápiz de cada equipo.<sup>25</sup>

Los analistas del sandinismo dieron muchas explicaciones, todas con una justificación: la acción imperialista, el miedo al reclutamiento militar, las promesas de la UNO de conseguir ayuda económica de Estados Unidos. “El pueblo nicaragüense fue forzado a escoger entre la dignidad nacional y su sobrevivencia económica.”<sup>26</sup>

Mientras los analistas del sandinismo continuaban con su argumento de culpar al imperialismo, un analista soviético escribió: “La derrota [de los sandinistas] está ampliamente justificada... es un recordatorio de que los gobiernos deben escuchar a su pueblo...”<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Resultados de las elecciones del 25 de febrero de 1990, Consejo Supremo Electoral, Managua.

<sup>24</sup> Julia Preston, “The defeat of the Sandinistas”, en *New York Review of Books*, vol. 37, núm. 6, 12 de abril de 1990, pp. 25-27.

<sup>25</sup> Howard Schuman, “...3 Different Pens Help Tell the Story”, en *The New York Times*, 7 de marzo de 1990, p. 15A.

<sup>26</sup> Xavier Gorostiaga, “Seis años comiendo dignidad”, en *El País*, Madrid, 2 de abril de 1990, p. 10.

<sup>27</sup> Alexander Baryshev (director adjunto de *Latinskaia Amerika* de la Academia de Ciencias de la URSS), citado por Linda Robinson, en *Intervention or Neglect*, *op. cit.*, p. 51.

Fidel Castro había viajado a Brasil; cuando regresó a La Habana ofreció declaraciones el 23 de marzo de 1990, casi un mes después de las elecciones nicaragüenses, para explicar la derrota sandinista de la siguiente manera:

...los que en la historia han tratado de sobrevivir haciendo concesiones, nunca han sobrevivido [...] el único camino de la supervivencia de los procesos revolucionarios es la resistencia.<sup>28</sup>

¿Qué resistencia podían hacer los sandinistas en 1988-1990?

En 1990 se cumplían siete años de desastre económico; en 1989, la inflación fue del orden de 3 380%; la deuda externa, per cápita, era la más alta del mundo, con más de 9 mil millones de dólares; la tasa de desempleo era mayor a 40%; los salarios eran equivalentes a los de 40 años antes, y había miles de familias dolidas por la pérdida de sus hijos en la guerra civil. ¿Qué podían ofrecer al electorado con el eslogan de “Todo será mejor”? El país tenía un ejército de 216 500 hombres que absorbía más de 50% del presupuesto nacional.<sup>29</sup>

La fuerza y su uso no habían sido suficientes para ganar la influencia política en la población. En cuanto ésta tuvo la oportunidad de opinar, lo hizo en la dirección contraria al sandinismo.

Aun cuando la guerra se había desarrollado en las regiones rurales del norte del país, los efectos se habían sentido con mayor fuerza en las ciudades. La brusca caída de la producción de alimentos básicos, paliada con donativos del bloque socialista, era una carga pesada sobre la población urbana. El racionamiento y su relación directa con la afiliación política, ofrecía a los sandinistas una confusión de imágenes: hileras de buscadores de alimentos y de electores ofreciendo respaldo, significaban para ellos lo mismo

<sup>28</sup> Citado por Carlos Vilas, “La contribución de la política económica y la negociación internacional a la caída del gobierno sandinista”, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1990, p. 329.

<sup>29</sup> The Economist. Intelligence Unit, *Nicaragua, Costa Rica, Panama. Country Report*, núm. 4, 1990, pp. 15-20; también The Economist. Intelligence Unit, *Nicaragua, Costa Rica y Panama. Country Profile. 1991-1992*, Londres, 1991, pp. 10-28; véase también Bill Gibson, “The Nicaraguan Economy in the Medium Run”, en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 33, núm. 2, verano de 1991, pp. 23-51.

que se repetían en la dirigencia: la consolidación del sandinismo. Sin embargo, ello no ocurrió así. Los buscadores de alimentos y los miles de ciudadanos que se arrebataban las camisetas y gorras que los sandinistas repartían entre la población, votaron en su contra.

#### LA GEOGRAFÍA DE LA GUERRA Y LA GEOGRAFÍA ELECTORAL

Es interesante observar cómo votaron los nicaragüenses, según su lugar de residencia, estableciendo una relación entre las regiones de la guerra civil y los resultados electorales.

De nueve regiones en las que políticamente está dividido el país, los sandinistas perdieron las elecciones presidenciales en siete y la ganaron en dos; una zona relativamente importante (la región I) la ganaron por 29 votos de diferencia (66 661 para la UNO y 66 690 para el FSLN) y otra prácticamente despoblada (la región IX).<sup>30</sup> De 131 concejos municipales perdieron la mayoría en 101 de ellos.

El mismo comportamiento de los electores se dio para votar a los representantes de la Asamblea Nacional, con la salvedad de empate en dos zonas también despobladas (regiones VII y VIII, en donde obtuvieron, igual que la UNO, un representante).<sup>31</sup> De nueve regiones perdieron mayoría en seis de ellas; sin embargo, lograron 40.84% para obtener 39 bancas de 90 que integraban la Asamblea Nacional.

El voto urbano y rural, por igual, fue favorable a la oposición. Las regiones que incluyen las principales ciudades del país (II, III y IV) fueron ganadas por la UNO. En la región III, que incluye Managua, de 391 418 votos, 209 527 fueron para la oposición.

Las regiones de mayor resistencia armada al sandinismo, como Matagalpa-Jinotega (región VI) y Boaco-Chontales (región V), votaron masivamente a favor de los opositores. En la región V, de

<sup>30</sup> Por regiones, el país comprende: I, Estelí, Madriz y Nueva Segovia; II, León y Chinandega; III, Managua; IV, Carazo, Masaya, Granada, Rivas; V, Boaco y Chontales; VI, Matagalpa y Jinotega; VII, Atlántico Norte; VIII, Atlántico Sur, y IX, Río San Juan.

<sup>31</sup> Resultados de las elecciones del 25 de febrero de 1990. Consejo Supremo Electoral, Managua, Nicaragua.

139 487 votos emitidos, 97 911 fueron a la UNO, y en región VI, de 181 544, 105 020 fueron a la UNO.<sup>32</sup> Ambas regiones aportaron una mayoría importante de combatientes de la resistencia nicaragüense.

#### LA INSTALACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

Había comenzado algo incierto, pero nuevo para el país. ¿Qué tan nuevo realmente?

Luego de varias horas de angustia e incertidumbre en la población y especialmente en los grupos de observadores internacionales, respecto de cómo reaccionarían los sandinistas ante su derrota, Daniel Ortega declaró que respetarían los resultados y entregarían el gobierno a la señora Chamorro, pero quedaban inciertas las condiciones de dicha transferencia.

El comandante Tomás Borge, de la línea dura del sandinismo, anticipó que las fuerzas militares no debían quedar bajo la obediencia del nuevo gobierno.<sup>33</sup>

El presidente Bush, por su parte, mencionó que había tenido una conversación constructiva con el presidente soviético Gorbachev para asegurarse que habría una transferencia ordenada del poder en Nicaragua.<sup>34</sup>

En Honduras, los líderes militares de la contra recibían la victoria electoral de la UNO como su victoria y anunciaba su disposición de desarmarse luego de una negociación con el nuevo gobierno.

Editorialistas de la prensa norteamericana dijeron que “irónicamente la contra ha adquirido una gran influencia política desde que terminó la guerra civil y los sandinistas fueron derrotados electoralmente”.<sup>35</sup>

La presidenta Chamorro se enfrentaba así a dos ejércitos que debía desarmar, pero sobre los cuales ejercía poco control. Una coalición de aliados electorales difíciles de conservar como colabo-

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Citado en *Los Angeles Times*, 27 de febrero de 1990, p. 1A.

<sup>34</sup> *The New York Times*, 1 de de marzo de 1990, p. 10A.

<sup>35</sup> *El Nuevo Herald*, Miami, 2 de marzo de 1990, p. 1A.

radores aliados gubernamentales y un enemigo electoral dispuesto a imponerse como un indispensable aliado del nuevo gobierno.

Semejante situación mostraba que el nuevo gobierno tendría dos tareas básicas: pacificación militar y recomposición de fuerzas políticas.

En la primera debía lograr la desmovilización de la contra y la reducción del ejército sandinista; en la segunda, guardar distancia de sus propios aliados electorales, a cambio de reducir las confrontaciones con sus opositores sandinistas.<sup>36</sup>

Ambas tareas eran un requerimiento previo para el inicio de una transición democrática en Nicaragua y comprendidas dentro de una difícil etapa de emergencia para la cual contaba con escasos recursos políticos propios, como pudo confirmarse cuando anunció la formación de su gobierno: la oposición estaba ausente en el nuevo gabinete. Se trataba de un gobierno de disidentes del sandinismo, proclives a respaldar la idea de salvar las reformas que el sandinismo consideraba irrenunciables.

La presencia del general Humberto Ortega al mando del ejército reforzaba la estructura gubernamental como desligada de la coalición opositora que había dado la victoria electoral a la señora Chamorro; sin embargo, dejaba la fuerza legítima en manos de los adversarios derrotados electoralmente.

¿Hasta dónde era posible que la presidenta Chamorro optase por un alineamiento diferente? Es una pregunta que no puede hacersele a miembros de la oposición, quienes se sienten traicionados por la señora Chamorro; pero, sin duda, es la pregunta obligada en un proceso de transición como el nicaragüense.

<sup>36</sup> Véase Xóchitl Lara y René Herrera, "Pacificación y recomposición de fuerzas políticas en Nicaragua" (avance de investigación), México, CIDE, noviembre de 1991.



## 6. LA ETAPA DE EMERGENCIA EN UNA TRANSICIÓN NEGOCIADA: EL GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN NACIONAL Y EL PROCESO DE PACIFICACIÓN<sup>1</sup>

El gobierno de Violeta Chamorro asumió como tarea básica la pacificación del país, escogiendo para ese propósito una estrategia de conciliación con los sandinistas. Las discusiones alrededor de la pertinencia de tal estrategia se encuentran en el capítulo siguiente. En éste evaluaremos la tarea de pacificación. Para evaluar las tendencias de este proceso con sus incentivos y limitaciones, se precisa definir lo que se entiende, conceptualmente hablando, como pacificación, en un contexto de transición negociada de un régimen de izquierda revolucionaria hacia un gobierno prodemocrático.

### LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PACIFICACIÓN EN EL CASO NICARAGÜENSE

Se trata de un proceso que ocurre en un país en que la guerra civil termina por la vía negociada, lo que implica la sobrevivencia relativa de los actores de la confrontación armada. En virtud de la intensidad y calidad de la guerra esta sobrevivencia es significativa en el diseño y ejecución de las tareas de pacificación. A finales de la década anterior el ejército sandinista llegó a tener 216 500 hombres en armas, ocupando más de 50% del presupuesto nacional. De cada mil adultos en el país, 56 estaban involucrados en calidad de personal militar permanente del sandinismo.<sup>2</sup> En la

<sup>1</sup> Este capítulo es una versión modificada del trabajo escrito con la colaboración de Xóchitl Lara, del Departamento de América Latina del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, como parte de un proyecto de investigación sobre la pacificación en Nicaragua.

<sup>2</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, "Reducción de personal militar, periodo 1987-1993", Managua, abril de 1993 (véase gráfica anexa). Estas cifras no incluyen a la policía, a la seguridad del Estado, ni a las milicias del Ministerio del

oposición, 24 mil hombres eran directamente miembros de la resistencia nicaragüense.<sup>3</sup> Además, varios cientos de miles de nicaragüenses aprendieron el uso de armas de guerra durante el servicio militar obligatorio. Atendiendo consignas partidarias de "las armas al pueblo", varios miles de ciudadanos portaban usualmente un arma de fuego.<sup>4</sup>

Se trata, además, de un país cuya dirigencia política valora el gasto militar como prioritario en función de consideraciones partidarias. En 1989, la asignación presupuestaria al ejército sandinista era de 182 millones de dólares,<sup>5</sup> aun cuando las exportaciones totales del país no llegaban a 300 millones de dólares.<sup>6</sup> En ese mismo año el gasto del ejército era cercano a 40% del presupuesto nacional,<sup>7</sup> a lo que habría que sumar los gastos de policía y aparatos de seguridad política cuyo monto se desconoce pero que suelen ser importantes en los países socialistas. El gasto social en ese año era de 24.6 por ciento.<sup>8</sup>

Se trata, además, de un país que enfrenta al conflicto político por vías complementarias a la militar: control y represión de organizaciones no sandinistas, supresión de medios de comunicación social opositora, apropiación extensa de bienes pertenecientes a personas desafectas al régimen,<sup>9</sup> desplazamiento forzado de

---

Interior. Véase Xochitl Lara y René Herrera, *La pacificación en Nicaragua*, CIDE (en prensa), gráfica 5.

<sup>3</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, *Nicaragua y su política exterior*, núm. 17, Managua, enero de 1993, p. 3.

<sup>4</sup> Entre 1980 y diciembre de 1992 se habían recogido 122 376 armas de guerra que estaban en manos de la población civil, Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, *El proceso de pacificación en Nicaragua*, Managua, 1993, p. 5.

<sup>5</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores, "Asignación presupuestaria, EPS, periodo 1989-1993", Managua, febrero de 1993 (véase gráfica anexa). *Ibid.*, gráfica 7.

<sup>6</sup> Véase The Economist. Intelligence Unit, *Nicaragua, Costa Rica, Panama. Country report*, núm. 4, Londres, 1990, pp. 15-20. También The Economist. Intelligence Unit, *Nicaragua, Costa Rica, Panama. Country Profile, 1991-1992*, Londres, 1991, pp. 10-28.

<sup>7</sup> Ministerio del Exterior. "Presupuesto porcentual comparativo del sector social vs. defensa", Managua, febrero de 1993, Xóchitl Lara y René Herrera, *op. cit.*, gráfica 6.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> El 28% de la tierra cultivable del país fue confiscada a sus propietarios privados. En total 21 500 propiedades (12 mil rurales y 9 500 urbanas) fueron

población rural y reubicación de 430 mil campesinos en zonas ajenas a las de su origen de asentamiento,<sup>10</sup> casi un cuarto de la población total (tres millones en 1980) del país al exilio.<sup>11</sup> Directamente vinculado al problema político-militar, se encuentra el de la pobreza extrema —especialmente de la niñez— en que debe ocurrir la pacificación. Según el informe del UNICEF, de junio de 1993, 860 mil niños nicaragüenses viven en la extrema pobreza, 500 mil de ellos viven fuera de su hogar, 240 mil son víctimas de guerra y 120 mil son afectados por desastres naturales. Todos tienen algo en común: deambulan por las calles en busca de sobrevivencia.<sup>12</sup> Dice un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que la pobreza infantil se agudiza con las altas tasas de crecimiento poblacional como consecuencia de una intensa liberalización de las prácticas sexuales. Según el informe de la OPS la vida sexual de la mujer nicaragüense empieza a los 12 años y tiene, según las encuestas, un comportamiento de gran actividad, con un promedio de cuatro relaciones sexuales durante la semana.<sup>13</sup> La incidencia de ello en las condiciones de vida de la niñez es dramática en un periodo de enorme desempleo en el país, que afecta a 56% de la población.

---

reclamadas en la Procuraduría General de la República por los dueños originales después de 1990. Boletín de la Embajada de Nicaragua en Washington, abril de 1993. Debe observarse que éste es el número de propiedades reclamadas formalmente. Hay muchas propiedades rurales cuyos dueños generalmente campesinos pequeños propietarios, no han podido reclamarlas porque carecen de asistencia legal y de recursos para hacer sus reclamos en la capital del país.

<sup>10</sup> Citado por Linda Robinson, *Intervention or Neglect*, Nueva York, 1991, p. 15. También René Herrera Zúniga, *El proceso de democratización en Nicaragua*, North-South Center, Universidad de Miami, 1993, p. 64.

<sup>11</sup> Según distintas versiones, los exiliados oscilan entre 400 y 800 mil. Sólo en Miami se calcula que radican, entre legales e ilegales, 270 mil nicaragüenses. Véase *El Nuevo Herald*, Miami, 14 de agosto de 1993.

<sup>12</sup> Informe del UNICEF, del 1 de junio de 1993, citado por *La Prensa*, Managua, 1 de junio de 1993, p. 1.

<sup>13</sup> Informe de la Organización Panamericana de Salud, citado por *Barricada*, 24 de marzo de 1993, p. 1. La mujer nicaragüense tiene, indica el estudio comparado para Centroamérica, la vida sexual más dinámica y prematura del istmo. La población femenina representa 56% de la población total que crece a una tasa anual de 3.8%, *Barricada*, 24 de marzo de 1993, p. 13.

Todo esto ocurre como parte de un proyecto sandinista de refundación del Estado, de la participación del individuo en la sociedad y la política, del papel de la familia, de la Iglesia y del sistema educativo. Decenas de leyes y decretos fueron emitidos entre 1979 y 1990 con el fin de legislar ese proceso de refundación del Estado. Las organizaciones sociales y las instituciones de la propiedad, las relaciones obrero-patronales y las reglas de la competición política fueron redefinidas con una clara orientación totalitaria.<sup>14</sup>

En ese contexto se inicia el proceso de pacificación, algo más complicado que la idea de desarme y reconciliación, sustentada por lo general para explicar la transición nicaragüense.

Lo que distingue a la transición del país de otros procesos latinoamericanos y en especial centroamericanos (por ejemplo, el caso de El Salvador) es precisamente que no se trata de un proceso de desarme y de reconstrucción física, sino de varias y distintas tareas que suceden en un cambio de régimen político. Armas, economía, sociedad y política, juntas en la etapa de transición, de un conjunto de valores de corte totalitario a un conjunto de valores liberales. La pacificación debe entenderse en ese contexto jurídico-político.

#### LA PACIFICACIÓN: UNA INTERPRETACIÓN EN TRES VERSIONES

Hay tres versiones del concepto de pacificación: *a)* la pacificación integral, sustentada por los actores enfrentados militarmente y que sobreviven a la negociación para poner fin a la guerra civil; *b)* la pacificación técnica, fundamentada por organismos internacionales y países interesados en la estabilización del país; *c)* la pacificación limitada, implementada por el gobierno y ejecutada por éste entre 1990 y 1993.

Vamos a identificar los rasgos de las dos primeras —integral y técnica— y luego dedicaremos atención a la política de pacificación limitada, como ha sucedido en la práctica desde 1990 hasta 1993.

<sup>14</sup> Muchas de esas leyes fueron reelaboradas después de la derrota electoral de febrero de 1990, para colocar “candados” al nuevo gobierno; destacan en especial las leyes militares (Decreto Ley 291) y de la propiedad (Decreto Ley 85 y 86).

## **Pacificación integral**

En esta versión se entiende a la pacificación como un proceso que incluye, al mismo tiempo, aspectos militares, políticos, económicos y sociales.

Asimismo, aquí están presentes todos los aspectos aunque los técnico-militares son más visibles porque se refieren a cuestiones cuantificables: desarme, reducción de efectivos militares, recursos financieros para restituir el desarme (en el caso de la resistencia) y el retiro (en el caso del ejército sandinista). Así también, en una perspectiva técnica se atienden la fijación de un tamaño y una calidad del ejército, su profesionalización y equipamiento y su presupuestación respecto del presupuesto nacional.

Los aspectos sociales aparecen identificados en programas y promesas de incorporación de los rebeldes a la vida civil mediante concesiones de tierra, viviendas, créditos y apoyos varios adicionales a la compensación puramente monetaria.

Se manejan como secuelas de la guerra, el desempleo, la violencia, la delincuencia, la prostitución, la niñez abandonada y los déficit de presupuestos para el sector social.

Los aspectos políticos son más difíciles de precisar, pero en todo caso están referidos a la redefinición de las relaciones cívico-militares, al establecimiento de un Estado de derecho y la puesta en práctica de valores de compromiso para dilucidar los conflictos sociales.

En esta versión integral hay claros indicios de una redistribución del poder político de los militares.

## **Pacificación técnica**

Esta versión se relaciona con asuntos puramente técnicos sin referencias expresas a su significado político. Es claro que las orientaciones políticas existen, pero no se difunden. Las decisiones de desarme, reducción de efectivos militares, fijación de compensaciones monetarias y otros aspectos relacionados, tienen un seguimiento verificable y cuantificable.

Es una versión sugerida, verificada *in situ* y reportada por comisiones internacionales.<sup>15</sup>

En el caso de Nicaragua esta versión corresponde a la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) y a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), identificados como CIAV-OEA. En el ámbito local corresponde a las comisiones; por ejemplo, la Comisión Tripartita Iglesia-CIAV/OEA-Gobierno,<sup>16</sup> la Brigada Especial de Desarme (BED) integrada por personal militar sandinista y por la resistencia para promover el desarme en la población civil particularmente rural, y por último comisiones especiales según temas específicos de las secuelas de la guerra.<sup>17</sup>

Adicionalmente a los trabajos de los organismos internacionales, ha habido países involucrados en los asuntos técnico-militares de la pacificación. España y México, por ejemplo, han previsto asesorar con el fin de que se redefinan las funciones del ejército y la policía, la profesionalización de las fuerzas armadas y la creación de una nueva Ley de Organización Militar.<sup>18</sup> La Junta Interamericana de Defensa de la OEA ha entrenado oficiales del ejército sandinista en lo que se refiere a la limpieza de campos minados.<sup>19</sup>

En esta versión técnica no hay referencias a la política, aun cuando se mencionen temas de reconciliación de corto plazo. Es una tesis que sólo presenta aspectos distributivos de poder (menos

<sup>15</sup> Desde el periodo de negociaciones de 1988, para poner fin a la guerra nicaragüense los organismos internacionales tienen una participación importante, como verificadores del proceso de pacificación. Los grupos de Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica (Onuca) y la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV)-OEA han sido los principales.

<sup>16</sup> Creada el 2 de octubre de 1992 para verificar aspectos relacionados con violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la desmovilización de la resistencia nicaragüense y la reducción del Ejército Popular Sandinista (EPS).

<sup>17</sup> La BED fue creada el 12 de noviembre de 1991.

<sup>18</sup> El ejército sandinista informó que estudiaba las experiencias de España, México y Honduras para redactar sus propuestas de Ley de Organización Militar. Véase *La Prensa*, 14 de abril, 1993, p. 1.

<sup>19</sup> Militares de Brasil, Chile, Argentina y Uruguay actuando en nombre de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA, participan como entrenadores en un curso al ejército sandinista para desactivar 116 mil minas colocadas en zonas de guerra. Véase *La Prensa*, 14 de abril, 1993, p. 1. Los carabineros de Chile asesorarán el entrenamiento de la policía, según declaraciones del embajador de Nicaragua en Chile, doctor Roberto Ferrey.

poder para todos) y cada acción (desarme o reducción de efectivos militares) no supone por adelantado una condición política nueva. En consecuencia, la pacificación entendida así no implica una desactivación del conflicto político, sino un desarme físico del mismo. El gobierno, bajo verificación y asesoría de las agencias externas (ONU, OEA, Iglesia, etc.), administra esas acciones de pacificación (desarme y reducción de efectivos) en aras de la estabilidad sin definir cómo debe ésta construirse a expensas de uno u otro actor armado. El gobierno representa la contraparte local de una comisión verificadora internacional: administra pero no gobierna ni decide el proceso de pacificación, simplemente lo administra.

### **Pacificación limitada**

La tercera versión es la que asumió el gobierno de Violeta Chamorro. Antes de presentarla es preciso aclarar algunos aspectos de los dos conceptos anteriores.

En las exposiciones anotadas los asuntos técnicos son los más visibles y alrededor de ellos hay un consenso de todas las partes. El problema está en que en la primera versión, la integral, existe una unidad pero la entienden de manera diferente. Esto es así porque se trata de una pacificación que sigue a la guerra civil con elevados contenidos ideológicos reflejados de manera concreta en cambios profundos de los valores de la sociedad. El sandinismo intentó, como ya lo dijimos, una refundación del Estado. Con ese fin privilegió valores típicos de regímenes totalitarios en la cuestión de la propiedad, las relaciones cívico-militares, las relaciones Iglesia-Estado, la importancia de la familia, el uso de los medios de comunicación, las relaciones obrero-patronales, la función del Estado, etc. El sandinismo no pudo consolidarse pero logró que algunos valores totalitarios quedaran en leyes y prácticas gubernamentales que dificultan la pacificación luego de su derrota electoral en 1990.

La pacificación integral está, pues, sometida a tantas presiones de los bandos opuestos que prácticamente resulta imposible hallarle una orientación definida.

Para los sandinistas, la pacificación integral significa el desarme de la contra; a cambio, acepta la reducción de efectivos militares sandinistas, ajustes en los gastos militares y algunas modificaciones a las leyes que rigen las relaciones cívico-militares establecidas durante su gobierno. Sin embargo, el objetivo de aceptar esos ajustes técnicos es sólo para garantizar la institucionalización de las políticas aplicadas durante la revolución y, de esta manera, convertir el proceso de pacificación en un proceso de consolidación integral de las instituciones revolucionarias (reforma agraria, reparto de bienes urbanos entre sus seguidores, autonomía militar frente al gobierno civil, participación de los obreros en la propiedad y administración de las empresas, control judicial, etcétera).<sup>20</sup>

En cambio, para los antisandinistas, la pacificación integral significa el desarme de la resistencia nicaragüense y, como contrapartida, la abolición paulatina del Ejército Popular Sandinista. Mientras ello ocurre debe procederse a su nacionalización —eliminar su designación de Ejército Popular Sandinista— y su profesionalización; lo anterior significa que estará delimitado de manera interna, y habrá fijación de plazos para la permanencia del jefe del ejército en sus funciones, así como la clarificación de los procesos de reclutamiento, promoción y retiro, y la subordinación al poder civil para la toma de decisiones en las políticas del gasto militar y de seguridad. Este proceso va integrado en una evolución política de desmantelamiento de las instituciones políticas del sandinismo, por medio del ejercicio gubernamental; por ejemplo, la regularización de la propiedad mediante la devolución o compensación a sus dueños originales, desistimiento del control sandinista sobre el poder judicial como medida previa a la impartición de justicia, y redefinición de las relaciones obrero-patronales, sin que lo anterior afecte las conquistas sociales del trabajador.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> La transición de la guerra a la paz y la época de las elecciones supervigiladas terminó —dicen los sandinistas— con el traspaso del poder al gobierno Chamorro. Ahora debe ser interés primordial del Estado, fortalecer las instituciones políticas nacionales como una precondition de su fortaleza externa, *Barricada*, 24 de marzo de 1993, p. 13.

<sup>21</sup> El documento más completo en esa versión antisandinista es el elaborado durante las Jornadas de Reflexión sobre la situación de Nicaragua por un grupo de 50 notables. Véase el texto en *La Prensa*, 25 de abril de 1993, p. 1.

Así la versión de pacificación integral carece de viabilidad si sólo se considera una perspectiva. Más bien, corresponde al gobierno electo en 1990 administrar la pacificación colocándose a una distancia prudente de los actores armados. Lo anterior pretende que la pacificación sea un proyecto difícil, pues aunque el gobierno tiene un mandato de sus electores para actuar como gestor de la pacificación integral en la versión antisandinista, está atado por una serie de limitaciones constitucionales que el sandinismo logró imponerle antes de entregarle el poder.

El gobierno debe avanzar sus objetivos de pacificación participando en negociaciones y quedando siempre sujeto a la crítica de uno u otro actor. “Yo recibí el programa de la UNO, es cierto, pero también recibí la Constitución dejada por los sandinistas”, suele decir la presidenta Chamorro para explicar sus decisiones y reaccionar ante las críticas de sus propios seguidores, quienes cuestionan su lentitud en las decisiones gubernamentales frente al sandinismo.<sup>22</sup>

De tal manera, la ruta de pacificación gubernamental, a la que hemos llamado pacificación limitada, es una versión llena de confusiones y contradicciones según las circunstancias en que se desarrolla. En ocasiones el gobierno luce antisandinista y en otras, en mayor número de veces, luce como prosandinista. De ahí surge la referencia constante al cogobierno, con lo cual se trata de una política en cuyo diseño y ejecución participan más los sandinistas y la presidencia, ique los antisandinistas que ganaron las elecciones de 1990! Sin embargo, muchas de las confusiones tienen su origen en la falta de claridad de los objetivos del gobierno de Chamorro y la falta de entendimiento de la UNO sobre los significados de una transición.

La primera gran confusión es concebir a las elecciones de 1990 como el origen del proceso de pacificación. Ésta se inició como un proceso negociado entre los actores militares (sandinistas y contras). Las elecciones fueron un refrendo de esas negociaciones. Sin embargo, la población colocó en el proceso electoral de 1990, una expectativa desproporcionada, pues pensaba que los resultados

<sup>22</sup> Véase, por ejemplo, entrevista de la presidenta Chamorro en *Barricada*, del 25 de febrero de 1993, p. 5.

electorales mostrarían una definición de los procesos posteriores (fin o desaparición del sandinismo). En la realidad no resultó así porque el nuevo régimen estaba, de alguna manera, previamente definido como gobierno de reconciliación y pacificación nacional. En términos prácticos, lo anterior significa un cuasi cogobierno con el sandinismo.

Otra confusión está en concebir al gobierno como una entidad obligada a cumplir el mandato electoral: primero, cambiar el régimen político y luego pacificar al país. En realidad el gobierno ha centrado sus esfuerzos en administrar la paz y, dependiendo de su éxito, respetar las aspiraciones de cambio de régimen que la población impuso con su voto.

Es un hecho real que el gobierno surge sin autonomía porque pese a su condición de triunfar en elecciones, está sometido constitucionalmente a las limitaciones que le impone el sandinismo. Esto lo convierte más que en un gobierno nuevo de signo opositor, en un gobierno de pacificación limitada más cercano al cogobierno con el pasado que a un gobierno de auténtica transición hacia la democracia.

Los hechos revelan que el gobierno de Violeta Chamorro renunció a las opciones de cada uno de los actores armados y en un proceso que se distingue por las ambigüedades, optó por una estrategia de acomodados que no encaja ni en la opción sandinista a la que sólo en apariencia tiende a asimilarse, ni a la del antisandinismo a la que menos se parece, pero a la que más responde en el largo plazo.

¿Cuál es esa opción gubernamental?: formular ajustes técnicos con el mínimo de referencias al efecto que ellos producen en el cambio del régimen anterior. Es una estrategia de pacificación parecida a la versión técnica ya anotada y muy cercana, en apariencia, a la opción integral de los sandinistas, pues reduce y aísla sus acciones de pacificación del conflicto político, con la esperanza de que los actores confrontados disminuyan sus presiones y reduzcan sus pretensiones de poder.

Esta opción gubernamental se acompaña de una política sutil de deflación del poder anterior por medio de la reducción concertada del presupuesto de gastos militares y de fijación de compensaciones monetarias a los militares desmovilizados, sea cual fuere su fuerza combatiente. No se discute la legitimidad de los militares,

de uno u otro bando, ni se cuestiona la vigencia de sus respectivos valores políticos. Simplemente se les ignora y se les atribuye, en el mejor de los casos, una voluntad de reconciliación hacia el futuro. La política es colocada fuera de los valores gubernamentales. La presidenta Chamorro llegó a declarar: "Me repugnan los partidos políticos. Lo único que profeso es la religión católica."<sup>23</sup> El gobierno asume la tarea de administrar la paz pero estar alejado de la realidad del poder, confiando en que esa distancia le restituirá la confianza de los actores confrontados. La mejor expresión de ello es la frase frecuente de la presidenta Chamorro: "Yo soy la que mando." Es la ilusión de gobernar por encima de la realidad para convertir la ilusión en realidad. "Estoy tranquila y sonriente, y voy a mandar hasta 1996."<sup>24</sup> Es una visión en la que los problemas no parecen existir: "En Nicaragua, los militares están claramente subordinados al poder civil."<sup>25</sup>

Semejantes declaraciones contrastan con la realidad, pero sin sustituirla tienden a condicionarla. Esta estrategia gubernamental opera en un escenario de confusiones y debilidades de las organizaciones políticas tanto de la UNO como de los sandinistas<sup>26</sup> por lo que la pacificación puede conservarse en su esfera técnica, mientras el tiempo va desgastando la confrontación y promoviendo la recomposición de fuerzas políticas en una dirección lenta pero favorable a la estabilidad social y reactivación económica.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Declaración de la presidenta Chamorro, citado por *Barricada*, Managua, 25 de febrero, 1993, p. 5. Se atribuye al ministro de la presidencia, ingeniero Antonio Lacayo, la expresión: "Los partidos políticos me importan un comino, porque los puedo comprar." En conferencia de prensa del 26 de julio de 1993, negó haber usado esa expresión.

<sup>24</sup> Declaraciones a la prensa del viernes 19 de marzo de 1993. Citado por *El Nuevo Diario*, Managua, 20 de marzo de 1993, p. 1.

<sup>25</sup> Declaraciones de Antonio Lacayo, ministro de la presidencia. Citado en *El Nuevo Diario*, Managua, 29 de marzo de 1993, p. 1.

<sup>26</sup> La debilidad se expresa en el sandinismo, según lo declaran sus miembros, en dispersión, división interna y falta de iniciativa política. Véase editoriales y artículos publicados por el diario *Barricada* entre el 20 y 27 de marzo, fecha en que tuvo lugar la asamblea sandinista. Véase, especialmente, la página de opiniones de *Barricada* del 24 de marzo de 1993, pp. 6 y 13.

<sup>27</sup> La discusión cada vez más frecuente en las esferas políticas es como armar un diálogo entre el gobierno y la UNO, entre el gobierno y el sandinismo y entre las

Serán más bien los desalzados y militares retirados (“recontras y recompas”) los que impondrán, unas veces como amenazas y otras como hechos, un ritmo de contraparte a la estrategia gubernamental.<sup>28</sup> En el análisis de la política de pacificación aplicada por el gobierno de Violeta Chamorro debe tomarse en consideración la importancia que en ella tienen los incentivos internacionales. La presión externa, especialmente estadounidense, sustituye la escasa capacidad del gobierno para imponer su propio ritmo a la pacificación. La suspensión de la ayuda es el mecanismo más frecuente para forzar los ritmos de la pacificación nicaragüense. La más reciente es la disposición del Senado de Estados Unidos de suspender la ayuda hasta que Nicaragua logre subordinar los militares al poder civil.

Antes de seguir precisando esa política es conveniente hacer algunas anotaciones sobre cómo se promueve la pacificación desde el exterior.

---

tres. El FSLN respalda un diálogo nacional incondicional que involucre a todos los sectores políticos y empresariales del país. Véase Dirección Nacional del FSLN, citado por *Barricada* el 24 de marzo de 1993, así como declaraciones de dirigentes sandinistas en ese diario, en la misma fecha, p. 6. La UNO respalda un diálogo nacional sólo después de haber realizado un diálogo directo con la presidenta Chamorro. Durante varios meses se intentó éste sin éxito. El repunte de violencia en el mes de octubre de 1993 apresuró la realización de algunos encuentros bilaterales gobierno-UNO, pero fracasaron.

<sup>28</sup> La persistencia de actividades militares en algunas regiones del país debe verse como un sistema de presiones para acelerar la pacificación conforme intereses faccionales. Los grupos llamados “recontras” están integrados por exmiembros de la oposición armada que se habían desarmado previamente y que frente a la lentitud en el cumplimiento de las promesas gubernamentales decidieron rearmarse. A su vez los “recompas” están integrados por oficiales y soldados retirados del ejército sandinista y que deciden rearmarse con el mismo argumento de que el gobierno ha incumplido sus promesas. Ambas presiones militares, sumadas a protestas diversas de los excontras y exsandinistas en organizaciones sociales diversas (sindicatos, asociación de lisiados de guerra, familiares de desaparecidos, etc.), condicionan el ritmo de la pacificación implementada por el gobierno.

## LOS INCENTIVOS INTERNACIONALES DE LA PACIFICACIÓN EN NICARAGUA

El sandinismo optó por la inserción de su proyecto revolucionario con su futuro socialista. No importa cuál haya sido el argumento, el hecho es que colocó su “retaguardia estratégica en el campo socialista”.<sup>29</sup> Armas, asesores y discurso político, se juntaron de un lado de la guerra fría. A partir de 1985 y de manera muy clara a partir de 1987, el sandinismo perdió su retaguardia estratégica. La Unión Soviética empezaba a ceder frente a Estados Unidos y a enfrentar el fin de la contienda este-oeste.

Adicionalmente a la pérdida de sus principales abastecedores de armas, los sandinistas perdieron su “norte ideológico” que inspiró tanto su estructura y desarrollo, así como sus programas de formación.<sup>30</sup>

En todo caso el fin de la “guerra fría” alentó una acelerada tendencia de pacificación negociada en las zonas de conflicto de África y Medio Oriente. Nicaragua no estaba ajena a esa tendencia que era estimulada por enormes esfuerzos diplomáticos en ámbitos internacional y regional.<sup>31</sup>

El pronto desarrollo de una alternativa de pacificación para Nicaragua, inducida por países aliados de Estados Unidos pero favorables a una transacción con los sandinistas, facilitó la negociación entre éstos y sus opositores armados; estas expectativas se cumplieron con el Acuerdo de Sapoá, de 1988.

Las reuniones de presidentes de Centroamérica, desde Esquipulas en 1987 hasta Guatemala en 1993, han servido como un foro en favor de la paz y un escenario de negociaciones para alcanzar el fin de los conflictos y afianzar las instituciones democráticas en la región.

Socializados en el concepto de negociación durante una constante labor de promoción externa, los países centroamericanos

<sup>29</sup> Véase el análisis de Luis Humberto Guzmán, *Fuerzas armadas sandinistas: un balance de su poder político*, Managua, 1992, p. 15.

<sup>30</sup> *Idem.*

<sup>31</sup> El Grupo Contadora y luego el esfuerzo colectivo de los presidentes en Esquipulas alcanzaron un elevado nivel de organización para proponer la paz en Centroamérica. Véase a René Herrera, *El proceso de democratización en Nicaragua*, North-South Center, Universidad de Miami, 1993 (en prensa).

podieron precisar sus intereses nacionales y, al mismo tiempo, aprendieron a colocarlos en el plano de la pacificación de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Otros incentivos que propiciaron el fin de la “guerra fría” y la organización de los países centroamericanos así como para respaldar la promoción pacificadora de los países latinoamericanos reunidos en el Grupo Contadora, Grupo de Río y otras instancias no gubernamentales, derivaron de una corriente mundial por la democracia y la economía de mercado.

La emergencia de un nuevo contexto ideológico internacional favorable a la transición negociada hacia la democracia, alcanzó a permear a los movimientos radicales de izquierda, creando en ellos divisiones respecto de cómo enfrentar el futuro de la acción política contestataria. La rápida y ordenada retirada inicial de los gobiernos socialistas en Europa Oriental y los posteriores fracasos del proceso reformista en la otrora Unión Soviética, marcaron la ruta que habría de seguir el movimiento mundial por el socialismo y la revolución.

En América Latina las organizaciones de izquierda iniciaron un rápido replanteamiento de sus postulados políticos y de sus estrategias de lucha revolucionaria. Esas fuerzas estaban obligadas a elaborar una estrategia de acomodados en los países sudamericanos en que el autoritarismo militar fue relegado; tomaron distancia de los movimientos radicales de Nicaragua, El Salvador, Cuba y Perú.<sup>32</sup>

Puesta en entredicho su retaguardia estratégica, aislados en su entorno ideológico y presionados por fuerzas contrarias, los sandinistas se fueron quedando sin más opción que la transición pacífica del poder.

Cuando se mencionan los incentivos para la pacificación en Nicaragua, debe anotarse que formaron parte importante de ellos, los constantes estímulos norteamericanos a un arreglo negociado, como alternativa a la continuación de la ayuda a los contrarios del sandinismo. Las incesantes declaraciones de aprobar o suspender la ayuda a la contra, servían, al final de cuentas, como un incentivo

<sup>32</sup> Véase la discusión sobre la situación de las organizaciones latinoamericanas de izquierda en Jorge Castañeda, *La utopía desarmada*, México, Joaquín Mortiz, 1993.

a la paz negociada que ofrecían sus aliados latinoamericanos en Contadora y en Esquipulas.

Otro incentivo internacional a la pacificación del país estuvo en la constante oferta de ayuda de países y organismos para proporcionar respaldo técnico y financiero a un procedimiento de paz. Canadá, Italia, Holanda, Suecia, España y Japón ofrecieron asesores y dinero; las Naciones Unidas, la OEA, el Banco Mundial ofrecieron sus estructuras ya establecidas para organizar, verificar y financiar acuerdos de desarme. Así, diplomacia negociadora y organización para el desarme y su verificación con sus respectivos apoyos financieros crearon un ambiente favorable a la pacificación.

Todos estos apoyos internacionales a la solución negociada de los conflictos colocaron a la solución pacificadora, primero en una contienda electoral y supervigilada y luego en un proceso ordenado de desarme y desmilitarización de la sociedad.

Sorpresiva o no, la derrota electoral del sandinismo refrendó la legitimidad de sus contrarios para incorporar sus valores e intereses en el sistema político nicaragüense. Como señalamos en el primer capítulo, la hegemonía sandinista había llegado a su fin cuando decidieron negociar con la contra.<sup>33</sup>

Una nueva batalla, ahora política, se iniciaba en 1990: pacificar y desandinizar el país, esto debía lograrse con la participación de los mismos sandinistas como una fórmula de reconciliación.

¿Se aplicaron los mismos incentivos para la negociación de la guerra en 1988, que para la pacificación y la reconciliación desde 1990? No exactamente. La negociación que se impulsó en esos años, sufrió dos modificaciones circunstanciales que se volvieron sustanciales en 1990: la derrota electoral del sandinismo y la desaparición de la Unión Soviética.

Ambas modificaciones permitieron que los incentivos externos a la pacificación fuesen revestidos con más énfasis en la desandinización rápida del país que en la simple supresión de las

<sup>33</sup> Las negociaciones de Sapoá y Managua reconocen la legitimidad de sus contrarios para competir por el poder y les concede la capacidad de definir conjuntamente los términos de las elecciones de 1990. Véase Gilles Bataillon, "Elections au Nicaragua: réaménagement du système des concurrents pour le pouvoir", en *Problèmes de Amérique Latine*, núm. 2, julio-septiembre, 1991, p. 1.

amenazas sandinistas: el terrorismo internacional, clientelismo soviético en forma de bases militares, instalaciones navales, formación de oficiales y entrenamiento de tropas.<sup>34</sup>

Los cambios internacionales y los resultados electorales forzaron la revaloración del significado de las elecciones y sus resultados, ya no como un refrendo a la negociación de 1987-1990, que liberalizaba al régimen sandinista, sino como un voto decisivo para fundamentar el cambio de régimen político. Para los sandinistas, lo anterior significaba una presión especial a los términos de la entrega del poder al nuevo gobierno de Violeta Chamorro, que el sandinismo no podía responder con eficacia. Los apuros del régimen derrotado por colocar, entre febrero y abril de 1990, múltiples “candados” legislativos a sus acciones políticas previas, privilegiaron la defensa de intereses personales,<sup>35</sup> y colocaron en un plano de vulnerabilidad a las instituciones que más creían dejar protegidas. El caso más notable de esto último fue la emisión del Decreto-Ley de Organización Militar, conforme al cual todo el poder sandinista quedaba concretado en las manos de Humberto Ortega, como jefe de un ejército autónomo sin ninguna subordinación al poder civil.

Al privilegiar cuestiones de poder militar y apropiación de bienes ajenos, los sandinistas facilitaron a la oposición local e internacional un blanco fácil, especialmente porque el país estaba hundido en una crisis económica general. La inflación había alcanzado la exorbitante tasa de 55 000%;<sup>36</sup> las exportaciones totales del país disminuyeron a 230 millones de dólares, sólo un

<sup>34</sup> Amenazas que en la percepción estadounidense debían removerse a cambio de retirar sus presiones sobre el sandinismo. Desaparecida la Unión Soviética, el declive de negociación de la insurgencia guerrillera apoyada por el sandinismo en El Salvador y controladas las tendencias terroristas con origen en el Medio Oriente, la prioridad cambió. “El Ejército Popular Sandinista ha dejado de ser una amenaza”, afirmación de un coronel del ejército de Estados Unidos, citado por Luis Humberto Guzmán, *op. cit.*, p. 25.

<sup>35</sup> Posterior a la derrota electoral y antes de entregar el gobierno a Violeta Chamorro, el gobierno de Daniel Ortega emitió una serie de decretos-ley destinados a proteger las apropiaciones de bienes materiales adquiridos indebidamente por sus seguidores. De esos decretos son especialmente conocidos los de “La Piñata” (Ley 85 y Ley 86, véanse textos en Xóchitl Lara y René Herrera, *op. cit.*).

<sup>36</sup> En 1990 había disminuido a 13 500 por ciento.

tercio de lo que eran un año antes de la revolución de 1979; la deuda externa se incrementó a 10 mil millones de dólares, comparada con los 2 mil millones de dólares en la época de Somoza.<sup>37</sup> En términos sociales la población vivía una desesperanza total: “Los ríos de leche y miel” ofrecidos por la revolución —diría después el cardenal Obando y Bravo— no aparecían por ningún lado y más bien “lo que ocurrió fue que los bosques se acabaran y los ríos se secaran”.<sup>38</sup> Pedir paz era un camino fácil y seguro, no concederla significaba una conducta irresponsable y costosa, pero concederla pasaba para los sandinistas, por el riesgo de una renuncia del poder. Las presiones internacionales después de la derrota electoral de 1990 fueron creciendo en la medida en que el gobierno de Chamorro demostró que no era capaz de presionar por sí mismo al sandinismo para un proceso de pacificación rápido.

#### LA PACIFICACIÓN LIMITADA: LAS TAREAS GUBERNAMENTALES DESDE 1990 HASTA 1993

El programa de pacificación gubernamental sigue tres caminos complementarios: *a)* desarme de la resistencia, *b)* reducción del ejército sandinista y *c)* concertación para definir las políticas económicas y sociales durante el periodo de pacificación.

Estos tres caminos corren por un escenario político y jurídico *sui generis*: ni la coalición que apoyó a Chamorro ni al sandinismo, tienen la mayoría suficiente en el Congreso nacional para reformar la Constitución. En virtud de que los sandinistas consideran que la Carta Magna que ellos redactaron no debe ser reformada y que tienen la minoría suficiente para bloquear todo intento reformista, la pacificación debe lograrse sin el respaldo de reformas constitucionales que la hagan firme. Las acciones de pacificación tienen que darse en medio de una incertidumbre jurídica que las vuelve tortuosas y lentas y muchas veces contradictorias e inútiles.

<sup>37</sup> El PIB durante ocho años consecutivos en el sandinismo.

<sup>38</sup> Cardenal Miguel Obando y Bravo en su homilía dominical del 18 de abril de 1993, citada por *Barricada*, Managua, 19 de abril de 1993, p. 5.

Los sandinistas comprenden que la pacificación conduce a su desmovilización y por eso la resisten por todos los medios a su alcance, especialmente al bloquear las reformas constitucionales; los antisandinistas también saben que la pacificación conduce a la desaparición de la estructura del sandinismo y procuran exigir los cambios constitucionales, vinculando su desmovilización y desarme a la realización de las reformas. La debilidad del gobierno, como poder ejecutivo y la de su coalición como mayoría en el Congreso, propicia que el desarme de la contra y la reducción del ejército —como la concertación con fuerzas sociales organizadas para la fijación de la política económica y social—, sean objeto de la manipulación y de forcejeo de las cúpulas dirigentes fuera del terreno jurídico; éste representa un fenómeno en el que el gobierno queda constantemente entrampado y da muestra de una extraordinaria impotencia.

Esta condición se reproduce en las formas y contenidos de las acciones de pacificación, que muestran siempre ser obras inconclusas. La pacificación, sin sustento jurídico constitucional, se vuelve fuente de una constante de violencia e impunidad. Quizá por ello el Estado deba ser sustancialmente presionado desde el exterior y así justifique sus medidas.

La alternativa gubernamental ha consistido en permanecer en un estado de negociación; esta situación significa acomodos entre fuerzas contrarias que nunca terminan de asumir como válido lo que han pactado en la negociación anterior. En virtud de que cada minipacto no es incorporado en la Constitución, puede ser constantemente negado o considerado insuficiente. En esas circunstancias ocurre un desgaste apresurado de la confianza en el gobierno y sus medidas de pacificación.

La pronta reaparición del conflicto armado con la participación de “recontras” y “recompas” y luego de “revueltos”, sirve de presión sustitutiva de la actividad propiamente política en la Asamblea Nacional o en el seno de las organizaciones partidarias. En ese contexto resultan más importantes los secuestros, asaltos o tomas de ciudades, que las propuestas políticas.

La integración del gobierno con miembros disidentes del sandinismo y tecnócratas ajenos a la coalición opositora, fomenta la insensibilidad gubernamental a los problemas sociales derivados de las acciones de pacificación.

Es importante mencionar lo anterior para facilitar el entendimiento de lo que ha ocurrido en esos tres años. Haremos un recuento de cada una de estas opciones durante el periodo que ha gobernado Violeta Chamorro; luego veremos el tema básico de la recomposición de las fuerzas políticas en el futuro inmediato.

#### LA DESMOVILIZACIÓN Y EL DESARME DE LA RESISTENCIA NICARAGÜENSE

Aunque seamos reiterativos, debemos señalar que es imposible atender las elecciones de 1990 sin que se observen las negociaciones entre la contra y el sandinismo en Sapoá en 1988 y las que se efectuaron entre los gobiernos centroamericanos, desde Esquipulas hasta 1989.

Ambas concertaciones se conducen bajo el supuesto de que el fin de la guerra y la posterior desmovilización y desarme de la contra tendrían una contrapartida: elecciones libres y democratización interna. En consecuencia, la óptica de desmovilización y desarme de la contra encierra en sí misma la liberalización del sandinismo.

El fin de la Unión Soviética y la derrota sandinista modifican el cuadro de la situación después de 1990. Las circunstancias cambiaron y ahora se apoya la desaparición de las estructuras sandinistas. El gobierno de Chamorro optó, sin embargo, por una política de negociar la liberalización más que el desmantelamiento del régimen.

Es muy importante, al menos para nuestro análisis, distinguir esta situación para entender la política de Chamorro en relación con la desmovilización de la contra.

Este proceso de la contra tiene sus antecedentes cuando los presidentes centroamericanos reunidos en Tela, Honduras, firmaron el 7 de agosto de 1989 el compromiso denominado Acuerdo de Tela, considerado como un momento decisivo en el proceso de desmovilización y desarme de la contra. En tal acuerdo se fija un calendario de desmovilización —cuatro meses— que vencería el 8 de diciembre del mismo año. A cambio de ello, los sandinistas se comprometían a realizar elecciones libres y bajo supervisión internacional, y a una serie de reformas destinadas a iniciar un proceso político. En pocas palabras, el Acuerdo de Tela confirma que la

desmovilización ocurrirá a cambio de la apertura política en Nicaragua.

“El fin de la contra”, tituló a su informe sobre el Acuerdo de Tela el diario español *El País*, indicando que el acuerdo representa también el nacimiento de la reforma política y el establecimiento de las bases para una apertura democrática en Nicaragua.<sup>39</sup> *The New York Times*, menos sutil, tituló a su informe periodístico “La contra: ¿una causa perdida?”<sup>40</sup> En ambas versiones quedaba claro que la contra representaba el medio de presión para el cambio político. No sólo impedía la consolidación del régimen sandinista, por la vía militar, sino que le forzaba a asimilar el cambio político en la misma dirección de los otros países centroamericanos. La desmovilización de la oposición armada constituía, entonces, el punto de partida para la desmovilización del proyecto socialista de los sandinistas y de los otros proyectos similares de la región, particularmente de las guerrillas salvadoreñas.<sup>41</sup>

Para los sandinistas, haber firmado el Acuerdo de Tela, representaba un severo golpe político que trataron de revertir poniendo intempestivamente fin al cese de fuego acordado con la contra. Esa decisión aplicada el 2 de noviembre, un mes antes de la fecha indicada en Tela, representaba un esfuerzo desesperado de los sandinistas por obtener la desmovilización acelerada de la contra, argumentando que ello debía ocurrir conforme a los acuerdos: el 8 de diciembre de 1989. Los presidentes centroamericanos reaccionaron con rapidez a la decisión sandinista acusándolos de no ajustarse a lo acordado: “Ortega pone en peligro el proceso de paz al suspender el cese al fuego y retrasa la desmovilización de la contra”, declararon los presidentes.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> *El País*, Madrid, 9 de agosto de 1989, p. 8.

<sup>40</sup> “The Contras: Lost Cause?”, en *The New York Times*, 10 de agosto de 1989, pp. 1 y 4.

<sup>41</sup> Andres Oppenheimer escribió en su editorial del *Miami Herald*, titulado “Pact Could Finish Contras” del 8 de agosto de 1989, p. 1A, que en Tela se acordaba algo más que la desmovilización de la contra, pues se daba también un mensaje claro de desistimiento de la lucha armada para la guerrilla salvadoreña, refrendando con ello la posición del presidente de El Salvador respecto de las estrechas relaciones entre el sandinismo y la guerrilla salvadoreña.

<sup>42</sup> Véanse las declaraciones de los presidentes Azcona, Arias, Cerezo y Cristiani en el *Nuevo Herald*, Miami, 2 de noviembre de 1989, p. 10A; también en *The New York Times*, del 3 de noviembre de 1989, p. 4.

En este sentido, según la resistencia los sandinistas proporcionaron un argumento que favorecía el retraso de su desmovilización; en consecuencia, declararon que si no se restablecía el cese al fuego no negociarían su desmovilización.<sup>43</sup>

El endurecimiento de los sandinistas fue aprovechado por la resistencia para declarar que si no había medidas concretas del gobierno sandinista para establecer las libertades democráticas en el país, no habría desmovilización de sus fuerzas, reafirmando las posiciones de su dirigente Enrique Bermúdez, expuestas días antes a la prensa estadounidense.<sup>44</sup> El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras respaldaría esas declaraciones señalando que “las Fuerzas Armadas de Honduras no se acostumbraban todavía a la idea de un vecino marxista”.<sup>45</sup>

Los Acuerdos de Tela parecían resolver, de manera anticipada, las preocupaciones de unos y otros, pero al final del plazo, el 8 de diciembre, los hechos demostraban que no habría desmovilización de la contra antes de la celebración de las elecciones generales en Nicaragua. El 12 de diciembre, los presidentes volvieron a reunirse en Costa Rica para firmar un nuevo acuerdo en el que la desmovilización de la contra no sólo constituía un compromiso que debía cumplirse en los seis meses siguientes, sino que también debía darse al mismo tiempo de la desmovilización de la guerrilla salvadoreña.<sup>46</sup> El nuevo plazo dejaba como prioridad la confirmación de un proceso electoral abierto y competitivo en Nicaragua, fijado para el 25 de febrero de 1990.

<sup>43</sup> Véase el *Nuevo Herald* del 14 de noviembre de 1989, p. 4A.

<sup>44</sup> Enrique Bermúdez, “La Resistencia lista para negociar su rechazo a la desmovilización”, en *Nuevo Herald*, Miami, 14 de octubre de 1989, p. 28.

<sup>45</sup> Citado en el *Nuevo Herald*, Miami, 2 de noviembre de 1989, p. 10A.

<sup>46</sup> El desplazamiento en el interés del tema sobre la desmovilización hacia la realización de elecciones libres en Nicaragua, significó para los sandinistas un reto mayúsculo: o son libres o no hay fin de la contra. Y si la contra se acaba ¿por qué no también la guerrilla salvadoreña? La prensa internacional dio relevancia a ese hecho al anotar que el gobierno salvadoreño había logrado una victoria contundente sobre el sandinismo al establecer una simetría entre ambos movimientos, la contra y el FMLN. Véase *La Nación*, de Costa Rica del 13 de diciembre de 1989, p. 5A; también el *Christian Science Monitor* del mismo día, p. 3; el *Nuevo Herald*, Miami, del 14 de diciembre, p. 4A y del 17 de diciembre, p. 1A.

En esa circunstancia, la contra podía establecer con mayor confianza que la democracia era primero que su desmovilización: de la promesa de elecciones a la prueba de sus resultados. Las Naciones Unidas se movieron en la dirección de las elecciones y mediante la designación de la comisión de Observadores de Naciones Unidas para Verificar las Elecciones en Nicaragua (ONUVE), todo el ambiente político centroamericano quedó girando alrededor de lo que sucedería en las elecciones, más que en la desmovilización de la contra.

En Nicaragua, la campaña electoral tomó fuerza en favor de la oposición al sandinismo. La contra, sin desmovilizarse e intacta en sus bases de Honduras y Nicaragua, pudo trasladar su posición política a la Unión Nacional Opositora (UNO) y su candidata Violeta Chamorro. Pero el sentido político de ello era más significativo de lo que se pensaba con el retraso de la desmovilización, pues si la oposición ganaba las elecciones el problema de la desmovilización quedaba sujeto ya no a la competencia electoral sino a una nueva circunstancia, mucho más complicada: desmovilización de la contra a cambio de desmovilización del sandinismo. Los acontecimientos en los países del Este dejaban a los sandinistas en una situación cada vez más difícil.

La oposición ganó las elecciones pero no la mayoría suficiente para remover las estructuras sandinistas: “viviremos en un estado permanente de negociación pues nos faltan tres votos para lograr el 60% necesario para hacer reformas a la Constitución que nos dejaron los sandinistas.”<sup>47</sup>

La presidenta Chamorro tendrá que escuchar más a los sandinistas que a sus aliados de la UNO, si quiere lograr sus propósitos de transición, señaló un analista estadounidense desde Managua.<sup>48</sup>

En efecto, desde el día de las elecciones hasta la toma de posesión, el 25 de abril, el país vivió en la incertidumbre. Una presidenta electa por mayoría popular frente a dos ejércitos que

<sup>47</sup> Declaraciones a la prensa estadounidense por líderes de la UNO. Véase el *Miami Herald*, del 4 de marzo de 1990, p. 8A.

<sup>48</sup> Brook Larmer, “Sandinistas Ponder Opposition Role”, en el *Christian Science Monitor*, del 2 de marzo de 1990, p. 3.

definirían su destino en el novedoso terreno de la competencia política.

Entregaremos el gobierno, declaró Daniel Ortega, pero la contra debe desmovilizarse antes de que ocurra el cambio de gobierno.<sup>49</sup>

La victoria de Violeta Chamorro es un triunfo de la resistencia. “Nos desmovilizaremos siempre y cuando también ocurra una desmovilización del ejército sandinista y sus tropas del Ministerio del Interior”, declararon los líderes de la contra.<sup>50</sup>

La desmovilización de la resistencia es un ingrediente necesario para la transición del mando, declaró la dirigencia de la UNO, preocupada por la situación.<sup>51</sup>

Para los observadores la contra estaba haciendo uso de una influencia política que no había tenido durante la guerra; consistía en una posición de fuerza adquirida desde las negociaciones para poner fin al conflicto bélico y refrendada por los resultados electorales.<sup>52</sup>

La presidenta electa Violeta Chamorro envió una delegación a Honduras para lograr una negociación que le permitiera el anuncio de la desmovilización antes de concluir sus propias negociaciones con los sandinistas para la entrega del gobierno. La delegación llegó acompañada por el cardenal Miguel Obando y Bravo y celebraron el Acuerdo de Toncontín del 23 de marzo, con éste la resistencia se desmovilizaría a más tardar el 20 de abril, cinco días antes del cambio de gobierno.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> Véase declaraciones de Ortega y otros líderes sandinistas, citadas en *Los Angeles Times*, del 27 de febrero de 1990, p. 1A.

<sup>50</sup> Véase declaraciones en el *Washington Post*, del 9 de marzo de 1990, p. 28A.

<sup>51</sup> Dirigentes de la UNO viajaron a Honduras para solicitar a la dirigencia de la resistencia de que hicieran un anuncio formal de compromiso de su inmediata desmovilización para quitar pretextos al sandinismo. Véase declaraciones en el *Miami Herald*, del 2 de marzo de 1990, p. 1A.

<sup>52</sup> Véase un comentario al respecto en el *Nuevo Herald*, Miami, 2 de marzo de 1990, p. 1A.

<sup>53</sup> Las tropas de la contra asentadas en bases dentro de Honduras ingresarían a territorio nicaragüense en zonas de seguridad; en ese lugar entregarían sus armas a las Naciones Unidas. A cambio de ello la contra obtuvo la promesa de la presidenta que de inmediato anunciaría también la reducción del ejército sandinista.

El Acuerdo de Toncontín era preciso en la fecha, pero no en los términos para la desmovilización de sus tropas que ya estaban dentro de territorio nicaragüense, sino solamente sus tropas en bases dentro de Honduras. El número de combatientes dentro de Nicaragua era desconocido, pero los sandinistas insistían en que la contra había infiltrado varios miles de sus tropas en territorio nicaragüense antes de firmar el Acuerdo de Toncontín.

Para alentar el proceso de desmovilización las Naciones Unidas anunciaron en los primeros días de abril que ya estaban listas para iniciar la verificación del ingreso de 12 mil tropas de la contra en las cinco zonas de seguridad previamente establecidas. Con ese fin el jefe militar de la ONUCA, el español Agustín Quezada, presentó ante la prensa los primeros 170 soldados de 700 que había ofrecido el gobierno de Venezuela para cumplir con las disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<sup>54</sup>

La dirigencia de la resistencia informó que el proceso de desmovilización tenía dificultades, porque las tropas sandinistas estaban atacando a sus hombres dentro del territorio nacional. “Es imposible que podamos cumplir con el plazo establecido en Toncontín, debemos renegociar sus términos e involucrar en ellos al propio sandinismo para garantizar el respeto a la integridad de las tropas”, declaró la resistencia. El 18 de abril, dos días antes del plazo de desmovilización, la contra renegó con el gobierno electo de Violeta Chamorro y el todavía gobierno de Daniel Ortega, un nuevo plazo. Conforme a ese acuerdo de Managua, del 18 de abril, la desmovilización se concluiría el 10 de junio.<sup>55</sup> Lo novedoso del acuerdo consistía en que el gobierno de Violeta Chamorro, se comprometía, apenas tomara posesión, a hacer un anuncio del plan de reducción del ejército sandinista. La contrapartida se anunciaría después: el general Humberto Ortega quedaría como jefe del ejército durante el periodo de pacificación. Conmoción y asombro en la contra y en la UNO, dijeron los diarios.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Véase declaraciones de Agustín Quezada, jefe militar de las tropas de la ONUCA, en *El Herald*, de Tegucigalpa, 11 de abril de 1990, p. 2.

<sup>55</sup> Texto del Acuerdo de Alto al Fuego y Desmovilización, reproducido en *Diario de Las Américas*, Miami, 21 de abril de 1990, p. 6A.

<sup>56</sup> Un recuento de las reacciones a la decisión del nombramiento de Ortega se encuentra en *Christian Science Monitor*, del 25 y 27 de abril de 1990.

La Comunidad Económica Europea anunció que asignaría 23 millones de dólares para apoyar la desmovilización; Estados Unidos anunció la suma de 30 millones de dólares para el mismo fin, asignándolos a las Naciones Unidas y a la OEA, por medio de la ONUCA y la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV).<sup>57</sup>

Como reacción al nombramiento de Ortega, la resistencia insistió en renegociar los términos de su desmovilización; con ese motivo firmó, el 30 de mayo, un nuevo acuerdo conocido como Protocolo de Managua sobre Desarme y el 15 de junio, la presidenta Chamorro anunció su Plan General de Reducción del Ejército Popular Sandinista, su Declaración sobre Desarme y la Reconciliación y el Plan Nacional de Recogida de Armas en manos de civiles.<sup>58</sup>

En una ceremonia pública el 27 de junio de 1990, la presidenta recibió del comandante en jefe de la contra, Israel Galeano ("Franklin"), el fusil que simbólicamente marcaba el fin de la guerra.<sup>59</sup> Días antes François Guliani, vocero de las Naciones Unidas, había declarado que hasta el 15 de junio se habían desarmado 13 782 contras.<sup>60</sup>

El primer capítulo de la desmovilización de la contra parecía haberse completado. ¿Pero cuántos contras eran y cuál era su objetivo? Las cifras varían según la fuente que las proporcione. Sin embargo, la cantidad que, en general, se conoce es de 22 mil soldados contras y alrededor de 100 mil familiares (16 834 familias), por lo común acompañantes en los campos de refugiados fronterizos o en los lugares de origen de los combatientes.<sup>61</sup>

Los esfuerzos gubernamentales por lograr la reinserción en el país de los desmovilizados fueron respaldados por organismos

<sup>57</sup> *Los Angeles Times*, 6 de mayo de 1990, p. 1A.

<sup>58</sup> Véanse detalles en *La Prensa*, 15 y 16 de junio de 1990, p. 1.

<sup>59</sup> *Christian Science Monitor*, Boston, 29 de junio de 1990; el comandante "Franklin" murió en un accidente automovilístico dos años después.

<sup>60</sup> *Central America Report*, Guatemala, 22 de junio de 1990.

<sup>61</sup> El gobierno maneja la cifra de 22 mil soldados contras que implican 16 834 familias. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores, *El proceso de pacificación en Nicaragua*, 1993, p. 8. Otros manejan cifras diferentes: "50 mil contras y sus familias en el área fronteriza", en *Esta Semana*, vol. II, núm. 90, San José, agosto, 1990, p. 11; cifra parecida la proporciona el embajador de Estados Unidos en Honduras, Dimitri Negroponte a la prensa "entre 40 y 45 mil contras", citado en *INSEH News Brief*, vol. 3, núm. 25, Tegucigalpa, abril de 1990, p. 2.

internacionales. La primera versión de esos esfuerzos es la creación de polos de desarrollo para el asentamiento de los contras y sus familias. Aun cuando esta idea fue aceptada inicialmente por la contra, los combatientes desmovilizados buscaron retornar a sus comunidades de origen. Con el fin de mantenerlos concentrados, el gobierno propuso después los proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI) pero tampoco funcionaron con éxito. Luego se intentó el reparto de tierras de acuerdo con la dispersión en la reubicación de los desmovilizados siguiendo un esquema de cuatro etapas: “Posdesmovilización” (junio-diciembre, 1990); “Verano” (enero-marzo, 1991); “Siembra de primavera” (abril-junio, 1991), y “Postrera y apante” (junio-noviembre, 1991). En septiembre de 1992 el gobierno anunció que había entregado a desmovilizados de la resistencia un total de 460 400 manzanas de tierra equivalentes a 16% del territorio nacional de El Salvador, beneficiando a 16 834 familias contras.<sup>62</sup>

El gobierno afirma haber gastado poco más de 45 millones de dólares en resolver el problema de la reinserción social y económica de los desmovilizados de la contra; esta cifra representaba algo más de 2 mil dólares para cada desmovilizado. Según el gobierno, si esta última cantidad se comparaba con los 350 dólares de ingreso per cápita anual de los nicaragüenses, resultaba considerable.<sup>63</sup>

En la realidad esa distribución de tierras ocurría en los mapas desplegados en los escritorios de los funcionarios del gobierno en la capital. Tierras que ya tenían dueño, ocupadas por sandinistas o, simplemente, inexistentes. “El problema de la tierra es eterno, la situación de los desmovilizados es explosiva”, declaró el ministro director del Instituto de Repatriación, doctor Roberto Ferrey, exmiembro del directorio de la contra y hombre clave en las negociaciones para poner fin a la guerra.<sup>64</sup>

A finales de 1990 la frustración crecía en las filas de los desmovilizados. El 16 de febrero de 1991 fue asesinado en Managua Enrique Bermúdez Varela, excomandante en jefe de la contra,

<sup>62</sup> *Minex, op. cit.*, p. 7.

<sup>63</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>64</sup> Citado en *The New York Times*, 29 de octubre de 1990, p. 3A. El funcionario fue removido del cargo y enviado como embajador a Chile.

con lo cual se confirmaba el inicio de una serie de asesinatos de importantes combatientes desmovilizados.<sup>65</sup>

Desconcertado, el gobierno procuró calmar a los rebeldes desmovilizados ofreciendo justicia en el caso del comandante Bermúdez y más ayuda y seguridad conforme un plan que sería anunciado dentro de unos meses. El 15 de abril de 1991 un grupo de excontras anunció su regreso a las armas; con este hecho surgieron los llamados “recontras”. Un mes más tarde las noticias sobre el rearme de la contra anunciaban el recrudecimiento de las acciones militares.<sup>66</sup>

El 9 de junio los recontras advirtieron a la presidenta Chamorro que si no desmovilizaba al ejército sandinista tendría lugar una nueva guerra en las montañas. El gobierno no respondió. La luna de miel había terminado. Días después los recontras atacaron San José de Bocay, Quilalí y Pantasma, poblados del norte del país.

“Son muchas las concesiones de Chamorro a los sandinistas”, advirtieron los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), al tiempo que la Unión Nacional Opositora (UNO) trató de revocar en el Congreso un par de leyes emitidas por los sandinistas para proteger la distribución de bienes inmuebles entre sus dirigentes. Defendiendo su “piñata” los 39 diputados sandinistas abandonaron la asamblea el 18 de junio. Días después el gobierno llamó a una negociación con la recontra logrando firmar, el 27 de junio de 1991, un acuerdo conforme al cual se constituiría la Comisión Nacional de Seguridad.

Demandando el cumplimiento de las promesas de tierra y seguridad el primer jefe de los recontras, comandante José Ángel Morán Flores, advirtió los peligros de una nueva guerra si la presidenta Chamorro no desarmaba a los sandinistas que mantenían el acoso sobre los desmovilizados de la resistencia.

La reaparición de combates en el norte del país propició que el ministro de Relaciones de Honduras escribiera una nota al jefe

<sup>65</sup> Para el mes de agosto de 1992 habían sido asesinados 120 combatientes de la contra y se habían cometido 1 400 violaciones a la seguridad de los desmovilizados, véase Informe de la CIAV-OEA, Managua, septiembre de 1992.

<sup>66</sup> Véase *Los Angeles Times*, p. 1A, 20 de mayo de 1991, *Miami Herald*, 20 de mayo, p. 8A.

de observadores de las Naciones Unidas en la que le insta a tomar medidas para evitar el reingreso a Honduras de los combatientes de la contra.<sup>67</sup>

El entendimiento entre el gobierno de Violeta Chamorro y la UNO prácticamente no había existido y la relación de aquélla con la contra se había terminado apenas un año después de las elecciones. Los sandinistas no toleraban la presencia de excontras que regresaban a sus comunidades de origen en las que, además, se habían instalado autoridades civiles de la UNO. Era un regreso victorioso, difícil de asimilar por las fuerzas militares sandinistas y sus seguidores. Lo anterior era evidente en el norte del país y en los departamentos de Chontales y Boaco, en donde la UNO había obtenido prácticamente todas las alcaldías.

Con distintos pretextos las fuerzas sandinistas hostigaban y provocaban a los excombatientes de la contra. El 11 de octubre de 1991 el ejército realizó un operativo impresionante para desarmar grupos contras en Chontales. "Es sólo para desarmarlos", declaró el portavoz del ejército sandinista.<sup>68</sup>

El gobierno anunció que dialogaría con los líderes recontras y el 17 de octubre se llegó a un acuerdo entre el ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, y el jefe de los recontras, comandante José Ángel Morán, para que estos últimos participaran en el desarme de civiles y la desmilitarización de las que fueron zonas de guerra, escenario de los acosos de los desmovilizados.<sup>69</sup> De ese acuerdo surge el grupo ejecutante de la Comisión Nacional de Seguridad, creada por similar negociación el 27 de junio de 1991: la Brigada Especial de Desarme (BED), instalada formalmente por la presidenta Chamorro en Matagalpa el 12 de noviembre de 1991. La BED se integraría con 600 excombatientes de la resistencia, y mayoritariamente por soldados del ejército sandinista.

<sup>67</sup> Texto de la carta del canciller Mario Carías al brigadier general Víctor S. Pardo, del 6 de agosto de 1991, reproducido en *El Heraldo* de Tegucigalpa, 7 de agosto de 1991, p. 4.

<sup>68</sup> Véase *La Prensa*, Managua, 12 de octubre de 1991, p. 1; *Nuevo Herald*, Miami, 12 de octubre de 1991, p. 3A.

<sup>69</sup> Véase *La Prensa*, Managua, 13 de octubre de 1991, p. 1; el *Miami Herald*, 17 de octubre de 1991, p. 6A.

Las primeras acciones de la BED estuvieron orientadas al desarme de civiles y rearmados, tanto de la resistencia como de los sandinistas, a nivel nacional.

Según el informe oficial, hasta el 31 de octubre de 1992 la BED recogió:

Fusiles	42 135
Ametralladoras	150
Morteros	126
Lanza-granadas	438
Minas de todo tipo	6 196
Cohetes	4 126
Municiones	6 623 390
Explosivos	4 855
Armas cortas	77
Radios militares	4

Sumados a las recogidas desde el 15 de junio de 1990, el total de armas de todo tipo requisadas en el país llegaba a 122 376.<sup>70</sup>

Uno tras otro los grupos recontras se fueron incorporando a los acuerdos con las autoridades sin que estas últimas pudieran, sin embargo, resolver los problemas de fondo. Lo anterior permitía que en la medida en que se llegaba a un acuerdo con un grupo, pasado un tiempo reaparecían otros grupos con nuevos jefes. En 1992 la CIAV-OEA informó que la violencia había adquirido niveles dramáticos con más muertes de connotación política entre excombatientes de la resistencia. Parecía que se trataba de una estrategia de aniquilamiento de líderes de la resistencia.

Humberto Ortega, jefe de los sandinistas y Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia, reaccionaron airados frente a los informes de la CIAV-OEA. Según Ortega, esta institución actuaba con parcialidad y amenazó con seguir “poniendo en su lugar a los irregulares”.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> *El proceso de pacificación en Nicaragua, op. cit.*, pp. 5 y 6.

<sup>71</sup> Véase *El Nuevo Diario*, Managua, 23 y 24 de febrero de 1993, p. 1.

Por su parte Lacayo declaró:

Algunos políticos opositores [refiriéndose a la UNO] al gobierno, quieren presentar las acciones de grupos de delincuentes como reivindicaciones políticas que ya fueron atendidas.<sup>72</sup>

Pero los argumentos de los recontras eran distintos:

Cuando todos nos desarmamos en 1990 no pensábamos volver a la montaña ni seguir sufriendo, queríamos trabajar. Pero el gobierno no ha cumplido sus promesas y por eso hemos regresado. Abajo no había confianza; los sandinistas han matado centenares de excomandos pero nadie da cuenta de ello y el gobierno se hace el que no ve. Para estar esperando que lo maten a uno, mejor volvimos a las armas.<sup>73</sup>

La Nueva Resistencia, como suelen llamarle al movimiento recontra, se integra con excombatientes más jóvenes. Están integrados, principalmente, en el Frente Norte 3-80 y sus edades oscilan entre los 13 y 22 años; sus líderes, también jóvenes, no exceden los 35 años de edad. Su número es desconocido; unos reportes mencionan dos mil hombres, otros 700 y los más conservadores hablan de 200. El hecho es que son suficientes para confirmar un estado de inconformidad entre la población que creyó que el fin de la guerra traería la tranquilidad y la reconciliación.

El desarme de los grupos recontras sigue una ruta irregular y contradictoria. Unas veces se presentan ante la CIAV-OEA y piden un diálogo para desarmarse; reciben a cambio una asignación de tierras, con la promesa de un título de propiedad; con frecuencia, el compromiso lo avalan funcionarios de gobierno. Cuando tratan de tomar posesión de las tierras se encuentran que éstas habían sido previamente asignadas a exsoldados sandinistas o a otro grupo de desmovilizados o simplemente el propietario original ha

<sup>72</sup> Declaraciones de Antonio Lacayo, reproducidas en *El Nuevo Diario*, 25 de febrero, 1993, p. 2.

<sup>73</sup> Declaraciones del comandante "Carlitos" a Ronald Matute, publicadas en el diario *La Nación*, de Costa Rica, quien lo entrevistó en Singalo, Quilalí, montañas del norte de Nicaragua, el 25 de febrero de 1993, p. 12.

presentado reclamo por la devolución de su tierra. En consecuencia el conflicto renace con rasgos de violencia armada, para luego intentar un nuevo desarme. Debido a lo anterior las noticias periódicas reflejan un estado de guerra y desarme sin fin. Para las autoridades del gobierno y del ejército, la desmovilización y rearme “se ha convertido en un negocio”.<sup>74</sup> La violencia es tan cotidiana que los encabezados de los diarios no cesan de mostrar un país en guerra: “Estelí, casi una ciudad en guerra”, titulaba la primera plana del diario *La Prensa*, el 26 de abril de 1993. “Se escuchan tambores de guerra”, afirmaba la Iglesia católica, al referirse al retorno del estado bélico en el norte y noreste del país, durante febrero de ese año.<sup>75</sup> En la medida en que la violencia aumentaba, las posibilidades de reactivación de la economía agropecuaria disminuían.

Sin capacidad para ordenar el proceso de titulación de tierras, el gobierno siguió mostrando que sólo la fuerza militar podría frenar la violencia. Pasadas las frías celebraciones del tercer aniversario de su gobierno, Violeta Chamorro anunció en mayo de 1993 que para esa situación emitiría un decreto de suspensión de garantías constitucionales en 14 municipios del norte. El 18 de mayo de 1993, en un claro retroceso democrático, el gobierno eligió sustentar su sobrevivencia en la fuerza militar, reafirmando la posición de Humberto Ortega, quien había declarado meses antes: “El peso de la ley caerá sobre los grupos armados que insistan en retomar las armas.”<sup>76</sup>

Existen al menos 1 200 hombres realzados en armas, quienes operan en grupos de 30 hombres o unidades más pequeñas.<sup>77</sup> Estos grupos siempre han presentado alguna connotación política.

Para el ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, esos grupos “son principalmente contras que quedaron como drogados después de la guerra y ahora se dedican a asaltar en las carreteras y robar ganado”.<sup>78</sup>

<sup>74</sup> *La Prensa*, 24 de abril de 1993, pp. 1 y 12.

<sup>75</sup> *La Prensa*, 24 de febrero de 1993, p. 3.

<sup>76</sup> *La Prensa*, 24 de febrero de 1993, p. 1.

<sup>77</sup> Informes oficiales del Ministerio de Gobernación citados por *La Prensa*, Managua, 22 de mayo de 1993, pp. 1 y 10.

<sup>78</sup> Citado por *Barricada*, 28 de marzo de 1993, p. 4.

El Frente Norte 3-80 es la principal agrupación de recontras y niega constantemente estar en el “negocio” de desmovilización-desarme-negociación de dinero-rearme. En una declaración emitida el 12 de junio de 1993, el jefe del FN-3-80 afirmó que sus hombres no se han desarmado:

Ni un solo hombre del FN se ha desalzado. Lo que está sucediendo es que hay elementos que se han estado rearmando recientemente para luego aparecer como desalzándose a nombre del FN 3-80... Es un juego, un robo al gobierno para que la opinión internacional crea que el FN 3-80 es el que está entregando las armas.<sup>79</sup>

Las exigencias para el desarme de los recontras han sido siempre el cumplimiento de las ofertas del gobierno: “Si nosotros entregamos las armas no habrá otra forma de que el gobierno cumpla con todo lo prometido. Ésa es la opinión del Consejo de Comandantes del FN 3-80.”<sup>80</sup>

En resumen, la desmovilización y desarme procurados por el gobierno sólo tuvieron éxito en una primera ronda. Los fracasos en la solución de los problemas de reinserción a la vida ciudadana, alentaron el rearme de los combatientes. A mediados de 1993 y pese a las informaciones oficiales de que las demandas han sido atendidas con oportunidad, todo indica que hay un notorio y peligroso repunte bélico en el país.

Desesperado, el gobierno ofreció amnistía a quienes se desarmaran antes del 31 de agosto de 1993 en zonas previamente determinadas.

### REDUCCIÓN DEL EJÉRCITO POPULAR SANDINISTA (EPS)

Vinculado estrechamente con la desmovilización de la contra, la reducción de efectivos del EPS ha sido un tema constantemente mencionado por el gobierno como uno de sus objetivos de pacifi-

<sup>79</sup> Declaraciones del comandante “Martín” del Frente Norte 3-80 al diario *La Prensa*, 12 de junio de 1993, p. 4.

<sup>80</sup> El Consejo de Comandantes está integrado por 24 jefes recontras, entre ellos “El Charrito”, “Northiel”, “Chacal”, “Esteban”, “El Gringo”, “Omar” y “Martín”, *idem*.

cación en el que ha tenido más éxito. El 15 de junio de 1990 la presidenta Chamorro anunció oficialmente el Plan General de Reducción del Ejército Popular Sandinista y Reestructuración en el marco de la nueva situación de paz y el balance razonable de fuerzas en el área centroamericana, aprobado en mayo de 1990. La versión oficial es que Nicaragua tiene hoy el ejército más pequeño de todo Centroamérica;<sup>81</sup> además de que el ejército no es un partido político, “ni el apéndice de partido político alguno, y por lo tanto, su estructura, organizaciones y mandos están subordinados al poder civil, ejercido por la presidenta Chamorro.”<sup>82</sup>

Como señalábamos en páginas anteriores ésta es una versión gubernamental que sin sustituir a la realidad pretende condicionarla. La Ley de Organización Militar contradice al discurso oficial: la designación del cargo de Jefe del Ejército es facultad exclusiva del Consejo Militar. El EPS en su organización, estructura, mandos y política de cuadros, está regido por su propia ley, dictada como Ley 75 del 27 de diciembre de 1989, publicada en la *Gaceta Diario Oficial* el 23 de febrero de 1990, dos días antes de las elecciones que ganó la oposición. La Ley 75 fue emitida por decreto del entonces presidente Daniel Ortega mientras se encontraba en receso la Asamblea Nacional.

El plan gubernamental respecto del EPS se concentra en respetar la autonomía militar y en cambio de ello, obtener:

- a) Reducción sustancial del EPS.
- b) Institucionalizar y profesionalizar el ejército.
- c) Negociar una nueva ley militar que garantice la subordinación de los militares al poder civil.

En el primer objetivo, el gobierno ha anunciado, en distintas ocasiones, que en enero de 1987 el EPS tenía 134 mil efectivos —entre oficiales, clases y soldados—; en 1989 pasaron a 98 mil; en

<sup>81</sup> Véase la gráfica 4, en Xóchitl Lara y René Herrera, *op. cit.*

<sup>82</sup> Citado en Ministerio de Relaciones Exteriores, *El proceso de pacificación en Nicaragua*, Managua, 1993, p. 26. Es una versión al parecer tomada de la declaración del ministro de la presidencia, Antonio Lacayo, “En Nicaragua los militares están claramente subordinados al poder civil”, *El Nuevo Diario*, Managua, 29 de marzo de 1993, p. 1.

enero de 1991 se había reducido a 28 mil y en noviembre de 1992 a 16 200; finalmente, en diciembre de 1992 eran 12 250 efectivos.<sup>83</sup>

A juicio del gobierno, el plan de reducción ha sido “sobrecumplido”. Este último incluyó a 11 382 oficiales, según el cuadro siguiente:

### Oficiales del EPS retirados

De mayor a coronel	124
Capitanes	453
Tenientes	6 668
Subtenientes	4 037
Total	11 382

No hay información de la proporción que estos militares ocupan respecto del total de oficiales del EPS. A cada oficial retirado se le pagó una indemnización de acuerdo con el escalafón de la milicia y años de servicio, para lo cual se contó con financiamiento exterior.<sup>84</sup> De acuerdo con las prácticas establecidas en el EPS, los retirados se conservan en disponibilidad bajo la fórmula de “Retiro activo” agremiados en la “Asociación de Militares en Retiro” (Amir), encubriendo así su vínculo orgánico con el EPS.<sup>85</sup> Una fórmula adicional fue la de permitirles la apropiación de bienes inmuebles, casas, fincas rurales y terrenos urbanos y muebles (incluyendo vehículos y máquinas de diverso tipo) pertenecientes a particulares y oficinas estatales en un hecho que públicamente se conoció como “la piñata”; en ésta también participaron funcionarios importantes del sandinismo y la alta oficialidad del ejército, la policía y la seguridad del Estado.

No hay evidencias escritas pero todo indica que el gobierno de Chamorro aceptó, durante la negociación del protocolo de transi-

<sup>83</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores, *El proceso de pacificación...*, op. cit., p. 31.

<sup>84</sup> Ministerio de Relaciones Exteriores, *El proceso de pacificación...*, op. cit., p. 29.

<sup>85</sup> Un exoficial de inteligencia que fue retirado del EPS informó que se le encomendaron tareas de liquidar contras conforme a la lista que le entregarían oportunamente.

ción, respetar al máximo las apropiaciones de inmuebles y muebles por parte de la alta dirigencia y la oficialidad del ejército.<sup>86</sup> La ruptura de la presidencia con la UNO se originó precisamente cuando ésta intentó modificar leyes sandinistas involucradas en el protocolo de transición. La presidenta vetó la ley sobre la propiedad aprobada por la Asamblea Nacional.

El gobierno apuntaló al ejército en sus planes de reducción de efectivos otorgando tierras a los retirados, especialmente oficiales. En la práctica lo que fomentó fue la toma de propiedades por parte de militares. “Las mejores tierras que nos dieron a los retirados del EPS están quedando en manos de altos militares”, declaró un grupo de la Amir.<sup>87</sup> Esta versión fue respaldada por el diario *Barricada* del frente sandinista, al señalar que se había desatado una “contrarreforma agraria”, gestada por militares y funcionarios sandinistas,<sup>88</sup> quienes no sólo se han convertido en grandes propietarios sino que han usado el crédito estatal y no lo han pagado. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), organización de los sandinistas, es mencionada como gestora de la contrarreforma y de la renovación de créditos a sus oficiales autodenominados medianos y pequeños productores. El presidente del Banco Nacional de Desarrollo respondió a la queja de la UNAG señalando que esos productores no pagaban sus créditos: “hay una lista de 40 mil productores que no pagaron”.<sup>89</sup>

Aunque el gobierno no lo puede decir, es un hecho que durante el proceso de reducción de efectivos militares se procura forzar un cambio cualitativo en la distribución de fuerzas de las tres facciones del sandinismo. La facción tercerista, encabezada por los hermanos Ortega, retuvo el ejército y colocó bajo sus estructuras las tropas y efectivos que pertenecían al sector de Tomás Borge. Aunque no hay números que indiquen cuántas de esas fuerzas quedaron intactas y cuántas más fueron desmovilizadas, es bien conocido que la subordinación al general Ortega ha producido serias fricciones con Tomás Borge. Los jefes de los recompas han

<sup>86</sup> Citado en *La Prensa*, 14 de abril de 1993, p. 1.

<sup>87</sup> Citado en *La Prensa*, 14 de abril de 1993, p. 1.

<sup>88</sup> *Barricada*, Managua, 17 de mayo de 1993, p. 5.

<sup>89</sup> Citado en *Barricada*, Managua, 17 de mayo de 1993, p. 11.

sido hombres cercanos a la facción de Borge y han provocado tensiones graves entre los militantes sandinistas de una u otra facción. La toma de la ciudad de Estelí por un jefe recompa conocido como “Pedrito el hondureño”, el 21 de julio de 1993, ha sido interpretada como la acción más significativa de las pugnas interfaccionales. “Se están peleando entre ellos”, es una frase común entre la población nicaragüense.

En el ámbito popular existe la idea de que las cifras oficiales de reducción del ejército no corresponden realmente a una desmilitarización del sandinismo, pues sus retirados se conservan activos, siguen armados y ejerciendo una influencia sobre la vida cotidiana del país. Sus sectores más radicales manejan su “retiro activo” por la vía de una organización paramilitar denominada Frente Punitivo de Izquierda (FPI), responsable de acciones terroristas y de asesinatos de personalidades antisandinistas. Su aparición pública se dio en 1992, cuando asesinaron al señor Arges Sequeira, presidente de la Asociación de Confiscados, el 23 de noviembre de 1992, en El Sauce, al occidente del país. El domingo 22 de febrero de 1993 el jefe de las FPI, excoronel del ejército sandinista, Frank Ibarra Silva, ofreció al diario francés *Le Monde* una entrevista, en las montañas de Jinotega, en el norte del país, que fue ampliamente difundida por televisión. Ibarra dijo que el plan original era secuestrar a Sequeira para que confesara que trabajaba para la embajada de Estados Unidos, pero que como era “un somocista violento, nuestros comandos tuvieron que matarlo”.<sup>90</sup>

El excoronel estuvo acompañado en la entrevista por sus dos principales lugartenientes, también exoficiales del ejército sandinista: Diego Javier Espinoza y Germán Lacayo.

“Las FPI es una organización adicional al FSLN a la que ahora tratan de dar carácter de clandestinidad. Han estado protegidos y ahora salen como guerrilleros para buscar una solución y evadir la justicia”, declaró el ingeniero Ramiro Gurdián, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).<sup>91</sup>

El general Ortega reaccionó airado ante las imágenes de la televisión que mostraban a su excolaborador y manifestó a la

<sup>90</sup> Citado en *La Prensa*, Managua, 24 de febrero de 1993, p. 1.

<sup>91</sup> *Ibidem*.

prensa que “vamos a combatir a los FPI al igual que lo estamos haciendo con los recontras y los recompas”.<sup>92</sup> Pero sus declaraciones reflejaban un conflicto más profundo: el FPI se había constituido cuando esos oficiales estaban dentro del ejército, bajo su propio mando: “Se conformaron en un momento en que el EPS bajó la guardia, cuando todos estábamos en la reducción del ejército.”<sup>93</sup> “Desaprobamos el método”, declaró Ortega, al tiempo que Sergio Ramírez exvicepresidente y diputado sandinista señaló que su partido, el FSLN, “no avala a las FPI”.<sup>94</sup> El FPI refleja el deterioro en las relaciones de fuerza de las tendencias del sandinismo. Su creación se atribuye a Tomás Borge, de la Dirección Nacional del FSLN, según lo dejó saber el periodista Carlos José Guadamuz, director de la radio sandinista “Ya”, afiliada a la facción de los hermanos Ortega. Un comando del FPI asaltó la estación de radio y la acusó de aliarse con la UNO por el hecho de transmitir propaganda de la alcaldía de Managua. Guadamuz dijo que había sido amenazado de muerte y que su radioemisora sería destruida; señaló que esta acción “era una estupidez muy grande del miembro de la Dirección Nacional del FSLN”, en alusión a Tomás Borge.<sup>95</sup>

El descubrimiento de arsenales de armas en 1992 en un local bajo responsabilidad del comandante “Chiri” Guzmán, hombre de confianza de Tomás Borge, pareció ser parte de la pugna interna del FSLN. Esta situación fue continuada con la explosión en el barrio Santa Rosa, el 23 de mayo de 1993, de un nuevo arsenal de armas que incluía misiles SAM 7, cohetes, ametralladoras y municiones que ocasionó muertes y destrucción. El buzón de Santa Rosa estaba lleno de armas pero también de documentos que revelaban toda una red terrorista internacional con sede en Managua, que había sido protegida por el Ministerio del Interior y la oficina de la seguridad del Estado, organismos bajo la directa conducción de Tomás Borge y su lugarteniente, el coronel Lenin Cerna, quien continuó ocupando el cargo en el gobierno de Chamorro. Apenas

<sup>92</sup> *La Prensa*, Managua, 24 de febrero de 1993, p. 1.

<sup>93</sup> Declaraciones del general Ortega, publicadas en *El Nuevo Diario*, Managua, 24 de febrero 1993, p. 1.

<sup>94</sup> *La Prensa*, Managua, 24 de febrero de 1993, p. 16.

<sup>95</sup> Citado en *La Prensa*, 26 de abril de 1993, p. 3.

unos minutos después de la explosión en Santa Rosa un periodista descubrió que en el sitio se encontraba Tomás Borge, quien declaró que estaba ahí porque en el taller mecánico donde se encontraba el buzón de armas, le estaban reparando su *jeep* y quería saber si no le había pasado nada con la explosión.<sup>96</sup> Aunque las armas fueron atribuidas al FMLN de El Salvador, organización que declaró en un comienzo no saber nada de esas armas,<sup>97</sup> se ha dicho en privado que las armas son parte de los buzones que las guerrillas salvadoreñas y organizaciones terroristas de diversa procedencia ocultaron con protección de la facción de Borge. Aunque el estallido afectó a los Ortega, el primer implicado fue Borge. Después de llegar a Managua, el FPL aceptó que el buzón de armas era suyo, quizá para encubrir la lucha de poder entre dirigentes sandinistas. Esta situación se entiende en virtud de los múltiples favores que recibieron del sandinismo, especialmente del Ministerio del Interior, cuando Borge era el hombre fuerte de la inteligencia sandinista y protector de las guerrillas salvadoreñas y grupos de extrema izquierda (etarras, palestinos, montoneros y tupamaros).<sup>98</sup>

El general Humberto Ortega pareció completar el cuadro cuando “platicó” al cardenal Miguel Obando y Bravo durante la ceremonia inaugural de la asamblea de la OEA, en Managua, que “habían 16 buzones más del FPL”.<sup>99</sup> Como suele suceder en ese tipo de luchas de poder, las informaciones nunca son claras y definidas. Es evidente, sin embargo, que en la reducción del ejército, el sector más perjudicado era el de Tomás Borge, quien tenía su propio ejército, con rangos, uniformes y logística separada del EPS. Las milicias del Ministerio del Interior y los cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dirección de Tomás Borge, fueron puestos bajo la custodia del EPS después de la derrota electoral de 1990 y muchos de sus miembros formaron parte de las primeras tropas desmovilizadas,

<sup>96</sup> *La Prensa*, Managua, 24 de mayo de 1993, p. 1.

<sup>97</sup> El comandante Villalobos de las FPL dijo a *La Prensa* de El Salvador que las armas no eran suyas y que viajaría a Managua para dar explicaciones.

<sup>98</sup> En el sitio de la explosión fueron encontradas decenas de pasaportes falsos y documentos que comprobaban la existencia de una red de terrorismo internacional. Varios “etarras” nacionalizados nicaragüenses fueron responsabilizados de cuidar el sitio. *La Prensa*, 24 de mayo, p. 1.

<sup>99</sup> Véase toda la información en *La Prensa*, 24 al 30 de mayo de 1993.

creando todo un conflicto de intereses entre las tres tendencias del FSLN; un conflicto que lleve al abierto enfrentamiento entre facciones.

¿A dónde van los retirados del EPS? El 30 de agosto de 1991 se anunció la creación de dos grupos armados de exmilitares sandinistas: el Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) y el Movimiento Sandinista Pedro Altamirano (MSPA). Ambas fuerzas se sumaron a la organización armada sandinista Danto 91, creada una semana antes, para combatir a los desmovilizados de la contra. Éste es el surgimiento de los llamados recompas.<sup>100</sup>

Los recontras habían aparecido el 15 de abril de 1991, como reacción frente al incumplimiento de las promesas del gobierno. Los combates entre ambos bandos comenzaron en septiembre de 1991 y adquirieron notoriedad a partir de octubre, luego de los combates en Yalí, cuando tropas del EPS y sus grupos paramilitares de recompas atacaron a grupos de recontras.

Días antes del ataque de Yalí, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación CIAV-OEA trató de evitar una escalada militar y propuso que el gobierno negociara con los tres principales jefes recontras: “Indomable”, “Dimas” y “Rojito”.<sup>101</sup> “Si ‘Rojito’ es atacado, ‘Dimas’ irá en su ayuda y la guerra se habrá reiniciado”, advirtió “Indomable” en un comunicado citado por los diarios de Managua.<sup>102</sup>

En un esfuerzo por tranquilizar a los recontras, que en un número aproximado de mil hombres planteaban una nueva relación de demandas, el ministro de Gobernación viajó al norte del país y ofreció un acuerdo a “Indomable” que incluía la participación de excontras en las policías municipales del norte del país. “Indomable” rechazó la oferta e insistió en que debía ser abolido el ejército sandinista.<sup>103</sup>

El sandinismo rechazó airado la idea de la policía municipal con excontras; Daniel Ortega dijo que eso “no sería permitido” expresando su respaldo a los recompas.<sup>104</sup>

<sup>100</sup> *La Jornada*, México, 31 de agosto de 1991, p. 41.

<sup>101</sup> Citado en *La Prensa*, 9 de octubre de 1991, p. 1.

<sup>102</sup> *La Prensa*, Managua, 14 de octubre de 1991, p. 12.

<sup>103</sup> Citado en *The New York Times*, 10 de octubre de 1991, p. 7.

<sup>104</sup> Citado en *La Prensa*, 10 de noviembre de 1991, p. 1.

Estas referencias sugieren que lo que desestabilizó a al país eran las demandas incumplidas a la resistencia y los esfuerzos sandinistas para que no se cumplieran. En un comienzo los recontras, luego los recompas y al final una extraña mezcla de exmilitares de todo tipo: los revueltos.

En 1992 el gobierno anunció que había logrado la desmovilización de 5 700 recontras y recompas.<sup>105</sup> Sin embargo, la realidad superaba los interminables anuncios oficiales respecto al desarme. En 1993 se anunció una promesa de amnistía para siete mil rearmados, entre recontras y recompas.<sup>106</sup>

En los hechos, durante 1992 y 1993, una escala de violencia fusionó un conjunto de crisis que debieron manejarse para que se conservaran separadas: desempleo, falta de servicios, inseguridad y desencanto.

Para el observador más elemental, la pacificación no se ha logrado ni en su fase de desmovilización ni en su fase de desarme. Las tareas de ambos objetivos han sido bloqueadas por no contar el gobierno con otros instrumentos bajo su control: la impartición de justicia y la rápida incorporación al lenguaje político de un discurso civilista.

El gobierno trató de frenar la violencia ofreciendo una amnistía a los grupos armados bajo la tesis del perdón y del olvido. La presión de los recompas había crecido, afectando el discurso sandinista de que la violencia se debía a los recontras. Lo anterior reflejaba discrepancias internas del sandinismo.

La única solución al drama nacional, declaró la Conferencia Episcopal, es que vengan los cascos azules de las Naciones Unidas. Hemos sugerido personalmente a la presidenta Chamorro que

<sup>105</sup> Declaraciones oficiales a la prensa extranjera, citado por *Miami Herald*, 15 de febrero de 1992, p. 6A.

<sup>106</sup> El gobierno optó por escoger la vía de ofrecer amnistías para los desalzados en armas. Este medio fue constantemente rechazado por la Iglesia, los empresarios, la UNO y la resistencia nicaragüense, porque con ella se liberaba de culpa a los sandinistas que cometían crímenes y delitos. La última amnistía ofrecida por el gobierno de Chamorro fue consistentemente criticada a nivel nacional. Sin embargo, la presidenta mantuvo su oferta incluyendo en ésta todos los delitos cometidos hasta el 31 de agosto de 1993. La ley de amnistía fue aprobada.

considerara “la posibilidad de solicitar la presencia de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas”, reveló monseñor Bosco Vivas.<sup>107</sup>

La presidenta respondió al llamado de la Iglesia diciendo: “Lo siento muchísimo, yo no acepto cascos azules en este país porque no estamos en guerra.”<sup>108</sup>

Pero el conflicto, aun cuando en una escala menor, seguía en la montaña. Las tropas del ejército sandinista fueron ordenadas para combatir contra los grupos de recontras del Frente Norte 3-80 dirigidos por el comandante “Chacal”. Éste respondió movilizandó sus tropas a sitios fronterizos con Honduras. En los primeros días del mes de noviembre de 1993, las tropas de “Chacal” no pudieron ser localizadas por el ejército sandinista, dando lugar al reforzamiento de la tesis de que la guerra continuaría, que la pacificación no podría lograrse sin una nueva ronda de negociaciones en las que el gobierno tendría que sentarse con un renovado liderazgo de la contra. La posible remoción de Humberto Ortega en los comienzos de 1994 bien podría ser el momento para el reinicio de las negociaciones con la contra, encabezada ahora por el liderazgo de los jóvenes comandantes guiados por “Chacal”.

<sup>107</sup> Citado por *La Tribuna*, 13 de julio de 1993, p. 1.

<sup>108</sup> Citado por *La Tribuna*, 14 de julio de 1993, p. 3.



## 7. NICARAGUA: ¿EL FRACASO DE UNA TRANSICIÓN NEGOCIADA?

Desde su toma de posesión, el 25 de abril de 1990 —cuando la mayoría de los observadores políticos aún no se reponían de su sorpresa—, hasta octubre de 1993 —cuando comandos sandinistas tomaban las calles<sup>1</sup> y la contra aún no aceptaba desarmar a sus comandos—,<sup>2</sup> el gobierno de Violeta Chamorro ha transitado por una senda de progresivo deterioro de su autoridad que ha sido advertida por distintos observadores y analistas extranjeros.<sup>3</sup>

La designación de Humberto Ortega como jefe de las fuerzas armadas propició la alianza Chamorro-Ortega, calificada por sus críticos como “unión inmoral”.<sup>4</sup> Ésta sería el eje de la política gubernamental para la realización de sus dos tareas básicas: pacificación y recomposición de fuerzas políticas. Ambas tareas eran concebidas no sólo por los sandinistas sino también por el gobierno de Chamorro como indispensables para preparar al país en una futura transición política hacia la democracia.

A finales de 1993, a pocos meses de cumplir su cuarto año de gobierno, se ha vuelto frecuente, en los más diversos círculos

<sup>1</sup> En octubre se efectuó un paro nacional de transportes bajo conducción sandinista. Los paristas levantaron barricadas en las calles y cerraron las carreteras de acceso a la capital y otras ciudades del país.

<sup>2</sup> Unidades militares de la contra bajo el mando del comandante Chacal rechazaron la oferta gubernamental de amnistía a cambio de desarmarse.

<sup>3</sup> Mark Uhlig, “Contra’s Statements in Conflict on Disarming”, en *The New York Times*, 22 de mayo de 1990, p. 4A; Charles Boudreaux, “Nicaragua’s Family Style Bridges Political Shasm”, *Los Angeles Times*, 5 de mayo de 1990, p. 1A; “UNO Becomes Dos”, *Central America Report*, vol. 17, núm. 15, ciudad de Guatemala, 27 de abril de 1990; Larry Seigle, “Nicaragua: Chamorro Forms Bloc with Sandinista Front”, en *Militant*, Nueva York, 11 de mayo de 1990, p. 1; William Gasperini, “Still-Wary Contra Stick to Their Guns”, en *Christian Science Monitor*, Boston, 27 de abril de 1990, p. 3.

<sup>4</sup> “Nicaragua: The Immoral Marriage of Chamorro and the FSLN”, en *Central America Report*, vol. 14, núm. 13, ciudad de Guatemala, 4 de abril de 1992.

políticos, la versión de que el gobierno de Violeta Chamorro ha fracasado.<sup>5</sup>

En esa tesis prevalecen las noticias de las características y los vicios sobresalientes de su gobierno: subordinación total al sandinismo, nepotismo extremo, prepotencia y corrupción en los círculos íntimos, permisividad para la eliminación de líderes de la resistencia, falta de visión política hacia el futuro e incapacidad para crear las bases de legalidad y confianza requeridas para la inversión productiva y el crecimiento económico.

En pocas palabras, el gobierno de Violeta Chamorro luce cautivo entre los intereses sandinistas y los de una pequeña y ambiciosa camarilla familiar, mientras el país luce más cerca del caos y la confusión que de la estabilización prometida.

A comienzos de 1992 se profundizaron las críticas al gobierno. La carta de 24 congresistas estadounidenses urgiendo una política de cambios, dirigida al ministro de la Presidencia nicaragüense Antonio Lacayo, el 12 de mayo de 1992,<sup>6</sup> y la suspensión de desembolsos de ayuda estadounidense, en junio del mismo año, reflejaron las preocupaciones norteamericanas por el rumbo de la política nicaragüense.

La respuesta de Antonio Lacayo, el 31 de mayo, ofreciendo explicaciones más bien retóricas,<sup>7</sup> junto con la declaración del 9 de junio, de Humberto Ortega, en la que dice: “los militares en América Latina son retirados después de 25 o 30 años de servicio y yo sólo llevo 13, aunque personalmente no estoy aferrado al cargo”,<sup>8</sup> fueron suficientes para reforzar la versión de que el gobier-

<sup>5</sup> Durante el tiempo dedicado a escribir este ensayo he realizado visitas a Nicaragua, y conversado con muchas personas de distinta actividad y orientación política; en Miami he hecho lo mismo, con ciudadanos nicaragüenses exiliados y no exiliados, con colegas latinoamericanos y norteamericanos, simpatizantes y críticos del sandinismo. He leído diariamente las noticias y visto programas de televisión dedicados a Nicaragua. En todos lados, la versión dominante es la de que el gobierno de Violeta Chamorro ha sido un fracaso.

<sup>6</sup> Publicada por el diario *La Prensa*, Managua, 4 de junio de 1992, p. 5.

<sup>7</sup> Véase texto en el diario *La Prensa*, Managua, 4 de junio de 1992, p. 5.

<sup>8</sup> Véase las declaraciones de Humberto Ortega en el diario *Barricada*, Managua, 10 de junio de 1992, p. 14.

no de Violeta Chamorro estaría subordinado en un gobierno ajeno a su control.

Las presiones estadounidenses aumentaron. El 12 de junio de 1992, la directora del Programa de Ayuda Norteamericana a Nicaragua, Janet Ballantyne —en una reunión a puertas cerradas en la embajada de Estados Unidos en Managua, en la que también participó Ronald Goddard (en ese tiempo encargado de negocios de la misma embajada), y según versiones de prensa publicadas casi un mes después (9 de julio)—,<sup>9</sup> acusó al gobierno de Chamorro de dispendio de la ayuda que aportó Estados Unidos; resulta pertinente destacar que este país ha sido el principal donante de ayuda a Nicaragua desde 1990, con un total de mil millones de dólares.<sup>10</sup>

El programa de ayuda a Nicaragua es una de las más importantes, per cápita del mundo, si consideramos el tamaño de la población nicaragüense. Desde 1990 Estados Unidos había entregado más de mil millones de dólares a Nicaragua, lo que en términos per cápita sólo era superada por Israel.<sup>11</sup> Esa ayuda ha circulado a través del sistema bancario estatal. Según la versión de la prensa, por lo menos 100 millones de dólares desaparecieron de los bancos estatales en 1991, en préstamos a empresas e individuos que nunca pagaron.<sup>12</sup>

Alfredo César, expresidente de la Asamblea Nacional, apoyando esas acusaciones, señaló en informaciones aparecidas el 9 de julio de 1992, que “un gran porcentaje de la ayuda se convierte simplemente en regalos para la gente”.<sup>13</sup>

Informes simultáneos sobre regalos monetarizados a diputados de la Asamblea Nacional para que apoyaran el veto presidencial a las reformas de las leyes sandinistas sobre la propiedad, confirmaron una constante de captación de lealtades dentro y

<sup>9</sup> Véase el *Miami Herald*, 9 de julio de 1992.

<sup>10</sup> Suma indicada en conferencia de prensa del embajador Maisto, de Estados Unidos, en Nicaragua, el 2 de noviembre de 1993.

<sup>11</sup> René Herrera Zúniga, “The Perils of a Negotiated Transition”, en *FOCUS*, North South Center, University of Miami, Coral Gables, Florida, octubre de 1992, p. 1.

<sup>12</sup> *Miami Herald*, Miami, 9 de julio de 1992.

<sup>13</sup> *Idem*.

fuera del sandinismo.<sup>14</sup> En este caso, el escándalo ha involucrado el uso de fondos de la ayuda proveniente de países europeos.

El ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, ha negado los cargos de mal gobierno. Pero ello no ha sido suficiente para que sus opositores insistan en que debe renunciar junto con Humberto Ortega.

De tal manera, los acontecimientos revelados por las noticias en los últimos seis meses de 1993 confirmarían esta versión del fracaso gubernamental. La permanencia del general Humberto Ortega, como ministro de Defensa, el control sandinista de la policía, el olvido de la “piñata” sandinista —en la cual están involucrados también familiares cercanos de la presidenta Chamorro—, el clima de inseguridad en el campo, el asesinato de más de 120 combatientes de la resistencia nicaragüense (incluyendo a su mismo jefe militar, Enrique Bermúdez) y 1 400 violaciones a la seguridad de los desmovilizados, según reporte de la CIAV-OEA,<sup>15</sup> configuran un panorama desolador.

Pareciera ser que en Nicaragua importan más los asuntos políticos que los económicos y sociales. A pesar de la situación de éstos, resulta muy difícil impulsar programas de recuperación económica y social en un ambiente político lleno de incertidumbres y conflictos pendientes. De tal manera, el proceso de estabilización política se vuelve el proceso clave para un análisis de la situación nicaragüense y sus perspectivas.

### ¿QUÉ PASA REALMENTE EN NICARAGUA?

¿Es realmente cierto que el gobierno de Chamorro está al borde del colapso y que las posiciones de los sandinistas son más fuertes que antes? ¿Ha fracasado la transición negociada en Nicaragua?

Si evaluamos al gobierno de Violeta Chamorro en sí mismo, sería fácil decir que sí, que todo ha sido un fracaso. Pero si hacemos una lectura diferente de las mismas noticias y un recuento más cuidadoso, no partidario y objetivo de los mismos hechos noticio-

<sup>14</sup> Véase *El Nuevo Herald*, Miami, 9 de julio de 1992, p. 1A.

<sup>15</sup> Véase informe de la CIAV-OEA, Managua, septiembre de 1992.

sos, ubicando al gobierno como parte de un proceso político global, podríamos tener conclusiones diferentes. Esta frase lo sintetiza: "Se están quemando unos árboles, pero el bosque no está en peligro." Por lo menos no ahora, en noviembre de 1993. La posible realización de una elección de Asamblea Constituyente para dirimir los conflictos pendientes que tienen trabada la transición nicaragüense, no debe confundirse con el fracaso gubernamental.

La crisis actual está sirviendo para despejar algunas de las situaciones más confusas de la transición nicaragüense. Es una crisis que aclara más el pasado que el futuro.

La transición nicaragüense, como proceso global de un cambio de régimen político, del socialismo a la democracia, es bastante distinta y más complicada que las transiciones ocurridas en América Latina, durante la última década. Como hemos visto en los capítulos anteriores, en esos países se trató de un proceso de redemocratización pactada entre adversarios políticos dentro de un mismo régimen político. En el caso de Nicaragua, se trata de una transición negociada para un cambio de régimen político, no un simple cambio de gobierno dentro de un mismo régimen.

El primer régimen revolucionario marxista-leninista que se había instalado en América Latina después de Cuba en 1959, fue obligado a ceder el poder, con una combinación de presiones militares y diplomáticas que lo condujeron a negociar con sus oponentes armados y, luego, a correr el riesgo de enfrentar el voto popular en unas elecciones abiertas y vigiladas. Y perdió.

La victoria electoral de la oposición confirmó la transición, pero por algo que no ha sido aclarado públicamente, esta última quedó truncada mediante una extraña componenda de transferencia de mando presidencial. No se sabe exactamente por qué el gobierno victorioso aceptó convertirse en una administración bajo custodia sandinista.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Aun cuando se desconoce el texto de los acuerdos de transición entre los sandinistas y el gobierno de Chamorro, algunas revelaciones de Daniel Ortega pudieran llevar al conocimiento de que esa condición de gobierno bajo custodia sandinista fue una reacción a las presiones estadounidenses, lo que implicaría que esa condición fue aceptada por Estados Unidos. Dice Ortega: "Las presiones fueron iniciadas por Aronson, el 19 de abril de 1990. El clímax llegó la madrugada del 25

La mayoría de las transiciones políticas han sido negociadas y acordadas en pactos, públicos o secretos, con severas limitaciones para los gobiernos de transición. No es nada nuevo que esto haya ocurrido así en Nicaragua, en donde además la cuestión militar ejercía una importancia cualitativa distinta a las de los militares sudamericanos que decidieron pactar el retorno a gobiernos civiles.

La transición negociada en Nicaragua tiene como respaldo un pacto entre los sandinistas y el gobierno de Chamorro, cuyo contenido no fue dado a conocer al público. Aquél, conocido como protocolo de transición, es el que ha guiado la política nicaragüense desde 1990 hasta 1993, cuando las fuerzas políticas opositoras quisieron desconocerlo llamando con ese fin a una elección de Asamblea Constituyente por medio de una reforma de la Constitución dejada por los sandinistas.

#### CONCILIACIÓN O CONFRONTACIÓN. ¿CUÁL ESTRATEGIA SEGUIR?

A pesar de que todo indicaba que en 1990 la legitimidad electoral de Violeta Chamorro, era suficiente para la instalación de su gobierno, sin necesidad de que éste quedara subordinado al sandinismo, la opción escogida fue exactamente la contraria.

Algunos analistas han insistido en que la presidenta debió aprovechar el mandato popular para desalojar a los sandinistas de sus posiciones de mando, y utilizar su mayoría parlamentaria para revocar las leyes del anterior gobierno; debió mantener sus alianzas partidarias integrando a sus líderes en la formación de un verdadero gobierno antisandinista y, finalmente, debió llamar a la comunidad internacional para que le respaldaran por todos los medios, si los sandinistas se aferraban al poder. En pocos días el país hubiese dejado de tener la influencia sandinista.

El problema es que los hechos no ocurrieron de esa manera y no es muy claro que ello fuera posible en el entorno negociado en

---

de abril de 1990, día de la toma de posesión, cuando se pidió el retiro del general Humberto Ortega”, citado en *Barricada*, Managua, 10 de septiembre de 1992, p. 6. Esto es interesante porque horas más tarde, la señora Chamorro anunció que Humberto Ortega permanece al mando del ejército.

que había surgido la apertura sandinista, desde 1987 y especialmente luego de la cooperación soviético-estadunidense para la solución de los conflictos de Centroamérica entre los presidentes Bush y Mijail Gorbachev, entre 1988-1992.<sup>17</sup>

El gobierno de Chamorro aceptó la exigencia sandinista de la subordinación y del acomodo, pensando quizá que no tenía otra alternativa y que ésta era la menos costosa para el equipo político gubernamental que habría de hacerse cargo de la nueva administración.

En un seguimiento de los hechos, hallamos que los sandinistas lograron sujetar a la nueva administración por medio de la retención del poder militar y policiaco, la irrevocabilidad de las leyes de la propiedad que encubren la apropiación de bienes ajenos y el control del poder judicial.

Pueden estar seguros [dijo Antonio Lacayo a los congresistas norteamericanos] que no es verdad que el aparato de seguridad de nuestro país esté bajo el control de facto de un partido político opositor, ni tampoco el ejército ni la policía.<sup>18</sup>

Y tenía razón, no era un control *de facto*, era uno legalmente establecido por derivar de un nombramiento de la presidenta Chamorro.

En el análisis de esta crisis se ha destacado el fracaso de la política gubernamental dando excesiva importancia a los símbolos: Ortega en el ejército, parientes por todo el Palacio, etc. Es un modo de ver los acontecimientos, pero si hacemos una lectura más profunda y objetiva de los mismos hechos, encontraremos que el fracaso gubernamental implica algo más que eso: el fracaso de la

<sup>17</sup> El secretario de Estado, James Baker, mencionó que esa cooperación había llegado lejos, al extremo de permitirle a Estados Unidos redefinir sus intereses de seguridad relacionados con la cuestión nicaragüense, en una declaración del 10 de febrero de 1990, pocos días antes de las elecciones en Nicaragua. "Nosotros no vemos a Cuba como una amenaza para Estados Unidos. Por lo tanto, tampoco vemos a Nicaragua como una amenaza mayor. Ambos lo son para los países democráticos vecinos", citado por Linda Robinson, *Intervention or Neglect, op. cit.*, p. 167.

<sup>18</sup> Tomado del texto de la carta del ministro Antonio Lacayo a 24 congresistas norteamericanos, publicado por el diario *La Prensa, op. cit.*, p. 5.

opción sandinista. ¿A quién le importa que la consecuencia sea el descrédito del gabinete de Chamorro?

En la perspectiva de nuestro análisis, el error de la presidenta al establecerse como cogobierno ha tenido sus beneficios inesperados: la debilidad de su gobierno ha arrastrado a los sandinistas a su propia debilidad.

En la visión sandinista, las imposiciones sobre el gobierno les permitiría administrar su derrota electoral de 1990, con resultados favorables. Pero en política, como lo demuestra hoy el caso nicaragüense, las circunstancias influyen más que la teoría. Las pequeñas circunstancias, junto a situaciones de la vida real, jugando a una sincronización de eventos no prevista o simplemente mal prevista, han roto los planes de una transición por la vía larga que, según los manuales teóricos, debía llenarse de acomodos necesarios y garantías de predecibilidad favorables a los sandinistas. Estos últimos han tardado bastante menos de lo esperado para lucir desgastados. "El poder desgasta, pero mucho más al que no lo tiene", es una afirmación útil en el caso del FSLN, como diría un periodista español durante la visita de los reyes de España en abril de 1991.<sup>19</sup>

Obsesiones ideológicas que ubican el afán de conservar su hegemonía en una nueva trayectoria democrática del país, más una actitud preventiva, frente a temores de revanchismo del gobierno de la oposición, impulsaron a los sandinistas a imponerle a éste absurdas condiciones de subordinación. El tono de los entendimientos soviético-norteamericanos de una transferencia ordenada del poder en Nicaragua y los temores del grupo de la señora Chamorro de que podrían no llegar a la fecha de toma de posesión, les llevó a aceptarlas. Luego, en un vicioso círculo de acomodos cotidianos, típicos de la cultura política nicaragüense, lo que fue la ilusión de un gobierno opositor se fue convirtiendo en un cogobierno totalmente ajeno a los intereses nacionales: Chamorro ganó la ilusión de gobernar y los sandinistas de conservar el poder. Ambas ilusiones se están desmoronando con la crisis actual.

La coalición de partidos opositores UNO y la resistencia nicaragüense fueron la fuerza impulsora en el derrumbe negociado del

<sup>19</sup> Antonio Caño, "El desgaste de la oposición sandinista", en *El País*, Madrid, 18 de abril de 1991, p. 11.

sandinismo. Ambas han quedado a salvo de ese desmoronamiento y conservan, sin que importe la definición formal que adopten en el futuro, el capital político más importante en la recomposición de fuerzas políticas en Nicaragua.

En este contexto, una lectura crítica de las noticias que muestran el fracaso gubernamental, nos conduce a resultados políticos distintos.

#### ÉXITOS Y FRACASOS DE LA ESTRATEGIA DE CONCILIACIÓN

Debe hacerse distinción entre el fracaso de las políticas gubernamentales (medido por su eficacia socioeconómica) y el de las políticas de conciliación (medido por su eficacia en disminuir el poder sandinista previamente existente). Es una separación necesaria pues el fracaso del gobierno, no necesariamente significa el de la conciliación, como estrategia gubernamental para desandinizar al país.

La derrota de la estrategia gubernamental ha servido, sin proponérselo, para arrastrar a los sandinistas a su propio fracaso. Con ello se están desgastando dos muestras extremas de la política nicaragüense: el viejo círculo oligárquico granadino (instalado en el gobierno) y el sandinismo revolucionario. Visiones que habían sido desterradas desde los años cuarenta y que reaparecieron, extrañamente juntas en 1979, para pretender ahora, en la transición, amarrar para sí el futuro de la nación.<sup>20</sup>

La etapa de acomodados propia de una estrategia de conciliación, que tanto debilitó a los gestores principales del gobierno frente a sus electores, ha producido también una inimaginada deflación del poder sandinista. Lo interesante que se halla durante el análisis de la política nicaragüense, consiste en que los propios sandinistas y sus seguidores han sido responsables, con sus actitudes, de su propia crisis. Sin darse cuenta, al imponerle a Chamorro prácticamente un cogobierno han administrado mal su derrota electoral de 1990. La estrategia les ha resultado contraproducente y aunque ha llenado de disputas y ruidosas manifestaciones, el periodo inicial

<sup>20</sup> René Herrera Zúniga, "The perils of a negotiated transition", *op. cit.*, p. 3.

y quizá total de la presidenta —“gobernaremos desde abajo”, diría Daniel Ortega— lo cierto es que el tiempo los ha alejado de sus bases sociales, los ha dividido, los ha desacreditado y colocado en posición de irresponsables por la comunidad internacional.

Hoy, a cuatro años del inicio del gobierno, los sandinistas se encuentran más débiles, están completamente desacreditados y más divididos internamente, sin credibilidad entre sus tradicionales seguidores, mostrando sus propios vicios de poder. Y sin que nadie les haya disparado un tiro para matar a uno de sus nueve comandantes.<sup>21</sup> Atraparon al gobierno, pero ellos también quedaron atrapados en su propio juego.

Al protegerse de amenazas inexistentes, retuvieron un poder militar y policiaco que ya no tiene vigencia y que más bien se les ha convertido en una fuente de condena internacional y de pugnas internas.

Los cambios en la dirección nacional de la policía, insistentemente pedidos por la oposición, terminaron haciéndose bajo la orientación de los sandinistas, dejando a la vista sus pugnas internas.<sup>22</sup>

Además, para protegerse personalmente de la derrota política, se afianzaron por la vía legislativa una increíble distribución de bienes ajenos (la famosa “piñata”), que nadie podría reconocer como válida para defender las conquistas sociales de una revolución que dijeron hacer en nombre de los pobres.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> En el artículo citado de Antonio Caño hay una referencia a las preocupaciones actuales de los nueve miembros del FSLN respecto de su imagen y su credibilidad entre los propios sandinistas.

<sup>22</sup> La permanencia en posiciones dominantes del ejército y de la policía está relacionada con distribución de cuotas de poder entre las facciones del sandinismo. La destitución del jefe de la policía y el nombramiento de otro, también sandinista, es parte de esas pugnas, así se ha interpretado por los medios informativos. Los desplazados de la policía estaban identificados con Tomás Borge y el nuevo con Ortega. Véase *La Prensa*, Managua, 6 de septiembre de 1992, p. 12 y *Barricada*, Managua, 10 de septiembre de 1992, p. 6.

<sup>23</sup> La búsqueda de fórmulas para conciliar la “piñata” entre los mismos beneficiados por ella, ha conducido a divisiones entre los líderes del sandinismo. Daniel Ortega, beneficiado, instó a la Comisión de Ética del FSLN que llamara a varios militantes para dar explicaciones de sus bienes, a lo que otro miembro de la dirección sandinista, Bayardo Arce, dijo que eran “inoportunas” las declaraciones de Ortega, *La Prensa*, Managua, 24 de septiembre de 1992, p. 1.

Así, las dos más grandes reservas de poder que los sandinistas hicieron para garantizar el traspaso de mando al gobierno electo de Violeta Chamorro, y que ésta aceptó creyendo que era también su propia opción, lucen hoy vulnerables: el control permanente de las instituciones militares y policiacas, y la irrevocabilidad de las leyes que protegen la apropiación de bienes ajenos.

Con ello los sandinistas quedaron totalmente expuestos a la condena y a la crítica de los más diversos sectores internacionales y nacionales, al tiempo que provocaron severas fisuras en su propia estructura política.<sup>24</sup> Para sectores del mismo sandinismo, con la apropiación de bienes ajenos se hizo polvo el “encanto de honestidad” que los sandinistas habían propalado frente al pasado; con la obsesión de conservar posiciones de mando militar y policiaco se ha dado muestra de que ya sin guerra, la prepotencia y el militarismo prevalecen sobre los valores cívicos.

En resumen, las salvedades de poder han servido más para la protección de irregularidades y actos punibles cometidos durante los diez años de gobierno y los que lleva el actual cogobierno, que para la defensa de conquistas sociales y reformas básicas en beneficio de la mayoría pobre del país.

El congreso del partido sandinista, efectuado en julio de 1991, exhibió el agudizamiento de los conflictos internos entre los radicales y los sectores que piden una democratización partidaria. Bloqueando a éstos y apoyando a los primeros, Daniel Ortega se ha quedado como líder de un partido que deberá obtener nuevamente credibilidad para ofrecer una plataforma de consenso, en los próximos años. En su cuartel, el general Ortega está sometido a presiones que lo colocan a la defensiva. El anuncio público de la presidenta Chamorro de que el militar dejaría el cargo en algún momento de 1994 estuvo dirigido a

<sup>24</sup> En virtud de la naturaleza faccional del poder sandinista, la tarea destinada a lograr la deflación de su poder, luego de la derrota electoral, pasa primero por dejar que las dificultades de esa derrota y la pérdida del gobierno que ella implicó, generen pugnas entre ellos mismos. Los primeros afectados han sido los más “duros” del sandinismo, pero a su vez éstos tienen base de acusación frente a los “blandos” por haber desnaturalizado al partido (la facción de Borge frente a la de Ortega). “La única posibilidad de revitalizar al FSLN —dijo Tomás Borge— es no abandonar su proyecto político, ni siquiera en apariencia”, citado en *El Nuevo Diario*, Managua, 17 de julio de 1992, p. 1.

producir mayor incertidumbre en las filas militares del sandinismo que a determinar una posición de autoridad presidencial sobre éstas.

En ese sentido la estrategia de transición gubernamental por la vía de los acomodados ha fallado también para los sandinistas. Los acuerdos de subordinación que fueron considerados por los sandinistas y por sus allegados del gobierno de Violeta Chamorro como requisitos para una transición negociada del mando gubernamental en 1990, se van desgastando y perderán su validez en la medida en que avance el periodo presidencial de la mandataria. La insistencia en un diálogo de fuerzas tripartitas —gobierno, sandinismo y oposición—, pese a que no llega a realizarse de manera total, refleja ese desgaste del sandinismo. El requisito de cogobierno de 1990 deja de ser requisito para gobernar después de 1993.

Al ver el bosque y no sólo los árboles que se están quemando, Nicaragua muestra en sus circunstancias políticas de hoy, que las condiciones serán cada vez más favorables para un fuerte viraje de la dirección gubernamental en un rumbo que profundizará el desgaste del sandinismo.

Cuando negociaron con la resistencia nicaragüense en Sapoá en 1988, los sandinistas perdieron la hegemonía del proceso político nicaragüense; en las elecciones de 1990, perdieron el predominio político que creyeron conservar después de Sapoá y, en la imposición de condiciones preventivas para la entrega del gobierno en 1990, perdieron lo que habían conservado con su promesa de respetar los resultados electorales.

En una perspectiva global de transición, esas pérdidas del sandinismo se han visto magnificadas con una serie de acontecimientos inesperados y que, más bien, ellos trataron de evitar con sus imposiciones al gobierno de Chamorro. Se trata de acontecimientos que ocurren a pesar del gobierno y como efectos contrarios a los buscados durante la política de acomodados de estos dos y medio años.

#### LA DEFENSA DE LA FUERZA Y LA PÉRDIDA DE LA INFLUENCIA POLÍTICA

Un primer acontecimiento que revela la debilidad actual del sandinismo, ha sido el que la concentración de reservas de poder en el área militar, deslizó los arreglos faccionales establecidos en 1979.

La concentración en el poder militar dejó fuera de su control directo el manejo de los recursos gubernamentales que le habían dado equilibrio a las cuotas e influencias de cada una de sus tres facciones. El control general del gobierno había sido para las facciones del sandinismo, lo cual constituía un hecho clave para mantenerse unidos. Sin ese control, la distribución de cuotas de poder e influencias entre sus respectivas clientelas se ha vuelto difícil, si no es que imposible. Esta situación ha producido una descomposición de los arreglos faccionales establecidos desde 1979 con el consecuente debilitamiento de unos líderes respecto de otros. Es evidente que la facción de los hermanos Ortega se ha quedado con el poder del sandinismo, en perjuicio de las facciones de Tomás Borge y de Jaime Wheelock.

También ha obligado a una realineación de clientelas políticas faccionales. Los seguidores de las facciones perdedoras han quedado en expectativa o han debido buscar acomodo con los Ortega. Pero éstos a su vez, han perdido el control presupuestal del gobierno y conservan solamente el de las fuerzas armadas, pues se hallan ante un presupuesto cada vez más cuestionado por la oposición y sometido ahora a nuevas limitaciones frente a necesidades de gasto social básico. No tienen lugar para sus propios adeptos, menos para los de las facciones perdedoras.

La concentración de poder militar se ha dado en detrimento de los intereses de varios de los líderes y sus respectivas clientelas por lo que no sería nada extraño que esas situaciones conduzcan a crisis de confrontación entre líderes faccionales. Durante las explosiones de arsenales de armas atribuidas a facciones guerrilleras salvadoreñas, en mayo de 1993, los inculpados del sandinismo han sido miembros prominentes de la facción de Tomás Borge.

#### DEL PALACIO A LA CALLE: UN GOBIERNO SIN SEGUIDORES

Un segundo acontecimiento desfavorable al sandinismo, ha sido que la oferta de gobernar desde abajo, hecha por Daniel Ortega como una compensación retórica de su derrota electoral, no ha contado con la aceptación de clientelas buscadoras de beneficios y prebendas. Y el control de la calle, para gobernar desde

abajo, no es suficiente atractivo para los buscadores de un empleo que sustituya al que han perdido. El hecho de que el partido sandinista todavía promueva toma de pueblos y cierre de carreteras, no refleja una capacidad de convocatoria propiamente política.

Informes de prensa revelan que a mediados de 1991, se consolidaba la tendencia de mayor afiliación sindical en las organizaciones sindicales antisandinistas.

Por otra parte, la maquinaria de propaganda sandinista, una vez poderosa y efectiva, tiene desde 1990 una contraparte por medio de una amplia gama de medios de comunicación públicos y privados, fuera de su control y al servicio de los intereses del antisandinismo.

Los nicaragüenses, con el sentido común que le caracteriza, se están moviendo hacia quienes les ofrecen posibilidades de empleo estable, que no tenga que ser defendido militando en la calle. Debido a lo anterior, las incitaciones sandinistas a la violencia laboral no han logrado evitar la desregulación y la privatización de empresas en sectores clave de la economía. Mientras más intentan gobernar abajo, los sandinistas ha quedado más lejos de arriba.

#### EL FIN DE UNA MÍSTICA

Un tercer acontecimiento que muestra el grado de debilidad y vulnerabilidad sandinista está relacionado con la defensa a ultranza que ellos hacen de sus leyes de propiedad. Vincular poder militar con protección a la distribución de bienes ajenos entre sus líderes, ha resultado fatal para el sandinismo. La condena internacional ha sido unánime. Sus reservas de poder han sido entonces el mejor camino para que se colocaran como un blanco fácil para la crítica internacional y nacional.

Los medios de comunicación lo señalaban con claridad: "El Frente Sandinista está perdido y no sabe cómo actuar. Es un partido al que se le cayó todo lo que habían venido pregonando y tratando de venderle al pueblo."<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *La Prensa*, Managua, 6 de septiembre de 1992, p. 11.

Los acomodados continuistas acordados por los representantes del gobierno de Violeta Chamorro y los representantes sandinistas, han tenido como resultado imprevisible, una deflación del poder sandinista, en la que éstos han sido partícipes.

De tal manera, la permanencia de Humberto Ortega, vista por la oposición como la muestra más indeseada de continuismo sandinista, y la obsesión gubernamental de no retar al sandinismo con la revocación de sus leyes de propiedad, terminaron siendo, sin que así se pretendiera, el acto más significativo de este periodo: los mismos sandinistas y sus allegados en el gobierno, serían quienes administrarían mal su propia derrota política.

La debilidad del gobierno de Chamorro ha arrastrado a los sandinistas a la suya propia.

En esta perspectiva de análisis, ubicando al gobierno como parte de un proceso global de cambio del régimen sandinista, la crisis que está viviendo Nicaragua es parte de una emergencia de transición.

La etapa de emergencia requería de un determinado tipo de actores políticos aceptables a los sandinistas, lo cual era fácil de lograr, en virtud de que muchos de ellos ya habían hecho su aparición como novedosos aliados sandinistas en 1979 y estaban dispuestos al reencuentro. De 11 ministros (incluido el de la defensa) designados por la presidenta Chamorro para integrar su gabinete en 1990, sólo uno sería considerado ajeno al sandinismo.<sup>26</sup>

Casi todos los miembros del grupo de la señora Chamorro provienen de las filas gubernamentales sandinistas entre 1979-1982 y los que no formaron parte de la burocracia gubernamental, se dedicaron durante el periodo a realizar exitosos negocios privados. El gobierno ha sido, desde sus inicios, un gobierno de disidentes del sandinismo, más que de opositores al sandinismo.

Esa forma de integración original del gobierno de Chamorro debe entenderse en el contexto en que tuvo lugar su elección. Un gobierno integrado como garantía de continuidad y no confrontación en la realización de las tareas de emergencia que debían realizarse a partir de 1990. Éste era un requisito sandinista de la transición negociada en Nicaragua, para disminuir la suma de

<sup>26</sup> Ministerios de Agricultura, Construcción y Transporte, Economía, Educación, Finanzas, Relaciones Exteriores, Salud, Interior, Trabajo, Presidencia.

temores que se habían acumulado entre sectores diversos ante la posibilidad de una victoria electoral de la oposición. Eso explica que el eje central de la nueva política fuese el de la reconciliación más que el de la confrontación. En ello no hay diferencias sustanciales con los arreglos de transición ocurridos en otras transiciones en América Latina. Las etapas y contenidos de transición establecidos en la teoría por Juan Linz, O'Donnell y Schmitter y aplicados por una diversidad de autores latinoamericanos para los países del Cono Sur, dejan ver los caminos de democratización pactados con claros "candados" impuestos por los militares.

Conforme los procesos de transición estudiados en las investigaciones de esos autores, queda claro que hay una etapa inicial de emergencia en la cual las tensiones políticas son numerosas. En el caso nicaragüense ese proceso es más complicado por el hecho mismo de la guerra y la polarización vivida antes de las elecciones de 1990.

Quizá por ello en el caso nicaragüense las principales tareas de esa etapa de emergencia, lejos de acercarse a la consolidación de un nuevo orden político, se limitaran a cuestiones decisivas que incluyen el desarme de la resistencia nicaragüense, la reducción del ejército sandinista y el desarme de sus seguidores, el control sobre los mecanismos básicos de la economía, la reinserción institucional del país en los organismos económicos internacionales y la restauración de las libertades básicas.

Los índices de pobreza en Nicaragua son alarmantes. El país ha quedado en los niveles de Haití. ¿Por qué el gobierno no ha podido reactivar la economía?

#### LOS ASUNTOS ECONÓMICOS EN UNA ETAPA DE EMERGENCIA POLÍTICA

El país de los años setenta, identificado como la nación que tenía el mayor índice de crecimiento económico en Centroamérica, quedó paralizado y luego entró en retrocesos durante los años de la gestión sandinista.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Véase René Herrera Zúniga, *Las relaciones internacionales y la formación del poder político en Nicaragua*, México, El Colegio de México, 1991. También véanse

El PIB per cápita disminuyó de 460 dólares en 1978 a 190 en 1990. Las exportaciones cayeron de 640 millones de dólares en 1978 a tan sólo 280 millones en 1990, mientras la deuda externa aumentó de mil millones de dólares a más de 11 mil millones en 1990. En 1988, cuando la inflación alcanzó niveles dramáticos (33 602%) los salarios reales regresaron a los niveles de los años cincuenta. Con una tasa de desempleo cercana a 56%, Nicaragua confirmó al final de la gestión sandinista, el descenso del nivel de vida más dramático de todas las repúblicas latinoamericanas.

El país que recibió el gobierno de Violeta Chamorro en 1990, estaba quebrado en lo económico, polarizado políticamente y empobrecido en lo social. Las posibilidades de modificarlo en poco tiempo eran muy limitadas, como lo demostró el plan estabilizador de los "100 días", aplicado por el gobierno en 1990. A pesar de que el discurso gubernamental sugería políticas distintas, el programa de cinco puntos para combatir la crisis económica, adoptado por el gobierno de Chamorro, no fue muy distinto del plan de estabilización que los sandinistas pusieron en vigor en 1988.

El énfasis en la privatización, era coincidente con la promesa del cambio y la prosperidad, pero carecía de sentido práctico, en virtud de las condiciones jurídicas y políticas de la propiedad, la incertidumbre de las inversiones y las manipulaciones políticas en las relaciones obrero-patronales. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha insistido desde 1990 en la tesis de que el ambiente no será favorable a la iniciativa privada mientras no se resuelvan los problemas de la propiedad.<sup>28</sup>

La promesa del cambio gubernamental, como promesa de prosperidad, fue muy significativa en el ánimo político electoral de 1990, pero no fue suficiente para estimular el crecimiento

---

para un resumen de información del estado económico de Nicaragua en los meses previos a las elecciones de febrero de 1990, véanse los trabajos de Peter Passell, "For Sandinistas, Newest Enemy is Hard Times", en *The New York Times*, 6 de julio de 1989; del mismo autor "Nicaragua in extremis", en *The New York Times*, 12 de julio de 1989; James Chace "Dithering in Nicaragua", en *The New York Review*, 17 de agosto de 1989.

<sup>28</sup> *La Prensa*, Managua, 5 de septiembre de 1992. Declaraciones del presidente del Cosep, Ramiro Gurdián.

económico en ninguno de los tres primeros años del gobierno de Chamorro.<sup>29</sup>

Dedicado a concertar sus medidas de política económica con el sandinismo, el gobierno no ha podido articular un plan de estabilización con el consenso del sector privado. A pesar de ello, este último no ha abandonado al gobierno. El sector agroexportador ha aumentado las áreas de siembra en algodón, plátano y ha iniciado un programa de renovación cafetalera. Las exportaciones tradicionales crecieron 11.6% en 1990 respecto del nivel de 1989. La apertura de mercados a la carne está incentivando la recuperación de la ganadería nicaragüense. Al mismo tiempo se observa el desarrollo de productos agrícolas no tradicionales, con el apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID).

La tesis gubernamental de que la concertación de sus políticas económicas con el sandinismo era necesaria para que cesaran los temores de una revancha política y, al mismo tiempo, para facilitar otras tareas de reconciliación ha dilatado la cooperación del sector privado.

Esas tareas de reconciliación debían facilitar el retorno ordenado y no de confrontación de miles de exiliados, además posibilitaron la redefinición posterior de políticas destinadas a favorecer la recuperación económica y la creación de un ambiente de legalidad favorable a un nuevo modo de acción política con el fin de que se distinguiera del estilo impuesto por el sandinismo en sus diez años de gobierno.

La concertación, como forma de toma de decisiones, se volvió una práctica en áreas sensibles de las políticas de reducción del gobierno y la privatización de empresas. La negociación creó confusiones y resistencias dentro de las propias filas opositoras de tal manera que significó el aislamiento del gobierno respecto de su propia coalición.

A juicio del gobierno, las concertaciones con el sandinismo permitieron la estabilización monetaria y los progresos en la desregulación burocrática y la privatización, lo que —según el régimen— representaban políticas clave para la estabilización de la

<sup>29</sup> Véase *The Economist*, Intelligence Unit, *Nicaragua. Country Profile 1991-1992*, Londres, 1992.

economía. Al aceptar la exigencia sandinista de concertar con ellos las políticas económicas, lo que ocurrió fue precisamente lo que los sandinistas no buscaban: la concertación sirvió para facilitar a los trabajadores una organización más autónoma y de menor militancia al lado del sandinismo.

Según informaciones oficiales, de 350 empresas estatales bajo control sandinista, 110 fueron privatizadas en abril de 1992, sin que la agitación de los sandinistas entre los trabajadores de esas empresas lo hayan impedido.<sup>30</sup>

Por la vía de la concertación fue posible, dice el gobierno, la reducción del ejército de 80 mil miembros a 28 mil y la disminución de su presupuesto de 175 millones de dólares a 70 millones en 1991.<sup>31</sup>

¿Lo anterior significa que el gobierno ha tenido un éxito y que en consecuencia debe mantener sus políticas de acomodo, de manera que por medio de esas vías elimine la influencia del sandinismo en el país? No. Significa que las tareas realizadas requieren de una política de consolidación para la cual son necesarios cambios significativos en la manera de hacer la política y en las personas que las realizan.

El dilema de una política de recuperación de corto plazo, se atendió usando la vía de la concertación con el sandinismo, manteniendo en la práctica los principales elementos de la política económica sandinista. A estas alturas esos esfuerzos de negociación, adoptados entonces por razones de transición política, deben orientarse hacia los sectores privado y obrero, atendiendo razones de estabilización económica. El sandinismo no puede argumentar que el estancamiento de la economía responde a los intereses de la población. A la vez, el gobierno no debe seguir obstruyendo, con razones de transición política, la oportunidad de cooperación económica privada, tanto internacional como nacional, destinada a mejorar las condiciones de vida de la población.

Después de tres y medio años de acomodados y subordinaciones realizados a expensas de los sectores más débiles del país y de las

<sup>30</sup> *La Prensa*, 26 de septiembre de 1992, p. 1. Declaraciones del director de la Corporación Nicaragüense de la Administración Pública (Cornap).

<sup>31</sup> René Herrera Zúniga, *The Perils of a Negotiated Transition*, op. cit., p. 5.

mismas fuerzas opositoras que le dieron respaldo, la presidenta Chamorro puede empezar a gobernar con la autonomía que las circunstancias le negaron en 1990, a pesar de su legitimidad electoral.

La etapa de emergencia, dentro del complicado proceso de transición nicaragüense, está llegando a su fin.

#### CONCLUSIONES. LAS PERSPECTIVAS DEL CAMBIO EN NICARAGUA

La deflación del poder sandinista ha sido el resultado fundamental, de la primera etapa de un gobierno de transición, más cercano al sandinismo que a la oposición. Un gobierno de antiguos socios de la primera ronda después de 1979; es decir, las mismas familias y amistades, confirmando lo que dice un adagio popular nicaragüense: “no hay mejor cuña, que la del mismo palo.”

Todo indica que el país requiere de cambios, no por simples deseos voluntaristas de resistencias a las circunstancias de una alianza política. Las resistencias sandinistas a este cambio son y serán, sin duda, fuertes, pero a diferencia de los temores de 1990, el gobierno puede reivindicar frente a la comunidad nacional e internacional, su derecho a gobernar sin ellos.

Todas las presiones y observaciones por un cambio conceden al gobierno más legitimidad para realizarlo. Nuevas tareas, nuevos y más diversos actores. Ninguna transición puede estancarse porque deja de serlo y se convierte en un disparate.<sup>32</sup> Cambio es un momento excepcional cargado de momentos sucesivos que van integrando etapas y distintos actores.

El peligro de fracaso, en este cambio de etapas en la transición nicaragüense, proviene no sólo de las resistencias sandinistas, sino también de sectores del mismo gobierno que en estos años han arraigado notorios intereses políticos y fortunas económicas que no quieren perder.

Al apropiarse de la escasa legitimidad gubernamental para sus propios fines, estos sectores podrían estar retrasando los cambios bajo el argumento de que aún no es tiempo de dar un giro al

<sup>32</sup> René Herrera Zúniga, “Los dilemas de la transición nicaragüense”, *La Tribuna*, Managua, agosto de 1993, p. 7.

rumbo político. La persistente actitud de los responsables de la transición de no reconocer los errores cometidos por el gobierno, reflejan una voluntad de mantener el actual camino.

Si alguien ha tenido la idea de “domar a la fiera durmiendo con ella”, debe darse cuenta que ello ha sido funcional a una política de reconciliación y deflación paralela del poder sandinista, pero que puede resultar inadecuada si la noche se vuelve muy larga.

Frente al temor de que estas situaciones generen coaliciones extrañas, deben entenderse y respaldarse las presiones estadounidenses y nicaragüenses por un cambio rápido y oportuno de estrategia.<sup>33</sup>

El tiempo ha ido en contra del sandinismo y sus allegados en el gobierno, pero de no actuar ahora, aquél podría ir en contra de la presidenta Chamorro y en beneficio de una nueva forma de polarización política.

Una transición es una sucesión de etapas en cada una de las cuales hay tareas y actores nuevos. Y aunque todos lo saben en un grupo de transición, siempre hay entre ellos quienes sufren la tentación de alargar las etapas y dilatar las tareas, con el fin de hacer más larga su vida de actores principales.

Esa situación se está presentando en estos últimos meses con el caso de Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia, por el lado gubernamental y Humberto Ortega, por el lado del sandinismo. Al promover el estancamiento de la transición, ambos pudieran estar configurando coaliciones de continuidad para 1996. El primero como aspirante a la conducción de una alianza opositora y el segundo como candidato de los sandinistas.

Es prematuro hablar de escenarios políticos futuros, debido a que no se han realizado los cambios que reorientarían el proceso nicaragüense por un rumbo más predecible. La incertidumbre es característica de toda transición. De manera que para intentar un pronóstico más confiable, hay que separar dos momentos. El

<sup>33</sup> El famoso reporte *Nicaragua Today*, elaborado por un grupo de analistas del Partido Republicano estadounidense, dio bases a muchas de las argumentaciones del senador Jesse Helms para promover la suspensión de ayuda a Nicaragua en julio de 1992 y también dio a conocer, documentadamente, muchas de las informaciones manejadas cotidianamente en relación con Nicaragua.

actual, que arroja situaciones sólo ciertas en un análisis de corto plazo. Y un segundo momento, lejano en cuanto a conclusiones y cuyos rasgos sólo pueden ser definidos a partir de tendencias globales.

En la actualidad, podríamos decir que hay dos situaciones futuristas dentro del gobierno y otra, borrosa todavía, fuera de él. La razón de verlo así es que consideramos que en el gobierno están juntas las aspiraciones sandinistas y las de sus allegados autocalificados como antisandinistas por su origen electoral.

Lo que prevalece en la primera situación no es un enfoque de sandinismo contra antisandinismo, sino una visión de acomodados tempranos, propios de las primeras tareas de una situación que llamamos de transición, sólo para facilitar el uso de un término comúnmente aplicado a los cambios de régimen ocurridos en América Latina.

¿Cuáles podrían ser los escenarios político-electorales de 1996 si la situación actual no se modificara?

Dentro del gobierno está claramente identificada como dominante, la posición de los actores de la transición, Antonio Lacayo y Humberto Ortega. Representa una unión que ha dado lugar a especulaciones sobre una alianza entre ellos. Ambos han favorecido esa situación de alargamiento de las etapas de transición, para beneficio político personal de largo plazo. De promover ambos el estancamiento de la transición, mediante la dilatación de los cambios desde sus posiciones privilegiadas de mando, esa alianza les permitiría, creen ellos, convertirse en los gestores de una coalición político-electoral de continuidad en 1996. No importa, en este momento, quién se encuentre adelante, pues cada uno sigue actuando con la idea de conducir exitosamente la transición.

Esa alianza, que luce como la más fuerte en este momento, pudiera ser, sin embargo, la más débil en el mediano plazo. Ambos, para construir esa posibilidad como futuro, tendrían que oponerse de manera más abierta a la recomposición de las otras fuerzas políticas. En el antisandinismo y en el mismo sandinismo están creciendo las resistencias al continuismo. La táctica de ambos es demasiado visible y predecible, lo cual les hace vulnerables, en sus respectivos frentes.

La iniciativa política ha estado en manos del sandinismo, pero las calles han quedado vacías. Mientras el sandinismo batalla por

encontrar una nueva identidad para el futuro electoral, la oposición apenas empieza a pensar en política. La mayor parte del tiempo, desde 1990 hasta 1992, los opositores se han dedicado a tareas relacionadas con sus posiciones en la Asamblea Nacional. Desde finales de 1992 y hasta finales de 1993, la oposición ha empezado a acercarse más a debatir e impugnar más abiertamente al régimen en las cuestiones fundamentales de gobierno.

Aunque ese papel de la oposición no luzca adecuado, todo indica que hace bien en acelerar el desgaste que se está produciendo tanto en el sandinismo como en el gobierno de Chamorro. Ello parece explicar su decisiva campaña a favor de la realización de una elección que lleve a una asamblea constituyente destinada a poner fin a la incertidumbre de las reformas constitucionales. Todas las fuerzas políticas están abocadas hoy a decidir la conveniencia de realizar las reformas constitucionales por un llamado a elecciones o por un nuevo pacto tripartito: gobierno, sandinismo y antisandinismo. La UNO, especialmente los liberales, los conservadores y socialistas, se inclina por una asamblea constituyente; el sandinismo por una reforma pactada en la cúpula, sin necesidad de elecciones, contando para eso con el apoyo de una facción demócratacristiana de la UNO. Hasta finales de 1993, no había aún una decisión final al respecto.

En todo caso, es típica la sucesión de pactos o la renegociación de éstos para mantener en movimiento la transición. Llamar a elecciones o decidir la reforma en una negociación en la cúpula, es siempre una reforma pactada.

Lo que resulta importante, por ahora, es que para unas elecciones o una renegociación de pactos de transición, las fuerzas políticas requieren de una organización partidaria más coherente. El sandinismo y el antisandinismo están enfrascados en una batalla política que les ha desgastado frente a la población. Aunque la UNO, al quedar separada del gobierno desde 1990, ha podido explotar su condición de no gobernante, no ha podido articular sus demandas de manera eficaz en el tiempo y ello podría perjudicarle en un nuevo momento electoral. Los partidos integrados en la UNO han hecho poco para reorganizar sus propias agrupaciones partidarias. En el momento actual hay movimientos, todavía lentos, de recomposición de fuerzas polí-

ticas tradicionales. Las distintas facciones del Partido Liberal y del Partido Conservador se están alistando para lograr sus propias conciliaciones partidarias. Lo mismo está sucediendo con la democracia cristiana.

Divididos en multitud de facciones, casi familiares, esos partidos tradicionales tienen todavía una tarea de reunificación, antes de presentarse frente a la campaña electoral de 1996 pero ya están comenzando sus movimientos de alineación interna tanto en el liberalismo como en el conservadurismo y en los partidos democratacristianos. El caso más notable es el del Partido Liberal que pudo enfrentar con éxito al sandinismo en las elecciones de febrero de 1994 en la costa atlántica.

Después de un intenso y costoso proceso de polarización ideológica, corresponde a los partidos tradicionales reunificados la oportunidad de ofrecer alternativas a la población. La fragmentación partidaria y la creación de nuevos partidos resultó funcional en el pasado, pero no constituye una novedad atractiva para el futuro.

Así, en el momento actual, predomina la lucha organizada en el gobierno e influye las aspiraciones de los partidos y liderazgos políticos.

En el segundo momento, más lejano, se vislumbran dos grandes movimientos políticos, particularmente a partir de 1994. Ambos estarían localizados entre el centro y la derecha, más que entre sandinismo y antisandinismo. Esto quiere decir que el sandinismo tendrá que buscar una identidad política y que su oposición especialmente concentrada en los partidos liberal y conservador, respectivamente, recompondrá sus fuerzas sin los compromisos actuales de defender posiciones de transición que no le pertenecen.

Ambos movimientos son todavía inciertos en su diseño final, pero están ahí configurándose al amparo del desarrollo de los acontecimientos. El resurgimiento de los partidos tradicionales, liberales y conservadores, colocará la competencia electoral fuera del escenario de la versión opositora actual de la UNO. El gran perdedor de 1990, el sandinismo, buscará aliarse con algunos movimientos centristas.

Es evidente que la composición del gobierno de la señora Chamorro, como club de parientes y amigos de éstos, ha sido

benéfica para la oposición antisandinista pues la ha dejado libre de culpas en los acomodados de estos cuatro años. Después del sandinismo y del chamorrista, la oposición desligada de esos sectores, tendrá más opciones: el primer parámetro podría surgir si se realizaran las elecciones del Atlántico en los primeros meses de 1994.

Se observan algunas señales de acción política opositora en los partidos tradicionales, que podrían dar lugar a coaliciones partidarias nacionales. Beneficiándose del sentimiento antisandinista y antichamorrista, una coalición de esa naturaleza tendría a su favor muchos elementos prevaletentes en los próximos años.

Mientras más castigue a la oposición derivada de la resistencia y se siga asesinando a sus líderes, más se acumula el capital histórico de la resistencia al sandinismo y a sus allegados. En la actualidad el discurso político es intrascendente. En unos años tendrá más connotaciones doctrinarias, para lo cual la resistencia al sandinismo cuenta con más recursos que los actuales movimientos políticos.

Por su parte, el sandinismo no muestra todavía su nueva definición política, aunque muchos observadores lo vislumbran para 1996 con vestimenta socialdemócrata. No es muy seguro cómo puedan lograr, para entonces, alejarse de sus propias fuentes radicales, que serán precisamente las más desilusionadas al final de estos años del gobierno Ortega-Chamorro. Pero al mismo tiempo, como socialdemócratas tendrán serias dificultades para presentarse diferentes a sus similares incrustados actualmente en las filas gubernamentales.

Más bien la tentación sandinista de sobrevivir en su propia perspectiva radical,<sup>34</sup> puede provocar que fracasen los afanes que dentro de su partido intentan algunos de sus líderes para identificarse como una izquierda centrista.<sup>35</sup> La reaparición de aline-

<sup>34</sup> Tomás Borge declaraba: "...que sean otros los que renieguen de Marx, los que renuncien a la lucha antimperialista...", citado por *El Nuevo Diario*, Managua, 17 de julio de 1992, p. 1.

<sup>35</sup> Daniel Ortega se opuso a la campaña de "Lápiz y cuaderno a Cuba", organizada por sandinistas allegados a Borge, diciendo que esa campaña era "una trampa". La noticia hacía el contraste, refiriendo que Borge había donado varias toneladas de papel y Bayardo Arce, de la misma facción de Borge, había donado cuatro cajas de útiles escolares. Véase *El Nuevo Diario*, Managua, 17 de julio de 1992, p. 2.

mientos por tendencias no parece ser muy clara en este momento, en el que privan las pugnas por el reparto desigual entre los líderes y sus seguidores, pero puede aparecer más adelante fuera de las definiciones que tuvieron en el pasado.

Perdedores de todas maneras, los sectores más ortodoxos o radicales podrían arriesgar su destino sin buscar alianzas, tratando de retener para sí lo que consideran méritos del sandinismo histórico.<sup>36</sup> Los más moderados o que pretenden ahora presentarse y organizarse como tales, también tendrán que buscar una bandera centrista localizada fuera de sus filas.<sup>37</sup> En ambos casos, el sandinismo no parece ofrecer, en la perspectiva actual, la capacidad para imponer una contienda de sandinismo contra antisandinismo para 1996.

A pesar de las incertidumbres que vinculan un proceso político como el nicaragüense, y a pesar también de las incertidumbres que trae consigo, adicionalmente, la llegada de un gobierno estadounidense distinto al anterior en 1993, todo indica el fin de las luchas tipo africano que hemos visto en la política nicaragüense desde 1979.

### ¿HACIA ADÓNDE VA ENTONCES NICARAGUA?

A pesar de las noticias que lo contradicen en apariencia,<sup>38</sup> hay un agotamiento de la estrategia de acomodados continuistas con el

<sup>36</sup> Tomás Borge "se apuntó por un socialismo latinoamericano a lo nicaragüense donde lo fundamental sea el pensamiento de Sandino y Carlos Fonseca, sin ignorar las bases teóricas del socialismo mundial", citado por *El Nuevo Diario*, Managua, 17 de julio de 1992, p. 1.

<sup>37</sup> Daniel Ortega ha tendido a dar la imagen de colaborador del gobierno como si éste fuese, de algún modo, de frente nacional o de convergencia nacional. En ese sentido declaró que no había cogobierno con Chamorro sino una convergencia gobierno-FSLN como garantía de estabilidad nacional. Citado por *Barricada*, Managua, 10 de septiembre de 1992, p. 6; su hermano Humberto, de la misma facción, declaró: "En definitiva, nosotros no somos de ningún partido... ya desde antes de las elecciones veníamos luchando por independizar al ejército del FSLN", citado en *Barricada*, Managua, 10 de junio de 1992, p. 14. Aun cuando esas declaraciones e incidentes estuviesen dirigidos a confundir a la oposición, terminan confundiendo más a sus propios seguidores.

<sup>38</sup> "Más fuerza para el sandinismo", en *Miami Herald*, enero de 1992, p. 1.

sandinismo. Pero es una fatiga que no tiene, necesariamente, que reflejarse en un giro violento como el planteado por los opositores a la actual estrategia.

La retención de posiciones clave de poder, como la permanencia de Ortega y los juegos pirotécnicos que atraen la atención hacia asuntos simbólicos, como el enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, no logran ocultar que el sandinismo es hoy más vulnerable que en el pasado. La influencia política ha cambiado de lugar y sigue haciéndolo en una dirección favorable.

Las fuerzas sociales en las que el gobierno no podía, de entrada en 1990, apoyarse para aventurar un cambio intempestivo ya están en condiciones de ofrecer alternativas, como es el caso de los partidos, los empresarios, los trabajadores organizados fuera de los esquemas sandinistas y las clases medias profesionalizadas que están alejándose de sus compromisos con el sandinismo junto a las que están retornando del exilio. Pero es también un proceso que debe consolidarse antes de 1996.

Es difícil justificar que la urgencia de las tareas de reconciliación en una emergencia de transición política, como la ocurrida en 1990, dejó postergadas otras prioridades que hoy se imponen en la realidad nicaragüense. El deterioro económico y la gravedad del empobrecimiento de la población, son las señales de alarma que pueden derribar el delicado y frágil proceso político de Nicaragua, revirtiendo el proceso hacia un renovado autoritarismo.

*Nicaragua, el derrumbe negociado*  
se terminó de imprimir en octubre de 1994  
en Grupo Edición, S.A. de C.V.,  
Xochicalco 619, Vértiz-Narvarte, 03600 México, D.F.  
Se tiraron 500 ejemplares más sobrantes para reposición.  
Cuidó la edición el Departamento de Publicaciones  
de El Colegio de México.

## Centro de Estudios Internacionales

**E**n las investigaciones recientes sobre el cambio de régimen en el contexto de la guerra fría, el caso nicaragüense aquí investigado constituye un avance en el conocimiento de una de sus modalidades menos estudiadas: el derrumbe negociado.

¿Por qué y cómo ocurrió el derrumbe del régimen sandinista en Nicaragua? ¿Por qué el mandato electoral antisandinista no implicó un cambio automático del régimen por uno de signo opuesto? ¿Qué factores obligaron a la elección crucial de una estrategia de conciliación, en vez de una de confrontación? Para responder a estas preguntas, el libro se refiere a los efectos que tiene una negociación para poner fin a una guerra civil sobre un sistema político no consolidado, y a la selección entre una estrategia de confrontación y una de conciliación. El nuevo régimen opta por la segunda, abandonando el mandato de sus electores. Esto da lugar a una situación especial: los ganadores de las elecciones, en vez de pasar a formar un gobierno, pasan tempranamente a la oposición, y los perdedores a formar un cogobierno. Es en esa extraña realidad política, que se estudian los procesos que llevaron al derrumbe del sandinismo y al establecimiento del nuevo régimen, incluyendo un análisis sobre los primeros años del gobierno de Violeta Chamorro.



EL COLEGIO DE MÉXICO

